

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN  
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Vigésima Primera Reunión del Comité de Expertos  
Del 18 al 22 de marzo de 2013  
Washington, DC

OEA/Ser.L.  
SG/MESICIC/doc.359/12 rev. 4  
21 marzo 2013  
Original: español

REPÚBLICA DE COSTA RICA

INFORME FINAL

(Versión adoptada en la Sesión Plenaria del 21 de marzo de 2013)

## SUMARIO

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en Costa Rica del artículo III, párrafo 9, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; las buenas prácticas informadas por dichos órganos; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a Costa Rica en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité, y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de Costa Rica al cuestionario; la información recabada por la Secretaría Técnica; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita *in situ* realizada entre el 2 y el 4 de octubre de 2012 por los miembros del subgrupo de análisis de Costa Rica, integrado por Grenada y la República Dominicana, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Costa Rica y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores sobre temas útiles para el análisis, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas, facilitó la obtención de información sobre buenas prácticas, y brindó a Costa Rica la oportunidad de ofrecer y/o requerir asistencia técnica para los propósitos de la Convención.

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, en determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si éste es adecuado para los propósitos de la Convención, y si existen resultados objetivos; y, teniendo en cuenta lo observado, se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior de Costa Rica analizados en este informe son: la Procuraduría de la Ética Pública (PEP); la Contraloría General de la República (CGR); la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR); la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) del Ministerio Público (MP); y la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública del Poder Judicial.

Algunas de las recomendaciones formuladas para ser consideradas por Costa Rica en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

Proveer a los órganos de control con los recursos financieros y humanos necesarios para el cabal desarrollo de sus atribuciones y funciones; y hacer las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para obtener la cooperación técnica requerida por los mismos.

En cuanto a la PEP, fortalecer los mecanismos para suministrar información al público sobre sus funciones, incluyendo el portal en Internet de la misma; establecer mecanismos de capacitación sobre la figura del daño social; realizar un mayor seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones

emitidas por la institución; e incluir a los Procuradores de la Ética Pública en el régimen de declaraciones juradas de bienes.

Con respecto a la CGR, incrementar la cantidad de declaraciones juradas verificadas por la institución; establecer un programa de capacitación enfocado a la prevención de la corrupción; y establecer criterios y parámetros objetivos para la información básica contenida en las memorias de labores.

En lo atinente a la DHR, mantener resultados sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la DHR y considerar la necesidad de otorgarle un rango superior; establecer un programa de capacitación integral para los funcionarios de la institución; e incrementar la coordinación con el MP.

En relación con la FAPTA, considerar la creación de una unidad compuesta de investigadores especializados en materia anticorrupción; la posibilidad de asignar fiscales anticorrupción en todas las provincias del país; fortalecer el portal en Internet de la institución; y mantener resultados adicionales sobre el cumplimiento de las funciones de la institución.

En cuanto a la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, establecer un programa de capacitación para los jueces de la Jurisdicción; concientizar a los jueces sobre la figura del daño social; y vincularlos al sistema de declaraciones juradas de bienes.

Las buenas prácticas sobre las que Costa Rica suministró información se refieren, sintéticamente, a la recuperación del daño social en delitos de corrupción; el Programa de Nuevas Auditorías de la CGR; y el Proyecto de Oralidad y Moderna Gestión de Despachos Judiciales en el Juzgado Penal y el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a Costa Rica en la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por Costa Rica en su respuesta al cuestionario y en la visita *in situ*, se definieron cuáles de dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente; cuáles requerían atención adicional; y cuáles precisaban ser reformuladas, y se hizo un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como anexo I del presente informe.

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones se destaca el fortalecimiento de los mecanismos de consulta y para estimular la participación ciudadana en la gestión pública.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Costa Rica en la Primera Ronda que quedan vigentes, o que fueron reformuladas, apuntan a propósitos tales como, la adecuada verificación y publicación de las declaraciones juradas de bienes y la adopción de legislación integral sobre el acceso a la información.

**COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA  
CORRUPCIÓN**

**INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA  
EN LA CUARTA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES  
FORMULADAS A DICHO PAÍS EN LA PRIMERA RONDA<sup>1</sup>**

## **INTRODUCCIÓN**

### **1. Contenido del informe**

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis integral de la implementación en Costa Rica de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción que fue seleccionada por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Cuarta Ronda de Análisis. Dicha disposición es la prevista en el artículo III, párrafo 9, de la Convención, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

[2] En segundo lugar, aludirá a las buenas prácticas que en relación con los órganos de control superior objeto de análisis en el presente informe, el Estado analizado ha deseado voluntariamente compartir.

[3] En tercer lugar, de conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos del MESICIC en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a Costa Rica por el Comité de Expertos del MESICIC en el informe que adoptó para este país en la Primera Ronda, y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes que adoptó para el mismo en la Segunda y Tercera Rondas, los cuales se encuentran publicados en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/cri.htm>

### **2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo**

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, Costa Rica depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 9 de mayo de 1997.

[5] Asimismo, suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de junio de 2001.

---

1. El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 21 de marzo de 2013, en el marco de su Vigésima Primera Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 18 al 22 de marzo de 2013.

## I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

### 1. Respuesta de la República de Costa Rica

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de Costa Rica en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Procuraduría de la Ética Pública, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. Costa Rica envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos pueden consultarse en: [www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_cri.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_cri.htm)

[7] Asimismo, el Comité deja constancia que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*,<sup>2</sup> la cual se realizó del 2 al 4 de octubre de 2012, por parte de los representantes de Grenada y la República Dominicana, en su calidad de integrantes del Subgrupo de Análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*.

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Costa Rica hasta el 4 de octubre de 2012, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité; la Metodología para el Análisis de la Implementación de la Disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionada en la Cuarta Ronda; y la Metodología para la Realización de las Visitas *In Situ*.

### 2. Documentos y opiniones recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores

[9] El Comité también recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, un documento de la asociación “Costa Rica Íntegra (CRI)” y el Programa “Estado de la Nación”, que fue remitido por este último de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b) del Reglamento del Comité.<sup>3</sup>

[10] Asimismo, con ocasión de la práctica de la visita *in situ* realizada al Estado analizado del 2 al 4 de octubre de 2012, se recabó información de otras organizaciones de la sociedad civil y del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores que fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas in Situ*, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.

---

2. La Metodología para la Realización de las Visitas *In Situ* (documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2) está disponible en: [www.oas.org/juridico/spanish/met\\_insitu.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf)

3. Estos documentos se recibieron por vía electrónica el 7 de junio de 2012 y se encuentran disponibles en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_cri.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_cri.htm)

## **II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA:**

### **ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)**

[11] Costa Rica cuenta con un conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los que cabe destacar la Procuraduría de la Ética Pública (PEP); la Contraloría General de la República (CGR); el Ministerio Público (MP); la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública (Jurisdicción Penal de Hacienda); la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR); el Tribunal Supremo de Elecciones; las Auditorías Internas; las Contralorías de Servicios; el Tribunal de Servicio Civil y la Asamblea Legislativa.

[12] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cinco órganos seleccionados por Costa Rica que serán analizados en el presente informe:

[13] La PEP es la entidad encargada de realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción, incrementar la ética y la transparencia en la función pública, así como denunciar y acusar ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos y personas particulares cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de éste, en las materias que son competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública.

[14] La CGR es el órgano constitucional fundamental del Estado encargado del control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.

[15] El MP es el órgano del Poder Judicial que ejerce sus funciones en el ámbito de la justicia penal, con el propósito de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública. El MP cuenta con una unidad especializada en asuntos de corrupción denominada “Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción” (FAPTA). Corresponde a la FAPTA conocer de los delitos de corrupción más graves que involucran funcionarios públicos y/o particulares, así como de las causas donde figure como imputado un funcionario judicial. Esta estructura y la centralización de las investigaciones de funcionarios judiciales por actos de corrupción no sólo procura que se realice una investigación más eficiente y eficaz, sino persigue causar un efecto de prevención general.

[16] La Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública es la responsable de conocer y resolver, definitivamente, sobre los delitos contra los deberes de la función pública, entre otros delitos.

[17] La DHR ha sido establecida para proteger los derechos e intereses de los habitantes, velando porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia y a la Constitución Política, leyes, convenios, tratados y pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho; además de promocionar y divulgar los derechos de los habitantes.

## 1. PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA (PEP)

### 1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[18] La PEP cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[19] En cuanto a su estructura, la PEP forma parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias de su competencia (artículo 1º de la Ley No. 6815, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR)).

[20] En cuanto a sus objetivos y funciones, el artículo 3º, inciso h), de la LOPGR, adicionado por el artículo 1º de la Ley No. 8242, Ley de Creación de la Procuraduría de la Ética Pública, establece que las funciones de ésta incluyen la realización de las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública.

[21] Asimismo, en la respuesta del Estado analizado al cuestionario se indica que las funciones asumidas por la PEP incluyen: 1) recibir y tramitar denuncias administrativas por actos de corrupción, falta de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública; 2) efectuar acciones para capacitar y concientizar a los funcionarios públicos y la ciudadanía en general, sobre la temática de corrupción, ética y transparencia en la función pública; 3) canalizar la asistencia mutua y la cooperación técnica como autoridad central de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 4) denunciar y acusar, penalmente, a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, contrarios a los deberes de la función pública. 5) participar en los procesos penales más graves de corrupción, con el propósito de cobrar daño material y/o el daño social, si corresponde; o representar a la víctima del delito, e; 6) implementar las acciones administrativas necesarias para prevenir la corrupción, incrementar la ética y la transparencia en la función pública.<sup>4</sup>

[22] En cuanto a su autonomía, el artículo 1º de la LOPGR establece que la misma tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus atribuciones.

[23] Con respecto al ámbito de sus funciones, la PEP puede ejercer sus competencias respecto a cualquier funcionario o servidor del Estado, de la Administración central o descentralizada, así como contra las personas privadas que administren bienes o fondos públicos, reciban beneficios provenientes de subsidios o incentivos con fondos públicos o participen, de cualquier manera, en el ilícito penal cometido por funcionarios públicos.<sup>5</sup>

[24] En cuanto a las excepciones al ámbito de funciones descrito, el artículo 3º, inciso h), de la LOPGR expresa que la PEP debe realizar sus actividades sin perjuicio de las competencias que la ley otorga a la CGR. En este sentido, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado indica que la competencia de la PEP está circunscrita al ámbito de la función pública y excluye acciones o actuaciones tratándose de fondos públicos o del manejo de la Hacienda Pública. En la respuesta también se expresa que *“diferente resulta en el ámbito penal, porque la ley le permite a la PEP*

---

4. Ver respuesta de Costa Rica al cuestionario, p. 8, disponible en:

[http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_cri\\_resp\\_organos.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_cri_resp_organos.pdf). Ver también el artículo 3º, inciso h), de la LOPGR.

5. Ver el artículo 3º, inciso h), de la LOPGR.

*intervenir en procesos de asuntos lesivos de la Hacienda Pública, teniendo posibilidad de denunciar ante los Tribunales de Justicia a funcionarios públicos o personas privadas que hayan incurrido en cualquiera de los delitos contra los deberes de la función pública, y participar en los procesos penales en condición de víctima, querellante o actor civil, según corresponda.”<sup>6</sup>*

[25] Con respecto a la delineación entre las funciones de la PEP y la CGR, la Resolución No. 5090 de 2003 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ratificada en resoluciones subsecuentes, expresa en su parte pertinente, que “...el deslinde de las competencias con la Contraloría General de la República es evidente y suficiente, sin que se provoque ninguna incerteza o inseguridad para los administrados. Evidentemente, si se trata de la denuncia y acusación de una eventual figura delictiva que pueda reputarse como una manifestación de una acción u omisión corrupta de un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de éste, la Procuraduría de la Ética Pública será el órgano competente para hacerlo por expresa disposición de ley siendo el orden jurisdiccional llamado a conocer y resolver definitivamente el asunto el penal.”

[26] Otra excepción puesta de presente en la respuesta al cuestionario se refiere a las denuncias presentadas por parcialidad o beligerancia política de los servidores del Estado, prevista en el capítulo VIII del Código Electoral, que en su artículo 265 establece que las denuncias de esta naturaleza se formularán ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

[27] En cuanto a las funciones en concurrencia con otros órganos de control, el artículo 3º de la Ley No. 8242 establece que, con respecto a ciertas clases de delitos, incluyendo los de la hacienda y función pública, “...la Procuraduría General de la República también podrá ejercer directamente esa acción, sin subordinarse a las actuaciones y decisiones del Ministerio Público. En los asuntos iniciados por acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el presente Código le concede al Ministerio Público.”<sup>7</sup>

[28] Con respecto a las máximas autoridades de la PEP, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que al ser parte de la PGR, esas autoridades son el Procurador General, el Procurador General Adjunto y el Procurador Director de la PEP.<sup>8</sup>

[29] Por lo tanto, en cuanto a la designación del Procurador General, el artículo 10 de la LOPGR dispone que el mismo será designado por el Consejo de Gobierno y que deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa. El mismo artículo 10 prevé que el Procurador General durará en el cargo seis años y podrá ser reelegido mediante el mismo proceso descrito anteriormente. Para la remoción del Procurador General, este artículo establece que sólo podrá hacerse con base en causa justa y que requerirá la ratificación de la Asamblea Legislativa.

[30] Para el nombramiento de los funcionarios de la PEP, incluyendo al Procurador Director de la PEP, el artículo 35 de la LOPGR establece que “...el Procurador General –habiendo oído de previo al Procurador General Adjunto- escogerá a los servidores de la nómina que deberá enviar la Dirección General de Servicio Civil.”

---

6. Ver respuesta de Costa Rica al cuestionario, p. 12, *supra* nota 4.

7. En este sentido, en el marco de la visita *in situ*, los representantes de la PEP explicaron que en el sistema costarricense, existe la distinción entre una acusación penal, la cual es tramitada ante las cortes, y una denuncia penal, consistente en dar una “*noticia criminis*” a las autoridades competentes de la comisión de un aparente delito.

8. Ver respuesta de Costa Rica al cuestionario, p. 15, *supra* nota, 4.



[31] En cuanto a estos nombramientos, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que “*el Procurador General Adjunto de la República y el Procurador Director del Área de la Ética Pública son funcionarios de carrera administrativa, protegidos por el Régimen de Servicio Civil... de acuerdo con el numeral 11 de la Ley Orgánica de la PGR –Ley N° 6815-. Para su nombramiento, deben cumplir los requisitos exigidos en los artículos 20 y 22 del Estatuto de Servicio Civil... así como los previstos en la Ley N° 6815 –artículos 12 y 14-, para cada caso. Conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República –Ley N° 6815-, serán de selección del Procurador General...*”<sup>9</sup>

[32] Con respecto a lo anterior, durante la visita *in situ*, los representantes de la PEP explicaron que quienes ocupan actualmente los cargos de Procuradores, incluyendo a la actual Procuradora General y al Procurador Director de la PEP, fueron designados de entre Procuradores de la PGR. Señalando, por ejemplo, que la actual Procuradora General ha sido funcionaria de la PGR por más de 27 años.

[33] La LOPGR contiene los requisitos para ser funcionario de la PGR. El artículo 9° con respecto al Procurador General; el artículo 12 con respecto al Procurador General Adjunto y el artículo 14 con respecto a los Procuradores. Asimismo, el artículo 11 de la LOPGR establece que con la excepción del Procurador General, todos los funcionarios están sujetos al Régimen de Servicio Civil. En esta conexión, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que “*por tanto, deberán ser nombrados a base de idoneidad comprobada...*”<sup>10</sup> Por su parte, el artículo 192 constitucional dispone que, sujeto a las excepciones establecidas, “*...los servidores público serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa deservicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos.*”

[34] Adicionalmente, los funcionarios públicos de Costa Rica, incluyendo los de la PEP, están sujetos al mismo régimen general de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y de responsabilidad, incluyendo los contenidos en las Leyes contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento; de Contratación Administrativa y su Reglamento; General de la Administración Pública; de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, entre otras leyes, así como en el Código Penal, el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y las directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la CGR, las auditorías internas y servidores públicos en general (Directriz No. D-2-2004-CO); y el Decreto Ejecutivo No. 33146.

[35] Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, los representantes de la PEP detallaron las prohibiciones específicas para funcionarios de la institución contenidas en el artículo 28 de la LOPGR, incluyendo la prohibición absoluta de tomar parte en manifestaciones y otros actos públicos de carácter político electoral (artículo 28, inciso e).

[36] En relación con la manera en que adopta sus decisiones, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que la PEP adopta sus decisiones de manera colegiada. Durante la visita *in situ*, los representantes de la PEP explicaron que los Procuradores Directores revisan las decisiones tomadas por los Procuradores a su cargo.

[37] Con respecto a las acciones necesarias para hacer efectivas las decisiones de la PEP, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que “*...los informes y recomendaciones*

---

9. *Ibidem*, p. 16.

10. *Ibidem*, p. 18.

*emitidos como resultado de la tramitación de las denuncias administrativas son comunicados al órgano de la Administración a quien le corresponde darles cumplimiento. Además, son objeto de un proceso de seguimiento, por parte de los funcionarios de la PEP, que tiene como finalidad verificar la debida implementación.”<sup>11</sup>*

[38] Asimismo, con respecto a los recursos de revisión que proceden contra decisiones adoptadas, el artículo 25 del Decreto No. 32333, Reglamento de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, establece que *“contra el comunicado de resultados o informe de la investigación preliminar procederán únicamente la aclaración y la adición, en un plazo de tres días hábiles, misma que se podrá interponer ante el órgano competente que emitió los resultados finales, dicha solicitud, la podrá hacer la Administración Activa o quien demuestre interés legítimo ante el órgano que emita el resultado final de la investigación preliminar.”* Similarmente, el artículo 25 bis del mismo Reglamento dispone que *“contra la resolución que dicta el rechazo, archivo o desestimación de la denuncia, cabrá, por parte del denunciante, los recursos de revocatoria y apelación, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la comunicación, conforme al régimen de impugnación establecido en la Ley General de la Administración Pública.”*

[39] Con relación a los controles internos, la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno, en su artículo 8º, define el sistema de control interno como la serie de acciones ejecutadas por la administración activa<sup>12</sup> para proteger y conservar el patrimonio público contra pérdidas, despilfarros, uso indebido o actos ilegales (inciso a)), exigir confiabilidad y oportunidad de la información (inciso b)), garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones (inciso c)), y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico (inciso d)), entre otros aspectos. En este sentido, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que el sistema de control interno es responsabilidad de todos los funcionarios y que la PEP está sujeta a los lineamientos y control de la Auditoría Interna del Ministerio de Justicia.

[40] El artículo 12 de la Ley No. 8292 prevé entre los deberes de los jefes y titulares subordinados en el sistema de control interno, los siguientes: velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo (inciso a), tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades (inciso b), analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la CGR, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan (inciso c), asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos con las características definidas en el artículo 7º de esta Ley (inciso d), y presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la CGR y por los entes y órganos competentes de la administración activa (inciso e).

[41] Con respecto a los mecanismos para atender a reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y desempeño de su personal, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado señala que *“...en un primer momento son atendidas por el respectivo nivel de jefatura, con el fin de solventar la problemática planteada. En el caso que resulte necesario el establecimiento de un procedimiento administrativo sancionador y la imposición de sanciones administrativas, le corresponderá al Procurador General de la República –o al Procurador General Adjunto de la*

---

11. *Ibidem*, p. 14.

12. El inciso b) del artículo 2º de la Ley No. 8282 define la administración activa de la siguiente manera: *“...desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al jefe, como última instancia.”*

*República- si se trata de amonestación verbal o suspensión sin goce de salario, mientras que el despido, es de resorte del Ministro de Justicia y Gracia.”*<sup>13</sup>

[42] En cuanto a documentos y manuales que describen las funciones de su personal, existe el Manual Institucional de la PGR, el cual incluye una descripción y especificación de los puestos de Procurador Director y Procurador; el Manual Descriptivo de puestos del Servicio Civil, que contiene la misma información respecto a los puestos de abogados de procuraduría, auditor investigador de procuraduría y los asistentes de servicios administrativos; y el Manual de Clases Anchas del Servicio Civil.

[43] Con respecto a la capacitación impartida a funcionarios de la PEP, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado manifiesta que *“dentro del periodo 2007 al 2011, los funcionarios de la Procuraduría de la Ética Pública se han capacitado en diversos temas como por ejemplo: la ética pública, investigación sobre el lavado de Activos, el financiamiento del terrorismo, cómo prevenir riesgos financieros que podrían favorecer la corrupción, investigaciones sobre elementos contables como por ejemplo auditoría forense, cooperación jurídica internacional, entre otros.”*<sup>14</sup>

[44] En cuanto a la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas de la PEP, en 2006, la institución implementó una “guía interna para el trámite de una denuncia”, el cual elabora el procedimiento a seguir para el registro de las denuncias, el trámite de la investigación, los posibles resultados y el seguimiento de informes y recomendaciones. Asimismo, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que esta guía ha sido actualizada en dos oportunidades posteriores a su elaboración.<sup>15</sup>

[45] Con respecto al fortalecimiento institucional de la PEP, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado relaciona los siguientes hechos: 1) el acceso al Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI), el cual, entre otros, permite consultar en línea la legislación y jurisprudencia costarricense; 2) la publicación del “resumen gaceterio”, un documento que se envía diariamente a los funcionarios por correo electrónicamente y se publica en la página *Web* de la PGR, y que contiene leyes, proyectos de ley, decretos, reglamentos y otras normativas; 3) la revista electrónica institucional en donde se publican los pronunciamientos de la PEP y la normativa promulgada recientemente; y 4) el enlace “metabase.net” que es un servicio gratuito que permite ubicar en línea recursos bibliográficos de diversas bibliotecas nacionales e internacionales y en el que participa la PGR.

[46] Asimismo, en cuanto a la implementación y uso de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de sus labores, tanto en la respuesta al cuestionario como durante la visita *in situ*, se explica que los funcionarios de la PEP utilizan un programa computarizado que permite acceder a información sobre procesos judiciales en los que tiene participación la PEP. El sistema permite conocer, entre otra información, *“...la fecha de ingreso, el funcionario que lo tiene asignado, las acciones o actividades realizadas, brinda elementos para ubicar el expediente físico, permite conocer el estado en que se encuentra la gestión y da elementos para el seguimiento de las labores.”*<sup>16</sup> Además, en la respuesta se indica también que la PEP *“...ha dado pasos importantes en el desarrollo de sistemas que utilizan la firma digital, lo que permite brindar mayor seguridad y agilidad en sus productos. Sumado a ello, se implementó una plataforma de telefonía para lograr*

---

13. Ver respuesta de Costa Rica al cuestionario, p. 32, *supra* nota 4.

14. *Ibidem*, p. 23.

15. *Ibidem*, p. 25.

16. *Ibidem*, p. 26.

*pronto una cobertura del 100% en telefonía IP a nivel institucional, posibilitando a futuro agregar nuevos servicios de comunicaciones.”*<sup>17</sup>

[47] Con respecto a la manera de garantizar los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República determina los recursos presupuestarios de la PEP. El anteproyecto de esta Ley lo elabora el Ministerio de Justicia y Gracia del cual hace parte la PGR.

[48] Por cuanto a los mecanismos de coordinación con otros órganos del Estado y para obtener el apoyo de la ciudadanía para el cumplimiento de sus funciones, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado menciona la creación de una alianza estratégica entre la PGR, el MP, la CGR y el Instituto Costarricense sobre Drogas, para establecer una coordinación interinstitucional de asistencia y cooperación para enfrentar la corrupción.<sup>18</sup> En este contexto, las anteriores cuatro instituciones firmaron una carta de intención en junio de 2010, creando, en 2012, una comisión interinstitucional, conformada por un representante de cada una de estas instituciones.

[49] Asimismo, la Procuradora General de la República representa a la PGR en la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), la cual, según el Decreto Ejecutivo No. 3498-J, tiene entre sus principales funciones, establecer, recomendar o procurar los medios, actividades y procedimientos para que los organismos relacionados con la administración de justicia coordinen sus acciones y programas (artículo 2º, inciso a); concientizar y coordinar los esfuerzos destinados al mejoramiento del sector de justicia (artículo 2º, inciso b); y promover la formación y la participación ciudadana de los y las habitantes en materias atinentes a la justicia.

[50] En relación con los mecanismos de rendición de cuentas de la PEP, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que esto se realiza a través del informe de labores anual de la PGR, el cual es publicado en Internet y que incluye, entre otros, “...una referencia a la creación de la PGR, enumeración de su misión, visión y funciones, descripción de su organigrama, descripción de sus objetivos estratégicos, así como una recopilación de las acciones ejecutadas durante el año, por cada una de las unidades que la compone, incluida la PEP.”<sup>19</sup> Al respecto, la PGR cuenta con un portal en Internet, disponible en [www.pgr.go.cr](http://www.pgr.go.cr), el cual, entre otros aspectos, contiene información sobre el marco legal de la PGR y sus distintas áreas (incluyendo la PEP), la capacitación provista por sus distintas áreas (incluyendo la PEP), el portal del SINALEVI, la Revista Digital y el Resumen Gacetario.

[51] Asimismo, respecto de la manera de suministrar información a los ciudadanos, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que se hace a través de cuatro mecanismos:<sup>20</sup> 1) portal en Internet de la PGR; 2) las actividades de capacitación que brinda la PEP a los funcionarios públicos y a la sociedad civil; (3) la atención al público por teléfono y en persona; y 4) a partir de la prensa.

---

17. *Ibidem*, p. 25.

18. *Ibidem*, p. 34.

19. *Ibidem*, p. 36.

20. *Ibidem*, p. 29.

## 1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[52] La PEP cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 de este Informe. Sin embargo, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[53] Primero, con respecto a los mecanismos para suministrar información a los ciudadanos acerca de los objetivos y funciones de la PEP y de la forma de realizar gestiones ante la misma, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que esto se realiza, en parte, a través del portal en Internet de la PGR. Al respecto, el Comité observa que la PEP no cuenta con un portal en Internet propio y que la única información relacionada con la PEP disponible en el portal de la PGR son las presentaciones de capacitación preparadas por funcionarios de la PEP y el apartado sobre la PEP en la memoria anual de la PGR.

[54] Sobre este tema, en el documento presentado por el “Programa Estado de la Nación” y la asociación “Costa Rica Íntegra” como organizaciones de la sociedad civil, se señala que “...*hacia el público no se ha promocionado suficientemente [a la PEP] como la institución encargada de atender denuncias de corrupción.*”<sup>21</sup> En este sentido, el Comité observa que en el portal en Internet de la PGR no existe ninguna forma de presentar denuncias o quejas en línea.

[55] A la luz de lo anterior, el Comité considera importante que el Estado analizado adopte las medidas que considere necesarias para fortalecer los mecanismos existentes para suministrar información a los ciudadanos acerca de los objetivos y funciones de la PEP, así como sobre la forma de presentar denuncias ante la misma. Además, el Comité estima que sería conveniente establecer un mecanismo que permita denunciar en línea, teniendo en cuenta que el artículo 8° del Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública permite que las denuncias puedan presentarse por cualquier medio. El Comité formulará recomendaciones al respecto. (Ver recomendaciones 1.4.1 y 1.4.2 del capítulo II de este informe)

[56] Segundo, el Comité observa que en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado expresa como dificultades para el logro de los propósitos de la PEP, entre otros, la “...*carencia de los recursos humanos y económicos necesarios para el desarrollo de una mayor diversidad de acciones de prevención de la corrupción, así como la falta de una mayor capacitación técnica del personal para efectuar actividades en ese ámbito.*”<sup>22</sup> En un sentido similar, en el documento presentado por el “Programa Estado de la Nación” y la asociación “Costa Rica Íntegra”, como organizaciones de la sociedad civil se indica que las labores de coadyuvante en casos judiciales de corrupción de alto perfil ha absorbido una buena parte de los escasos recursos de la PEP, y que esto ha “...*dejado en un papel muy marginal sus otras labores de prevención y de incrementar la ética pública y la transparencia; con las cuales se suponía que se iba a diferenciar de las otras entidades de control existentes.*”<sup>23</sup>

[57] También, con respecto a los recursos de la PEP, durante la visita *in situ*, un profesor universitario anotó que la PEP carece de profesionales especializados en distintas materias, tales

---

21. Ver documento presentado por el “Programa Estado de la Nación” y la asociación “Costa Rica Íntegra” como organizaciones de la sociedad civil, p. 19, disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_cri\\_sc\\_inf.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_cri_sc_inf.pdf)

22. Ver respuesta de Costa Rica al cuestionario, p. 63, *supra* nota 4.

23. Ver el documento presentado por “Estado de la Nación” y “Costa Rica Íntegra”, como organizaciones de la sociedad civil, p. 19, *supra* nota 21.

como ingenieros o auditores y que contar con tales funcionarios, además de abogados y procuradores, sería de gran utilidad para la PEP en la investigación de casos financieros o de otra índole. Atado a lo anterior, durante la visita *in situ*, se observó que la PEP pareciera también carecer de una infraestructura física adecuada y suficiente, particularmente considerando que es una institución que atiende consultas del público. (Véase la recomendación 1.4.3 en el capítulo II de este informe).

[58] Tercero, otra dificultad puesta de presente en la respuesta al cuestionario tiene que ver con la figura de la acción civil por daño social, con respecto a la cual, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado señala la necesidad de “...*fortalecer el mecanismo de delimitación del daño social, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, de tal forma que permita, mediante un fórmula generalizable, la estimación correspondiente en cada caso concreto; asimismo, puede beneficiarse con el diseño de una estrategia que informe a los operadores de justicia y la sociedad civil en general, sobre su fundamento jurídico, los objetivos que persigue, y principalmente, hacer conciencia sobre la dimensión del daño social que provocan los actos de corrupción, y la necesidad de establecer su debida reparación.*”<sup>24</sup> El Comité formulará recomendaciones tomando en cuenta estas dificultades. (Véase las recomendaciones 1.4.4 y 5.4.3 en el capítulo II de este informe).

[59] Cuarto, el Comité considera que sería útil, en vista de lo anterior, que los jueces a cargo del juzgamiento de los delitos de corrupción sean informados acerca del fundamento jurídico y los objetivos de la figura del daño social, entre otros. El Comité formulará una recomendación en este sentido, en el apartado correspondiente a la Jurisdicción Penal de Hacienda (Véase la recomendación 5.4.3 en el capítulo II de este informe).

[60] Quinto, en la respuesta al cuestionario también expresa que la cooperación técnica sería muy útil para superar las dificultades relacionadas con la falta de recursos y fortalecer el mecanismo de delimitación del daño social tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. El Comité formulará recomendaciones tomando en cuenta estas necesidades. (Véase la recomendación 1.4.5 en el capítulo II de este informe).

### **1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

[61] En la respuesta del Estado analizado al cuestionario y en la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados que ha obtenido la PEP en el cumplimiento de sus funciones, entre la que se destaca la siguiente:

[62] En primer lugar, respecto a las acciones relacionadas con la prevención de prácticas corruptas, en su respuesta al cuestionario, Costa Rica explica que “*dentro de las campañas de divulgación de las consecuencias que las prácticas corruptas acarrearán, se ubica el posicionamiento del concepto del daño social. La PEP tuvo la iniciativa de plantear, en el año 2004, por primera vez dentro de un proceso penal, un reclamo civil con el fin de obtener resarcimiento por el daño social provocado por la comisión de actos de corrupción. La gestión, además del objetivo procesal, tuvo un propósito extraprocesal, concientizar a la colectividad sobre la afectación social que provoca la corrupción en el sistema, en aspectos tales como: la pérdida de credibilidad y respeto en las instituciones, el debilitamiento del sistema democrático, el deterioro en el nivel de bienestar de la población, el subdesarrollo que genera, etc. La labor de posicionamiento del concepto de daño social ha venido siendo desarrollada mediante la interposición de demandas por daño social en procesos penales por delitos contra los deberes de la función pública, la impartición de charlas que explican el*

---

24. Ver la respuesta de Costa Rica al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 63, *supra* nota 4.

*fundamento y alcances de la iniciativa, y por medio de la exposición del planteamiento en los distintos medios de prensa.”*<sup>25</sup>

[63] Con respecto a las acciones relacionadas con el daño social, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado indica que las mismas han permitido la recuperación de US \$15,741,461.59.<sup>26</sup>

[64] En la respuesta de Costa Rica también se pone de presente que la PEP realiza programas de concientización dirigidos a los funcionarios públicos y también a la sociedad civil.<sup>27</sup> Asimismo, la PEP cuenta con un programa de capacitación permanente para las instituciones que presentan un alto riesgo de corrupción, el cual “... pretende concientizar sobre el ejercicio ético de la función pública, que incluye temas tales como: “Ética y Probidad en el ejercicio de la Función Pública”, “Responsabilidad penal y la Ley 8422”, “La denuncia de actos de corrupción”, “Delitos por los que la PEP puede denunciar y acusar a los funcionarios”, “Compromisos de Costa Rica producto de la suscripción a los convenios internacionales en materia de corrupción”, “Fortalecimiento de Valores Personales y Sociales relacionados con la Ética Pública”, “Prohibiciones para ejercer profesiones liberales e incompatibles”, “Daño Social”, entre otros.”<sup>28</sup>

[65] También, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado incluye un cuadro que muestra el número total de charlas, conferencias, seminarios y cursos impartidos por la PEP en el área de prevención de la corrupción entre 2007 y 2011. Este cuadro indica que en este periodo se han capacitado a más de 3 mil funcionarios provenientes de 71 instituciones, incluyendo ministerios e instituciones autónomas y privadas. Asimismo, en la respuesta se pone de presente que se han efectuado programas de capacitación especiales, dirigidos a organizaciones públicas vulnerables.

[66] La PEP, como parte de su función preventiva, ha emitido alertas de riesgos de corrupción a través de “acciones de recomendación”, que son advertencias dirigidas a la Administración Pública para la realización de alguna actividad determinada para incrementar la ética y la transparencia en la función pública. Durante los últimos dos años, la PEP ha emitido un total de 37 de estas acciones de recomendación.

[67] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa además sobre la atención brindada por la PEP vía telefónica o en persona, a dudas y consultas formuladas por funcionarios públicos y sociedad civil en general. Esto “consiste en el relato de la situación presuntamente corrupta por el usuario al funcionario de la PEP, para que este último le brinde la guía de cómo atender su problemática y, si es del caso, se le consigna los hechos para tramitarlo como denuncia.”<sup>29</sup> En la respuesta igualmente se incluye un cuadro que muestra que entre 2007 y 2011, la PEP atendió un total de 204 consultas en persona y 379 vía telefónica.<sup>30</sup>

[68] En segundo lugar, en cuanto a las funciones de la PEP relacionadas con la investigación y detección de actos de corrupción, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado incluye el

---

25. Ver la respuesta de Costa Rica al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 39, *supra* nota 4.

26. *Ibidem*, p. 65.

27. *Ibidem*, p. 39.

28. *Ibidem*, p. 39. También ver <http://www.pgr.go.cr/capacitacion/Etica.html>

29. *Ibidem*, p. 41.

30. *Ibidem*.

siguiente cuadro que muestra los resultados de las denuncias tramitadas por la PEP por actos de corrupción cometidos en la función pública.<sup>31</sup>

Estado de las Gestiones	2007	2008	2009	2010	2011
Rechazadas	29	91	70	78	85
Desestimadas	13	10	21	17	19
Informe con recomendación	13	15	16	8	22
Remitido a autoridad competente	11	10	13	6	2
Resolución con recomendación	5	3	3	7	7
Investigación preliminar	0	0	0	0	5
<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>129</b>	<b>123</b>	<b>116</b>	<b>140</b>

[69] Con respecto al anterior cuadro, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado indica que *“dentro de los principales temas que analiza la PEP, en su labor de atención de denuncias se encuentran: Conflictos de intereses, violaciones al deber de probidad, violaciones al régimen de prohibiciones e incompatibilidades, falta de transparencia, nombramientos ilegales, aprovechamientos indebidos, delitos contra la función pública, entre otros.”*<sup>32</sup>

[70] Asimismo, en la respuesta del Estado analizado se pone de presente que doce de las investigaciones realizadas por la PEP durante el período 2007 a 2011 resultaron en la interposición de denuncias ante el MP por delitos cometidos en contra de la función pública.<sup>33</sup>

[71] En este sentido, cabe aclarar que si bien la Ley No. 8242 faculta a la PEP a promover la acción penal relacionada con delitos en contra de la función pública directamente ante los órganos jurisdiccionales, los representantes de la PEP, con ocasión de la visita *in situ*, manifestaron que en todos los casos en los cuales han presentado una denuncia penal ante el MP, éste en todos los casos ha dado trámite a las denuncias penales presentadas por la PEP. Asimismo, explicaron que aunque no ha ocurrido aun, en el supuesto de que el MP decidiera no presentar la acusación penal o solicitara la desestimación de un proceso activo, la PEP podría decidir por su parte, presentar o mantener la acción, según corresponda.

[72] En tercer lugar, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que aunque la PEP no es responsable por la imposición de sanciones, sí *“...tiene participación en los procesos penales*

31. *Ibidem*, p. 46. Con respecto a este cuadro, la respuesta de Costa Rica al cuestionario prevé la siguiente clarificación: *“Para comprender la tabla, es necesario indicar que las denuncias son “Rechazadas” cuando no cumplen con las hipótesis contenidas en el artículo 17 del Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública –Decreto N°32333-, o bien, cuando por motivos ajenos al actuar de la Procuraduría de la Ética no se logra continuar con la investigación, sin que ello impida reiniciarla en otro momento. Las denuncias “desestimadas” son aquellas en las cuales, una vez finalizada la investigación correspondiente, no se logran identificar actuaciones corruptas, carentes de ética o transparencia relacionadas con los hechos investigados. Las denominadas como “Informe con Recomendación”, corresponden al trámite de una investigación donde se detectaron aparentes conductas contrarias a la ética y transparencia, informes que son comunicados a las instancias correspondientes a efecto de que realicen los procedimientos previstos en procura de responsabilizar a sus autores. En las categorizadas como “Remitidas autoridad competente”, se agrupan las gestiones sobre las cuales se realiza una valoración en la etapa de admisibilidad, sin embargo por motivos de competencia, se remiten a otra institución que será la Autoridad competente para el respectivo trámite. En las descritas como “Resolución con recomendación”, si bien no se determinan actuaciones corruptas, carentes de ética o transparencia relacionadas con los hechos investigados, lo cierto es que se detectan actuaciones que pueden propiciar estas conductas, por la cual se emiten “Acciones de Recomendación” que comprenden lineamientos dirigidos a la Administración Activa para que implemente de mejor manera mecanismos, procesos o el control interno.”*

32. *Ibidem*, p. 47.

33. *Ibidem*.



*seguidos por delitos contra los deberes de la función pública, de modo activo, para comprobar la comisión del delito y la imposición de la sanción penal o civil, según corresponda. La participación de la PEP, dentro de los procesos penales, puede presentarse bajo la condición de víctima, querellante, actor civil por daño material o actor civil por daño social.”*<sup>34</sup>

[73] Con respecto a lo anterior, en la misma respuesta se relaciona que “*la PEP fue notificada, durante el año 2011 de 1119 asuntos tramitados en el Ministerio Público por delitos del grupo mencionado, en el año 2010 un total de 1060, en el año 2009 un total de 825, en el año 2008 un total de 607, y en el 2007 se recibieron un total de 472 notificaciones relativas a asuntos nuevos.*”<sup>35</sup>

[74] Con respecto a las anteriores cifras e información, el Comité observa que desde su creación, la PEP ha venido desarrollando una variedad de actividades importantes para la prevención, investigación y detección de actos de corrupción en la función pública. Sin embargo, con respecto al cuadro de resultados sobre las denuncias por corrupción tramitadas por la PEP, el Comité observa que en la respuesta al cuestionario sólo se identifican los tipos de violaciones que dieron lugar a esas denuncias de forma general y desagregada. El Comité considera que sería útil, especialmente en lo que se refiere a las funciones de la PEP relacionadas con la prevención de actos de corrupción, que ésta mantenga las estadísticas que muestran no sólo los resultados de las denuncias en general, sino también el número de cada tipo de violación que se identifica. Esta información podría ser útil para la PEP en la determinación de las áreas que deben recibir mayor atención y enfoque en cuanto a sus actividades de prevención. El Comité formulará una recomendación al respecto. (Véase la recomendación 1.4.6 en el capítulo II de este informe).

[75] Asimismo y en relación con la función de la PEP consistente en la emisión de informes a la Administración Pública, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado indica que en el período 2007 a 2011 se emitieron 74 informes con recomendación de apertura de procedimiento administrativo disciplinario. Además, durante la visita *in situ* se explicó que la PEP hace un seguimiento de la implementación por parte de las instituciones de las recomendaciones emitidas. Sin embargo, el Comité no cuenta con estadísticas que muestren ese seguimiento, ni el número de esas recomendaciones que han sido acatadas. Contar con información sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la PEP podría ser muy valioso, particularmente cuando se suma a la opinión expresada en el documento de la asociación “Costa Rica Íntegra” remitido por el Programa “Estado de la Nación” en el sentido de que no contar con facultades de sanción resulta en una debilidad para la institución. El Comité formulará una recomendación sobre este punto. (Véase la recomendación 1.4.7 en el capítulo II de este informe).

#### **1.4. Conclusiones y recomendaciones**

[76] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la PEP en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[77] **Costa Rica ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la PEP, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

---

34. *Ibidem*, p. 49.

35. *Ibidem*.

[78] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 1.4.1. Fortalecer los mecanismos de información sobre la PEP, a través de la creación de una sección específica de este órgano en el portal en Internet de la PGR para este propósito, y adoptar las medidas que se estimen necesarias para que este portal sea efectivamente una herramienta útil para la disseminación de información sobre la entidad, el tipo de denuncias que son de su competencia, la forma de realizar gestiones ante la misma y del proceso de rendición de cuentas, entre otros aspectos. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.2. Establecer la posibilidad de presentar denuncias de actos de corrupción en la función pública vía Internet. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.3. Dotar a la PEP con los recursos humanos y financieros, así como de infraestructura física necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones, particularmente las relacionadas con la prevención, detección e investigación de actos de corrupción, dentro de los recursos disponibles. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.4. Adoptar las medidas necesarias para lograr el establecimiento de mecanismos adecuados que permitan delimitar la estimación del daño social, para los casos concretos, y así fortalecer la aplicación de esta buena práctica. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.5. Cuando corresponda, buscar la cooperación técnica necesaria de otros Estados y organismos de cooperación para que la PEP pueda superar las dificultades relacionadas con la falta de recursos y fortalecer el mecanismo de delimitación del daño social, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.6. Mantener estadísticas que muestren no sólo la resolución de las denuncias que tramita la PEP, sino también el número de cada tipo de falta administrativa que se identifica mediante la investigación de las denuncias, para determinar las áreas que deberían recibir mayor atención y enfoque. (Véase Sección 1.3. Del Capítulo II de Este Informe).
- 1.4.7. Elaborar información estadística relativa al seguimiento y nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la PEP, para así determinar si sería conveniente que la PEP cuente con facultades de carácter sancionatorio. (Véase sección 1.3. del capítulo II de este informe).

## **2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)**

### **2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[79] La CGR cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[80] El artículo 183 constitucional crea la CGR como un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa para la vigilancia de la Hacienda Pública, concediéndole absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.

[81] El artículo 184 constitucional asigna los siguientes deberes y atribuciones a la CGR: 1) fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; 2) examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación; 3) enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y sugerencias que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos; 4) examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los funcionarios públicos y; 5) las demás que la Constitución o las leyes le asignen.

[82] Asimismo, el Estado analizado indica que el sistema jurídico de Costa Rica reconoce las siguientes cinco principales áreas de funciones de la CGR: 1) la fiscalización posterior del manejo de los fondos públicos, que incluye la auditoría y la evaluación, 2) la materia sancionatoria, 3) la fiscalización previa en materia presupuestaria y de contratación administrativa, 4) la función consultiva y asesora en lo referente a fondos públicos y, 5) el ejercicio de un órgano administrativo que resuelve gestiones como jerarca impropio bifásico, es decir, un órgano que agota vía administrativa fuera de la administración que tramita la contratación.

[83] En cuanto al ámbito de sus funciones, el artículo 4º de la Ley No. 7428, Ley Orgánica de la CGR (LOCGR), prevé que la CGR ejercerá su competencia sobre los entes y órganos que integran la Hacienda Pública, con competencia facultativa sobre los entes públicos no estatales (inciso a); los sujetos privados que sean custodios o administradores de los fondos y actividades públicos que indica esta Ley (inciso b); los entes y órganos extranjeros integrados por entes u órganos públicos costarricenses, dominados mayoritariamente por éstos, o sujetos a su predominio legal, o cuya dotación patrimonial y financiera esté dada principalmente con fondos públicos costarricenses, aun cuando hayan sido constituidos de conformidad con la legislación extranjera y su domicilio sea en el extranjero; si se trata de entidades de naturaleza bancaria, aseguradora o financiera, la fiscalización no abarcará sus actividades sustantivas u ordinarias (inciso c); las participaciones minoritarias del Estado o de otros entes u órganos públicos, en sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras, de conformidad con la Ley (inciso d)). El mismo artículo 4º dispone que los criterios emitidos por la CGR en el ámbito de su competencia serán vinculantes para los sujetos sometidos a su control o fiscalización.

[84] El artículo 5º de la LOCGR dispone que también estará sujeto a la fiscalización facultativa de la CGR, *“todo otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación alguna, y toda liberación de obligaciones, por los componentes de la Hacienda Pública, en favor de un sujeto privado...”* Por su parte, el artículo 6º expresa que el control sobre fondos y actividades privadas *“será de legalidad, contable y técnico y en especial velará por el cumplimiento del destino legal, asignado al beneficio patrimonial o a la liberación de obligaciones.”*

[85] Cabe señalar que durante la visita *in situ*, los representantes de la CGR explicaron que esta institución no aprueba los presupuestos de los ministerios, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la TSE, ni del régimen de pensiones.

[86] En cuanto a la toma de decisiones en la CGR, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que *“en lo sustantivo, la mayor parte de las decisiones son adoptadas de forma colegiada, como por ejemplo, en materia de contratación administrativa, consultiva, de procedimientos administrativos. Tratándose de estudios de fiscalización, si bien las notas de remisión son suscritas por los respectivos gerentes, lo cierto es que son producto de un trabajo de equipo, con decisiones consensuadas.”*<sup>36</sup> En la respuesta también se informa que las competencias técnicas están delegadas en tres divisiones orientadas a la labor sustantiva, a saber: la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, la División Jurídica y la División de Contratación Administrativa. La CGR también cuenta con la División de Gestión de Apoyo que incluye las unidades Jurídica Interna, Gestión de Potencial Humano, Gestión Administrativa, Gestión Administración Financiera, Centro de Capacitación, Tecnologías de Información y Servicios de Información. Adicionalmente cuenta con la Unidad de Gobierno Corporativo, Unidad de Prensa y Comunicaciones y la Unidad de Auditoría Interna que dependen del Despacho Contralor.<sup>37</sup>

[87] Asimismo, con respecto a los recursos de revisión que proceden contra las decisiones adoptadas por la CGR, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado indica que *“las decisiones tomadas por la CGR, salvo excepciones legales, como es el caso del régimen de contratación administrativa, el refrendo de contratos administrativos y los actos relacionados con la materia presupuestaria, están sometidas al régimen de impugnación ordinario previsto en la Ley General de la Administración Pública –Ley N° 6227-. Los recursos de apelación y revisión de actos, son conocidos directamente por el Despacho Contralor, garantizando así el ejercicio de una doble instancia. Finalmente, como cualquier acto administrativo, las decisiones que emite este órgano contralor son revisables en sede judicial.”*<sup>38</sup>

[88] Con respecto a sus máximas autoridades, el artículo 183 constitucional establece que la CGR estará a cargo de un Contralor y un Subcontralor nombrados por la Asamblea Legislativa por un periodo de ocho años. El mismo artículo prevé que ambos funcionarios responden a la Asamblea Legislativa y podrán ser removidos por el voto de las dos terceras partes de la misma en caso de ineptitud o proceder incorrectos.

[89] Por su parte, los artículos 39 y 40 de la LOCGR establecen respectivamente los requisitos e impedimentos para ser nombrado y ejercer los cargos de Contralor y Subcontralor.

[90] En cuanto a sus funcionarios, la CGR cuenta con un Estatuto Autónomo de Servicios, establecido para regular la relación de empleo entre ésta y sus servidores. El artículo 10 del Estatuto establece cinco categorías de servidores, a saber: dirección superior (Contralor y Subcontralor), confianza, gerencial, regular y servicios especiales. Asimismo, establece las siguientes formas de nombramiento de cada categoría de servidor: dirección superior, nombrados por la Asamblea Legislativa (artículo 11); confianza, de libre nombramiento y remoción del Contralor General (artículo 12); gerencial, nombrados conforme al procedimiento de selección que se establezca (artículo 13); regular, nombrados después de la demostración de idoneidad a través de concurso (artículo 14); servicios especiales, nombrados después de la verificación de cumplimiento de los requisitos de idoneidad por la Unidad de Recursos Humanos (artículo 15).

[91] Con respecto a la permanencia de los funcionarios en la CGR, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado indica que *“...gozan de estabilidad laboral, puede ser destituidos, únicamente,*

---

36. *Ibidem*, p. 14.

37. *Ibidem*.

38. *Ibidem*.

*por las causas previstas por ley y siguiendo el procedimiento administrativo respectivo, que a su vez está sujeto a las reglas del debido proceso; lo anterior, con la salvedad de los cargos de confianza. Para optar por algún puesto se requiere que el candidato cumpla con el perfil del puesto que se indica en el Manual de Perfiles de Puestos, según sea el caso.”*<sup>39</sup> En este sentido, el artículo 47 de la LOCGR dispone que “los servidores de la Contraloría General sólo podrán ser removidos por justa causa, por supresión de plaza, debidamente justificadas por escrito en el expediente respectivo.”

[92] Asimismo, con respecto al régimen aplicable a los funcionarios de la CGR, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado indica que “*al igual que los funcionarios de la PEP, los de la CGR están sometidos al régimen general de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y de responsabilidad. Asimismo, se encuentran obligados a cumplir con el régimen institucional, compuesto por el Estatuto Autónomo de Servicios que regula obligaciones y prohibiciones particulares, el Marco Ético institucional que declara los principios éticos que deben de informar las conductas y actuaciones de todos aquellos que por imperativo constitucional tienen a cargo la vigilancia de la Hacienda Pública, y el Código de Conducta que establece un conjunto básico y prioritario de conductas que guían el accionar de la CGR en procura de una cultura institucional basada en altos valores éticos, orientados a lograr una gestión transparente, íntegra y responsable.*”<sup>40</sup>

[93] En cuanto a documentos y manuales que describen las funciones de su personal, la CGR cuenta con el Manual de Perfiles de Puestos, el cual describe las características de trabajo de cada unidad, área y división de la institución. Este Manual describe en detalle 54 puestos de trabajo y de acuerdo con la respuesta al cuestionario, la información del Manual es un insumo para la elaboración de planes de capacitación para el personal.<sup>41</sup>

[94] El artículo 57 de la LOCGR crea el Centro de Capacitación de la CGR para el entrenamiento de sus funcionarios y otros servidores de los sujetos pasivos, en materias atinentes a su competencia. De acuerdo con la respuesta al cuestionario, “*el Centro de Capacitación trabaja a partir de un diseño anual, que se define según los requerimientos institucionales.*”<sup>42</sup>

[95] Asimismo, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que la “*CGR ejecuta otras funciones relacionadas con el ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Control, y la capacitación externa al sector público en materias vinculadas con el control interno y la gestión pública eficiente y proba, entre otras.*”<sup>43</sup>

[96] En relación con procedimientos documentados para el desarrollo de sus tareas, la CGR cuenta también con el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI), para cumplir con sus objetivos de fiscalización superior de la Hacienda Pública y que sirve como “*...la base para el desarrollo de la documentación relativa a los procedimientos y registros que conforman cada una de las actividades de los procesos de la institución.*”<sup>44</sup> Entre otra información, el MAGEFI incluye detalles sobre los macroprocesos relacionados con la fiscalización integral, gobierno corporativo, gestión de conocimiento y la gestión de recursos. Con respecto a los macroprocesos de fiscalización integral, el Manual contiene procesos detallados de fiscalización previa y posterior, procedimientos

---

39. *Ibidem*, p. 19.

40. *Ibidem*.

41. *Ibidem*, p. 23.

42. *Ibidem*.

43. *Ibidem*, p. 9.

44. *Ibidem*, p. 26.

administrativos, asesoría sobre la Hacienda Pública y capacitación. Asimismo, la CGR cuenta con una metodología para el desarrollo de proyectos de tecnología de información y comunicaciones, que detalla las actividades relacionadas con el adecuado control de los proyectos.

[97] Con respecto a las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad implementada, la CGR está trabajando en una “mesa de servicio” para dirigir la forma en que se atienden las necesidades de los usuarios de tecnologías de información y comunicación.

[98] Para facilitar el desarrollo de sus labores, la CGR ha implementado varios sistemas informáticos, tales como el Sistema de Planes Presupuestos Públicos (SIPP), el Sistema de Actividad Contractual (SIAC), el Sistema de Gestión Institucional (SIGI), el Sistema de Fiscalización Posterior (FIPNET), el Sistema Integrado de Recursos Humanos y el Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública (SIRSA).

[99] Otras acciones referentes a la implementación de tecnologías modernas puestas de presente en la respuesta al cuestionario incluyen el desarrollo de sistemas que utilizan la firma digital, de tecnologías tendientes a establecer un *data center* con una amplia cobertura de red inalámbrica en la sede central de la CGR, el proceso de actualización de la plataforma de telefonía para una cobertura del 100% en telefonía *IP* a nivel institucional.

[100] Respecto de la manera de suministrar información a los ciudadanos, la CGR cuenta con una página en Internet en [www.cgr.go.cr](http://www.cgr.go.cr), la cual contiene información detallada sobre las actividades de la CGR. Asimismo, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que en “*las secciones de su página web denominadas: “Conózcamos” y “Contraloría Transparente”...se encuentra información sobre las principales funciones de la CGR, las ideas rectoras de la Institución, la normativa legal que le da sustento, y la conformación de su estructura orgánica. En la sección “Contraloría Transparente” los ciudadanos pueden conocer sobre sus planes, informes de rendición de cuentas, información de los estados financieros, remuneraciones y beneficios, plan de compras, entre otros aspectos. En la página web, además, cuenta con un apartado ubicado en la sección “Trámites” denominado “Cumplimiento de la ley 8220”, donde explica, detalladamente, cómo se deben realizar gestiones ante la CGR.*”<sup>45</sup>

[101] Esta página en Internet contiene, además, un sistema de consultas *online* sobre los presupuestos públicos y la contratación administrativa, entre otros.

[102] Relacionado con lo anterior, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGR explicaron sobre el proceso de medición y mejora que se está llevando a cabo con respecto a los portales en Internet de las instituciones públicas, lo cual es responsabilidad de la CGR. En este sentido, mostraron un video (disponible en *YouTube*) preparado por la CGR para ayudar a los ciudadanos a entender los cambios y navegar en su sitio *web*. Asimismo, mostraron el canal en *YouTube* de la CGR que contiene guías audiovisuales sobre la contratación administrativa, el sistema de declaraciones juradas, y capacitación, entre otros.<sup>46</sup>

[103] En cuanto al control interno y atención a reclamos en la CGR, en la respuesta se informa que las denuncias sobre el desempeño del personal son atendidas por el respectivo nivel de jefatura. Lo resuelto en este nivel puede ser impugnado ante el Contralor General. En la respuesta también se informa que estas denuncias pueden llevar a la instauración de un procedimiento administrativo y a la

---

45. *Ibidem*, p. 29.

46. Ver <http://www.youtube.com/user/CGRCostaRica>

consecuente imposición de sanciones.<sup>47</sup> Asimismo, en la respuesta se explica que “*de acuerdo con la naturaleza de la Contraloría General de la República, el control interno representa una actividad inherente a todas las tareas de la institución, por consiguiente se parte de la premisa de que el Sistema de Control Interno Institucional es responsabilidad de todos en la organización, y esto se visualiza y sustenta mediante las actividades de control propias de cada una de las Divisiones y unidades.*”<sup>48</sup>

[104] Con respecto a la manera de garantizar los recursos presupuestales necesarios para el funcionamiento de la CGR, en su respuesta el cuestionario, el Estado analizado señala que “*los recursos presupuestarios necesarios para el funcionamiento de la Contraloría General de la República son asignados por la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, cuya elaboración a modo de anteproyecto corresponde a la propia institución, la cual lo presenta al Ministerio de Hacienda a fin de que se incorpore al proyecto de presupuesto que se remite para aprobación final por parte de la Asamblea Legislativa. El sustento para que se garantice la asignación de recursos presupuestarios al órgano contralor, se encuentra contenido en los artículos 50 a 57 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.*”<sup>49</sup>

[105] En cuanto a los mecanismos de coordinación con otros órganos del Estado y para obtener el apoyo de la ciudadanía para el cumplimiento de sus funciones, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado menciona la creación de una alianza estratégica entre la PGR, el MP, la CGR y el Instituto Costarricense sobre Drogas, para establecer una coordinación interinstitucional de asistencia y cooperación para enfrentar la corrupción.<sup>50</sup> En este contexto, las anteriores cuatro instituciones firmaron una carta de intención en junio de 2010, y en 2012, se creó la Comisión Interinstitucional, conformada por un representante de cada una de estas instituciones.

[106] Asimismo, la Contralora General de la República representa a la CGR ante la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), la cual, según el artículo 2º del Decreto Ejecutivo No. 3498-J, tiene entre sus principales funciones, establecer, recomendar o procurar los medios, actividades y procedimientos para que los organismos relacionados con la administración de justicia coordinen sus acciones y programas; concientizar y coordinar los esfuerzos destinados al mejoramiento del sector de justicia; y promover la formación y la participación ciudadana de los y las habitantes en materias atinentes a la justicia.

[107] Adicional a lo anterior, en cuanto a la armonización de sus funciones con las de otros órganos de control, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGR explicaron que hay una reunión mensual de coordinación entre la CGR, la PEP, el MP y el Instituto Costarricense sobre Drogas. En cuanto a la PEP en particular, frente a la recepción de una denuncia, informaron que la CGR coordina con los procuradores de la ética para seleccionar los casos que corresponden a cada institución. Asimismo, explicaron que frente a los mismos hechos, la PEP puede estar tratando de determinar si ocurrió una violación ética, mientras que la competencia de la CGR es el manejo de los recursos públicos.

[108] En relación con los mecanismos de rendición de cuentas, de acuerdo al artículo 32 de la LOCGR, la CGR rinde cuentas a la Asamblea Legislativa a través de la presentación al Congreso del informe de labores contenido en su memoria anual y también a través de las diferentes comisiones

---

47. Ver respuesta de Costa Rica al cuestionario, p. 32, *supra* nota 4.

48. *Ibidem*.

49. *Ibidem*, p. 34.

50. *Ibidem*.

legislativas.<sup>51</sup> El artículo 184, inciso 3) de la Constitución Política establece el contenido mínimo para esta memoria anual, incluyendo, *“movimiento correspondiente al año económico anterior con detalle de las labores del contralor y exposición de las opiniones y sugerencias que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos.”* Asimismo, la CGR presenta informes semestrales y anuales de evaluación al Ministerio de Hacienda, solicitadas por dicho Ministerio a las instituciones sujetas al presupuesto nacional.<sup>52</sup> Adicionalmente, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que *“en el año 2011, la CGR se sometió a varios procesos de revisión externa voluntarios, que responden a rigurosos estándares internacionales, con el propósito fundamental complementar la rendición de cuentas con opiniones externas e independientes. En particular, se efectuó una revisión de pares (peer review) de los procesos sustantivos de mayor relevancia institucional, como lo son: la planificación y la auditoría operativa, por parte de entidades de fiscalización superior, entre ellas: la Auditoría General de la Federación de los Estados Unidos de México y la Contraloría General de Chile. La revisión externa se completó, con una auditoría de los estados financieros de la institución, también con excelente resultado. Todo lo anterior, en consonancia con el objetivo No.7 del Plan Estratégico de la Institución, que persigue incrementar la confianza de la sociedad costarricense en la Contraloría General de la República, incrementando la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión institucional.”*<sup>53</sup>

## **2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[109] La CGR cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1 de este informe. Sin embargo, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[110] Primero, con respecto a los recursos disponibles en la CGR, en el documento de la asociación “Costa Rica Íntegra” remitido por el Programa “Estado de la Nación” se señala que *“la institucionalidad que exhibe la CGR es de las más robustas y autónomas del aparato público costarricense, en cuanto a su poder infraestructural (competencias asignadas, capacidades financieras y humanas y logros).”*

[111] Sin embargo, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGR explicaron que sus responsabilidades en cuanto a la lucha contra la corrupción se ven afectadas negativamente frente a una insuficiencia de recursos humanos y financieros. A manera de ejemplo, explicaron que sólo cuentan con 37 funcionarios responsable de recibir y verificar aproximadamente 15,000 declaraciones juradas y, por lo tanto, sólo pueden verificar una cantidad mínima de estas declaraciones. Asimismo, señalaron que se requiere de recursos adicionales para un mejor ejercicio de sus funciones de fiscalización previa y posterior. El Comité formulará una recomendación al respecto. (Véase la recomendación 2.4.1 en el capítulo II de este informe).

[112] Segundo y en relación con lo anterior, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGR pusieron de presente las necesidades de cooperación técnica para la creación de herramientas tecnológicas que permitan automatizar la verificación de la información contenida en las declaraciones juradas, como por ejemplo, un *data warehouse*, compuesto de *software* y *hardware* para prevenir la corrupción. El Comité formulará una recomendación tomando en cuenta estas necesidades. (Véase la recomendación 2.4.2 en el capítulo II de este informe).

---

51. *Ibidem*, p. 36.

52. *Ibidem*.

53. *Ibidem*, p. 37.



[113] Tercero y en relación con la utilización de tecnologías, durante la visita *in situ*, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil hicieron notar que el portal en Internet de la CGR no es de fácil comprensión al usuario común y que necesita ser mejorada. En este sentido, durante las reuniones con los representantes de la CGR, los mismos manifestaron que se habían dado cuenta internamente que los documentos y la información en dicho portal tienen una orientación muy técnica. Además, como se detalló en la sección anterior del presente informe, los representantes de la institución explicaron y demostraron la variedad de esfuerzos que están emprendiendo justamente para mejorar la navegación por el portal y la utilidad de la información allí contenida. Asimismo, subsiguiente a la realización de la visita *in situ*, la CGR informó que en noviembre de 2012 logró el tercer lugar en la “evaluación de la calidad de la prestación de servicios públicos por medios digitales en Costa Rica” realizada por la *INCAE Business School*.<sup>54</sup> El Comité considera que es importante que estas mejoras continúen y formulará una recomendación al respecto. (Véase la recomendación 2.4.3 en el capítulo II de este informe).

[114] Cuarto y con respecto a la capacitación externa que imparte la CGR, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que la CGR carece de “...un programa de capacitación permanente a las Administraciones Públicas, con un enfoque preventivo, constituye un obstáculo en la lucha contra la corrupción.”<sup>55</sup> El Comité considera que la provisión de capacitación de esta naturaleza cae dentro de las responsabilidades de la Unidad de Capacitación de la CGR, que tiene entre sus funciones proveer capacitación a funcionarios de la CGR y a otros servidores de los sujetos pasivos. El Comité formulará una recomendación al respecto. (Véase la recomendación 2.4.4 en el capítulo II de este informe).

[115] Quinto y en cuanto a las dificultades existentes para el cumplimiento de sus responsabilidades, el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario<sup>56</sup> y también durante las reuniones sostenidas con la CGR, se explicó que las instituciones utilizan distintas plataformas informáticas y que este hecho constituye un obstáculo al intercambio oportuno de información entre aquellas con funciones atinentes a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. El Comité formulará una recomendación sobre el particular. (Véase la recomendación 2.4.5 en el capítulo II de este informe).

### **2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

[116] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ*, se recabó información relativa a los resultados que ha obtenido la CGR en el cumplimiento de sus funciones, entre la que se destaca la siguiente:

[117] En primer lugar, respecto a las acciones relacionadas con la prevención de prácticas corruptas realizadas por la CGR, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que la misma ha emitido normativa y ha desarrollado herramientas y acciones “...en procura de contribuir con el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de los sistemas de control interno, así como aquellas que contribuyen también con la prevención de la corrupción.”<sup>57</sup>

[118] Entre la normativa emitida la respuesta destaca la siguiente: en 2004, las directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la CGR, auditorías internas y servidores públicos en general; en 2008, las Directrices

---

54. Este documento está disponible en: <http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/premios/InformeWeb2012.pdf>

55. Ver respuesta de Costa Rica al cuestionario, p. 63, *supra* nota 4.

56. *Ibidem*.

57. *Ibidem*, p. 41.

para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público; y en el 2009, una Guía Técnica para el desarrollo de Auditorías de la Ética; y en 2009, las Normas de Control para el Sector Público y las Normas de Control para el Sector Privado.

[119] El Comité considera que los anteriores datos sirven para demostrar que la CGR ha realizado acciones relacionadas con la prevención de las prácticas corruptas.

[120] En segundo lugar, en cuanto a las funciones de la CGR relacionadas con la investigación y detección de actos de corrupción, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que en los últimos cinco años, la CGR ha realizado 587 investigaciones relacionadas con la facultad de constatar la veracidad de las declaraciones juradas dotada por el artículo 34 de la Ley No. 8442 y en cumplimiento de la potestad de investigación dotada por el artículo 24 de la LOCGR. Asimismo, en la respuesta se incluye el siguiente cuadro que muestra los resultados de esas investigaciones:<sup>58</sup>

Año	Relaciones de hechos	Denuncias penales	Investigaciones preliminares	Total investigaciones	Archivadas
2007	157	8	-	165	97
2008	58	12	-	70	126
2009	57	13	-	70	154
2010	103	11	-	114	136
2011	95	6	60	161	114
2012	1	-	6	7	31

[121] Con respecto al cuadro anterior, en la respuesta también se informa que ante la CGR no se han presentado investigaciones prescritas o suspendidas y que todas las investigaciones en proceso se encuentran en condiciones de adoptar, con base en ellas, una decisión de fondo sobre el caso investigado. En la respuesta se añade que “...el total de investigaciones se han dirigido hacia la instancia pertinente para adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado, sean: la División Jurídica institucional, el Ministerio Público o la propia administración activa para la determinación. En el caso de las investigaciones archivadas, corresponden a asuntos en los que no hay suficiente prueba para la determinación de responsabilidades, o bien no son competencia de la Contraloría General, o están siendo analizadas por otro órgano competente. Por último, la CGR comenta que tiene un Área especializada en denuncias e investigaciones que puede recibir denuncias directamente o bien por medios electrónicos, la cual está conformada por profesionales de diferentes especialidades, entre ellos, abogados, contadores, administradores, criminólogos, ingeniero civil e ingeniera de sistemas.”<sup>59</sup>

[122] El Comité considera que las estadísticas presentadas sirven para demostrar que la CGR únicamente lleva a cabo investigaciones con respecto a un número pequeño de declaraciones juradas que recibe. En este sentido, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGR explicaron que hay más de 15,000 funcionarios públicos obligados a declarar y que hay solamente 37 funcionarios responsable de recibir las declaraciones y también las denuncias relacionadas. Por lo tanto, señalaron que la CGR realiza la verificación anual de aproximadamente 100 declaraciones anualmente. En esa conexión, también se puso de presente que de año en año se aplican criterios diferentes para determinar cuáles declaraciones serán verificadas. Se citó el ejemplo de un año en el cual hubo un proyecto grande de carreteras y se decidió verificar las declaraciones de los funcionarios

---

58. *Ibidem*, p. 46.

59. *Ibidem*.

involucrados en la toma de decisiones relacionadas con el proyecto. Asimismo, se explicó que cuando se recibe una denuncia de corrupción y/o enriquecimiento ilícito, se realiza la verificación de la declaración del acusado, pero que no se mantienen estadísticas sobre esas verificaciones.

[123] Aunque el Comité considera muy útil la práctica de enfocar los recursos humanos disponibles a temas importantes, como en el caso del ejemplo citado en el párrafo anterior, considera también que el número de declaraciones juradas verificadas durante los últimos cinco años pareciera ser baja comparado con el mundo de funcionarios obligados a declarar. El Comité formulará una recomendación tomando en cuenta las consideraciones anteriores. (Ver la recomendación c) de la sección 2 del capítulo IV del este informe).

[124] Asimismo, el Comité observa que la CGR ha enviado los resultados de sus investigaciones a las entidades respectivas para la determinación de responsabilidades. El Área de Denuncias e Investigaciones de la CGR cuenta con funcionarios encargados de hacer el seguimiento de estos traslados. Sin embargo, el Comité no cuenta con información sobre el resultado de esos tramites, tales como la cantidad de investigaciones enviadas al MP que resultaron en la instauración de un procedimiento penal, o la cantidad de investigaciones enviadas a las instituciones que resultaron en la determinación de responsabilidad administrativa o la imposición de sanciones disciplinarias para el funcionario público denunciado. Sobre el particular, el Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 2.4.6 en el capítulo II de este informe).

[125] En tercer lugar, en cuanto a las funciones de la CGR relacionadas con la sanción de los actos de corrupción que generan responsabilidad administrativa, disciplinaria, o civil, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que la CGR “...tiene potestades en materia de responsabilidad administrativa y civil, por conductas irregulares de funcionarios públicos o sujetos privados que administren fondos públicos. Asimismo, está facultada para intervenir en los procesos jurisdiccionales relacionados con actos de corrupción. En lo relativo a la responsabilidad administrativa, civil o la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos y contratos administrativos, la Contraloría tiene facultades para realizar investigaciones preliminares y procedimientos administrativos para el esclarecimiento de las eventuales irregularidades detectadas durante la fiscalización integral de los sujetos pasivos...para llegar a determinar la verdad real de los hechos y resolver según corresponda, sea establecer las responsabilidades de mérito -disciplinaria y/o civil-, o absolver a los involucrados y/o resolver sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos y contratos administrativos.”<sup>60</sup>

[126] La respuesta al cuestionario también contiene algunos cuadros que muestran el desarrollo de las anteriores potestades por parte de la CGR.<sup>61</sup> De los mismos se pueden desglosar que el cuadro 1, detalla el fundamento jurídico de las anteriores competencias; los cuadros 2 y 3, respectivamente, entre 2007 y 2011, la CGR ha iniciado 511 procedimientos administrativos y ha finalizado 489 de ellos; el cuadro 4, entre 2007 y 2012, 9 casos admisibles, 28 casos en trámite sin acto final, 33 con acto final no en firme, 14 con acto final en firme y en seguimiento y 13 casos suspendidos; el cuadro 5, entre 2007 y 2011, se han archivado 42 procedimientos administrativos; el cuadro 6 muestra la cantidad y clase de sanciones impuestas entre 2007 y 2011, incluyendo prohibiciones de ingreso o reingreso, amonestación publicada y no publicada, despido, suspensión, y responsabilidad civil; el cuadro 7, 440 personas fueron sancionadas entre 2007 y 2011; y el cuadro 8, ha habido un total de 47 absoluciones entre 2007 y 2011.

---

60. *Ibidem*, p. 50.

61. *Ibidem*, pp. 50 a 55.

[127] Asimismo, la Memoria de Labores del 2011 de la CGR incluye el siguiente cuadro, que muestra las sanciones impuestas a funcionarios públicos por daño a la Hacienda Pública entre el periodo 2007 a 2011:

	2007	2008	2009	2010	2011
Prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la hacienda pública	15	15	20	21	4
Sanción disciplinaria	94	80	81	64	64
Sanción por responsabilidad civil	1	-	1	18	4
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>95</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>69</b>

[128] Sobre la tabla anterior, en el documento de la asociación “Costa Rica Íntegra” remitido por el Programa “Estado de la Nación” se indica lo siguiente: *“llama la atención que la sanción por responsabilidad civil, que implicaría que el funcionario asuma el costo de sus actos, es poco utilizada.”*<sup>62</sup> En esta conexión, el país analizado explica que la sanción por responsabilidad civil no es aplicable en todos los casos, debido a que no todos los casos involucran pérdidas económicas a la Hacienda Pública, pero que se realiza una determinación activa sobre si procede esta figura en todos los casos que involucran pérdidas económicas. Asimismo, la CGR ha informado que se encuentra desarrollando un proyecto para emitir políticas en materia de responsabilidad, el cual incluye, lo referente a responsabilidad civil. El Comité formulará una recomendación sobre este punto. (Véase la recomendación 2.4.7 en el capítulo II de este informe).

[129] En cuarto lugar, en cuanto a las funciones de la CGR relacionadas con la sanción de los actos de corrupción que generan responsabilidad penal, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que *“en lo concerniente a la responsabilidad penal de los funcionarios públicos por actos de corrupción, la Contraloría está legitimada para intervenir en los procesos judiciales de esta materia, con especial énfasis en todo lo relacionado con delitos cometidos por funcionarios públicos que tengan como bien jurídico tutelado la Hacienda Pública y el Deber de Probidad. La CGR puede participar como parte activa en condición de víctima, querellante o actor civil, y adicionalmente, a solicitud de un Tribunal de la República, como amicus curiae.”*<sup>63</sup>

[130] En este sentido, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado incluye un cuadro que muestra que entre 2007 y 2011, la CGR participó en un total de 71 casos de esta naturaleza, con los siguientes resultados: 15 causas se archivaron porque los hechos eran atípicos o no había prueba suficiente para comprobar el hecho; en dos causas se aplicaron medidas alternas al juicio oral o público; hay 47 causas en etapa de investigación ante el MP sin requisitoria final; hay seis causas con acusaciones en espera de audiencias preliminares; y hay una causa con sentencia penal firme.

[131] Con respecto a las Memorias de Labores elaboradas por la CGR, el Comité observa que contienen una tremenda cantidad de información, lo cual refleja el espectro amplio de funciones de la CGR. Sin embargo, revisando estas memorias, el Comité observa que la información contenida en las mismas varía de año en año. En este sentido, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGR explicaron que el Contralor en turno determina la información a incluir en aras de mejorar el ejercicio de la función pública.

62. Ver documento de la asociación “Costa Rica Íntegra” remitido por el Programa “Estado de la Nación”, p. 49, *supra* nota

63. Ver respuesta de Costa Rica al cuestionario, p. 54, *supra* nota 4.

[132] Durante la visita *in situ*, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y la academia relataron el problema general consistente en que en su mayoría, las instituciones públicas tienen la obligación de rendir informes anuales pero que no se establecen estándares sobre lo que se tiene que informar. Asimismo, en el documento de la asociación “Costa Rica Íntegra” remitido por el Programa “Estado de la Nación” se anota que “...es de destacar dado un vacío normativo existente en el país en cuanto a los contenidos mínimos que deben tener los informes de labores institucionales.”<sup>64</sup>

[133] En el caso de la CGR, como fue mencionado supra, el artículo 184 inciso 3) de la Constitución Política establece los contenidos mínimos de la memoria anual de labores. No obstante, el Comité considera conveniente que la CGR continúe haciendo esfuerzos para utilizar un lenguaje sencillo en dichos informes, de modo tal que sea más comprensible para los ciudadanos, y divulgar ampliamente la memoria. El Comité formulará una recomendación al respecto. (Véase la recomendación 2.4.8 en el capítulo II de este informe).

## **2.4. Conclusiones y recomendaciones**

[134] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la CGR en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[135] Costa Rica ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la CGR como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 2 del capítulo II de este informe.**

[136] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 2.4.1. Dotar a la CGR con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, particularmente las relacionadas con la verificación de las declaraciones juradas, dentro de los recursos disponibles. (Véase secciones 2.2. y 2.3 del capítulo II de este informe).
- 2.4.2. Cuando corresponda, buscar la cooperación técnica necesaria de otros estados y organismos de cooperación para que la CGR pueda desarrollar herramientas tecnológicas que permitan automatizar la verificación de la información contenida en las declaraciones juradas, como por ejemplo, una “data Warehouse”. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.3. Continuar el proceso de mejora del portal en Internet de la CGR, para que sea de mayor utilidad para la difusión de información a la ciudadanía, la rendición de cuentas y en general a los esfuerzos destinados a combatir la corrupción. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.4. Considerar la creación por parte del Centro de Capacitación de la CGR, de un programa de capacitación permanente a las Administraciones Públicas con un enfoque preventivo, en desarrollo de las funciones dotadas por la LOCGR. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).

---

64. Ver documento de la asociación “Costa Rica Íntegra” remitido por el Programa “Estado de la Nación”, p. 13, *supra nota* 21.

- 2.4.5. Considerar la posibilidad de estandarizar las plataformas informáticas utilizadas por los órganos de control, para facilitar y mejorar, entre otros aspectos, la coordinación institucional y el intercambio oportuno de información entre ellas. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.6. Continuar realizando esfuerzos tendientes a dar un adecuado seguimiento con respeto al resultado de las investigaciones realizadas por la CGR y enviadas al MP o a las instituciones de la Administración Pública, que corresponda, para contar con información sobre los resultados de esos trámites, y determinar si resultaron en la instauración de un procedimiento penal, una determinación de responsabilidad administrativa, o en la imposición de sanciones disciplinarias. (Véase sección 2.3. del capítulo II de este informe).
- 2.4.7. Continuar impulsando el desarrollo del proyecto de políticas en materia de responsabilidad de la CGR, que incluye el tema de responsabilidad civil. (Véase sección 2.3. del capítulo II de este informe).
- 2.4.8. Continuar haciendo esfuerzos para utilizar un lenguaje sencillo en la memoria anual de labores de la CGR, de modo tal que sea más comprensible para los ciudadanos, y divulgar ampliamente la memoria. (Véase sección 2.3. del capítulo II de este informe).

### **3. DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (DHR)**

#### **3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[137] La DHR cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[138] En cuanto a sus objetivos y funciones, el artículo 1º de la Ley No. 7319, Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República (LDHR), dispone que la DHR es el órgano encargado de proteger los derechos e intereses de los habitantes. Asimismo, este artículo establece que la DHR “...*velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, deberá promocionar y divulgar los derechos de los habitantes.*” El Decreto Ejecutivo No. 22266, Reglamento del Defensor de los Habitantes de la República, le confiere las siguientes atribuciones generales: *proteger los derechos e intereses de los habitantes frente a amenazas, perturbaciones, restricciones o violaciones provocadas por acciones u omisiones provenientes de la actividad administrativa del sector público (artículo 6, numeral 1); velar porque el funcionamiento del sector público se ajuste a lo prescrito por la moral, la justicia y el ordenamiento jurídico (artículo 6 numeral 2); velar por el buen funcionamiento, la eficiencia y la agilización en la prestación de los servicios públicos (artículo 6 numeral 3); desarrollar programas para la promoción y divulgación de los derechos de los habitantes (artículo 6 numeral 4).*”

[139] El artículo 2º de la LDHR prevé que la DHR está adscrita al Poder Legislativo y que desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio.

[140] Con respecto al ámbito de funciones de la DHR y la existencia de funciones en concurrencia con otras entidades, el artículo 12 de la LDHR señala, en su parte pertinente, que sin perjuicio de las potestades constitucionales y legales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, la DHR

puede iniciar de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de las actuaciones, actos u omisiones de la actividad administrativa del sector público. El segundo inciso del artículo 12 también establece que la DHR puede inspeccionar las oficinas públicas sin previo aviso y requerir documentación u otra información necesaria (artículo 12, numeral 2), mientras que el tercer inciso establece la obligación de los funcionarios públicos citados por la DHR, salvo los que gozan de inmunidad, de comparecer ante la misma.

[141] En cuanto a las excepciones al ámbito de competencias de la DHR, el artículo 12 de la LDHR también establece que la DHR no puede intervenir con respecto a las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral (artículo 12, numeral 1). Asimismo, el artículo 19, numeral 2, dispone que la DHR no podrá conocer las quejas sobre las cuales esté pendiente una resolución judicial y que suspenderá su actuación si el interesado interpone una demanda o un recurso judicial respecto del mismo objeto de la queja, no obstante, podrá continuar con la investigación de los problemas generales planteados en las quejas, y comunicar a la CSJ sobre las irregularidades administrativas que conozca en algún órgano del Poder Judicial.

[142] La designación de la máxima autoridad de la DHR, el Defensor o la Defensora de la República, la realiza la Asamblea Legislativa por mayoría absoluta por un periodo de cuatro años pudiendo ser reelegido por una vez, de acuerdo al artículo 3 de la LDHR. El artículo 6° establece entre las causas de cesación del cargo del Defensor, las siguientes: renuncia, muerte o incapacidad, negligencia o violaciones graves en el cumplimiento de sus deberes, incompatibilidad, y condena por delito doloso. Asimismo, el artículo 17 del Reglamento del Defensor de los Habitantes de la República establece el procedimiento para la investigación y remoción del Defensor por parte de la Asamblea Legislativa en caso de negligencia o violaciones graves.

[143] En cuanto al personal de la DHR, el artículo 24 de su Reglamento dispone que la DHR contará con el personal profesional, técnico y administrativo requerido. El artículo 24 también dispone que el Defensor designará y removerá libremente al personal necesario para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias.

[144] Con respecto a la designación de funcionarios de la institución, el Estatuto de Selección, Ascensos y Nombramientos de la DHR establece un proceso para los concursos internos o externos para las anteriores designaciones. En este sentido, el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, expresa que *“la institución cuenta con un Estatuto de Selección, Ascensos y Nombramientos que determina el procedimiento para la ocupación de las plazas, sea por concurso interno y/o externo o por la vía directa sin concurso. El Estatuto citado establece que el nombramiento o ascenso sin concurso, debe hacerse con base en el estudio e informe emitido por el Departamento de Recursos Humanos y la justificación razonada que realice para cada caso, además, ordena que la resolución del jerarca debe estar debidamente motivada. En ese sentido, la administración actual ha optado por la vía de los concursos tanto internos como externos para los casos de plazas vacantes en propiedad, y para el llenado de plazas vacantes con propietario o sustituciones temporales, se ha optado por considerar las recomendaciones de los directores o jefes de departamento para nombrar a personas sustitutas en dichos puestos.”*<sup>65</sup>

[145] Los funcionarios de la DHR, al igual que los demás funcionarios públicos de Costa Rica, están sujetos al mismo régimen general de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y de responsabilidad, descrito en la sección 1.1 del presente informe. Igualmente, el artículo 9° de la

---

65. Ver respuesta de Costa Rica al cuestionario, p. 20, *supra* nota 4.

LDHR contiene incompatibilidades y prohibiciones aplicables específicamente a funcionarios de la DHR.

[146] En cuanto a documentos y manuales que describen las funciones de su personal, existe el Manual Descriptivo de Puestos. Durante la visita *in situ*, los representantes de la DHR señalaron que este Manual esta en proceso de actualización.

[147] Con respecto a la capacitación en la DHR, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado manifiesta que *“a la fecha no existe un plan de capacitación periódica para los funcionarios, pero para el segundo semestre del año 2012, la Institución trabaja en un programa que permita el adiestramiento constante de los servidores de la Institución. La DHR informa que las restricciones presupuestarias merman la posibilidad de contar con una capacitación necesaria y continúa.”*<sup>66</sup> Durante la visita *in situ*, los representantes de la DHR confirmaron que este problema continúa y que todavía no cuenta con un programa de capacitación integral. Sin embargo, explicaron que utilizan sus contactos con otras instituciones, tales como universidades y otros órganos de control, para que sus funcionarios puedan tomar ventaja de oportunidades de capacitación externas.

[148] En cuanto a la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de sus responsabilidades, la DHR cuenta con un Manual de Macroproceso de Protección de Derechos, *“que norma los diferentes procedimientos de defensa de derechos, que asume la Institución.”*<sup>67</sup>

[149] En este sentido, el artículo 14 de la LDHR dispone la naturaleza de las intervenciones de la DHR, expresando que las mismas no sustituyen los actos de la administración, sino que se trata del control de la legalidad (artículo 14, numeral 1). En particular, el artículo 14, numeral 2, dispone que si la DHR *“...llega a tener conocimiento de la ilegalidad o arbitrariedad de una acción, debe recomendar y prevenir al órgano respectivo, la rectificación correspondiente, bajo los apercibimientos de ley. Pero si considera que el hecho puede constituir delito, debe denunciarlo ante el Ministerio Público.”*

[150] Para la toma de decisiones en la DHR, el Manual de Macroproceso de Protección de Derechos antes referido, detalla la forma de tratar a las denuncias y solicitudes de intervención recibidas en la DHR en concordancia con lo dispuesto en la LDHR y su Reglamento. En particular, el artículo 43 del Manual requiere la revisión de informes finales por la Dirección de Defensa de la DHR, y la aprobación definitiva y firma de informes finales con recomendaciones por el o la Defensora o el o la Defensora Adjunta, en caso de existir una delegación del jerarca.

[151] Con respecto a las acciones necesarias para hacer cumplir las recomendaciones antes citadas, el artículo 14, inciso 3 de la LDHR señala que *“El no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes de la República, puede ser objeto de una amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, de una recomendación de suspensión o despido, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo segundo de este artículo.”* Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes de la DHR explicaron que aunque las recomendaciones emitidas por la institución no son vinculantes, las mismas tienen un efecto de control y presión moral. También se explicó que el marco normativo de la DHR no se fundamenta en el poder sancionatorio, sino en el ejercicio de una magistratura de influencia. En este sentido, los representantes relacionaron que el posicionamiento social de la DHR junto con el hecho que ha sido jurídicamente legitimada otorga peso a sus recomendaciones. Explicaron además que sumado a lo

---

66. *Ibidem*, p. 24.

67. *Ibidem*, p. 27.



previsto en el artículo 19, numeral 2, de la LDHR, en el caso que una institución decidiera no implementar una recomendación de la DHR, se requiere una fundamentación escrita de tal decisión.

[152] En cuanto al control interno en la DHR, la misma cuenta con su Auditoría Interna, encargada de evaluar los mecanismos de control y dar trámite a las denuncias relacionadas con la infracción de las normas de control interno y lo dispuesto en la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno.

[153] Para la atención a reclamos, la DHR cuenta con su Contraloría de Servicios, que es la instancia que vela para que los usuarios obtengan un servicio de calidad con eficacia y eficiencia y a la cual los ciudadanos pueden someter sus inconformidades o sugerencias con respecto al trabajo de la DHR.<sup>68</sup> Asimismo, de acuerdo al artículo 22 de la LDHR, se puede interponer un recurso de reconsideración contra las decisiones, actuaciones o informes de la DHR.

[154] Sobre las acciones de fortalecimiento institucional y mejoramiento de calidad implementada, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que la Dirección Administrativa de la DHR está desarrollando un proyecto *“de documentación y mejora de procesos como punto de partida para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. El proyecto inició en enero del presente año, con talleres de motivación y capacitación a todos los funcionarios por departamentos. En este momento, se desarrolla la etapa de levantamiento de procesos, que busca obtener los procedimientos documentados de todos los departamentos de la dirección, mediante manuales que definan la metodología para el desarrollo de las tareas. El fin es la implementación de una cultura de mejora continua que agilice los procesos y aliviane las cargas de trabajo, sin sacrificar la calidad del servicio a los habitantes que acuden a la institución.”*<sup>69</sup> Asimismo, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que *“la DHR está desarrollando un modelo de riesgo institucional para garantizar el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales mediante la identificación, análisis, evaluación, administración y revisión de riesgos a través de su continua comunicación y documentación.”*<sup>70</sup>

[155] Con respecto a la implementación de tecnologías modernas, la DHR utiliza un “Sistema Informático de Protección de Derechos”, el cual es utilizado para almacenar, registrar, asignar, tramitar y procesar la información relacionada con la protección de derechos, incluyendo la notificación de oficios o ingresos de documentación, y el cual *“...proporciona a los funcionarios agilidad para el desempeño de sus labores.”*<sup>71</sup>

[156] Para el suministro de información a los ciudadanos acerca de sus objetivos y funciones, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que esta información es incluida en las charlas, talleres y cursos impartidos por la DHR.<sup>72</sup> En este sentido, la respuesta explica que el área de promoción y divulgación de la DHR organizó aproximadamente 100 actividades de esta naturaleza durante 2011. Asimismo, las denuncias se pueden presentar a través del portal en Internet de la DHR, disponible en [www.dhr.go.cr/denuncia.html](http://www.dhr.go.cr/denuncia.html).

[157] En cuanto a la manera de garantizar los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, el presupuesto de la DHR está incluido en el presupuesto del Poder Legislativo “...y

---

68. Para mayor información, ver <http://www.dhr.go.cr/contraloria.html>

69. Ver respuesta de Costa Rica al cuestionario, p. 27, *supra* nota 4.

70. *Ibidem*, p. 32.

71. *Ibidem*, p. 28.

72. *Ibidem*, p. 30.

*queda a expensas de la aprobación respectiva por parte del Ministerio de Hacienda y de la Asamblea Legislativa.”*<sup>73</sup>

[158] Por cuanto a mecanismos de coordinación entre la DHR y otros órganos, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado anota que la misma “...*participa en el Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social (en adelante CCNRS), concretamente, coordina el Comité de Transparencia. El CCNRS constituye una organización que plantea ser una plataforma multisectorial de concertación y orientación en responsabilidad social para incidir en el desarrollo humano sostenible en Costa Rica. Dentro del marco estratégico del CCNRS se visualiza un impacto para que se implementen políticas para lograr un desarrollo ambiental sostenible; se ejecuten iniciativas para el desarrollo económico y social; se ejerzan prácticas y conductas socialmente responsables, y exista una cultura de transparencia y rendición de cuentas.*”<sup>74</sup>

[159] Asimismo, la Defensora de los Habitantes de la República representa a la DHR en la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), la cual, según el Decreto Ejecutivo No. 3498-J, tiene entre sus principales funciones, establecer, recomendar o procurar los medios, actividades y procedimientos para que los organismos relacionados con la administración de justicia coordinen sus acciones y programas (artículo 2º, inciso a); concientizar y coordinar los esfuerzos destinados al mejoramiento del sector de justicia (artículo 2º, inciso b); y promover la formación y la participación ciudadana de los y las habitantes en materias atinentes a la justicia.

[160] Con respecto a coordinación con el MP, el artículo 14 de la LDHR dispone que si en el ejercicio de sus funciones la DHR llega a tener conocimiento de un hecho que puede constituir delito, lo deberá denunciar ante el MP.

[161] Con respecto a la rendición de cuentas, el artículo 15 de la LDHR requiere la presentación anual por el Defensor de los Habitantes de un informe a la Asamblea Legislativa, sobre el cumplimiento de sus labores. El mismo artículo dispone que el Defensor comparecerá ante la Asamblea Legislativa para defender oralmente el informe. Asimismo, la respuesta al informe se divulga a través de la página en Internet de la DHR, disponible en [www.dhr.go.cr](http://www.dhr.go.cr) y a través de actividades realizadas en distintas áreas del país.

[162] Con respecto al mismo tema, en 2004, la DHR creó la Red Interinstitucional de Transparencia (RIF), la cual es “...*una herramienta en línea, que le permite a las instituciones subir información estatal de interés público, como por ejemplo: presupuestos, ingresos, egresos, inversiones, planillas, licitaciones, contrataciones, compras, proveedores, planes operativos, informes de labores y auditoría, actas, acuerdos, convenios, proyectos, et.*”, y que “... *pretende garantizar el derecho humano y constitucional de acceso a la información, visibilizar la administración de los recursos públicos de forma actualizada, comprensible y transparente; promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas; recuperar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas y prevenir actos de corrupción.*”<sup>75</sup>

---

73. *Ibidem*, p. 34.

74. *Ibidem*, p. 35.

75. *Ibidem*, p. 38.

### **3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[163] La DHR cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 3.1 de este informe. Sin embargo, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[164] En primer lugar, el Comité observa que la DHR ha promovido una iniciativa de ley que pretende dotar al órgano de sustento constitucional, con el propósito de garantizar su solidez y permanencia.

[165] Junto con lo anterior, el Comité observa que aunque la DHR cuenta con amplias potestades para el cumplimiento de sus responsabilidades, incluyendo el poder de inspección sin preaviso y el hecho que las instituciones y funcionarios públicos tienen que colaborar y proveer la información solicitada por la DHR, el Comité también observa que las recomendaciones en los informes emitidas por la DHR no son de cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones. En este sentido, los representantes de la DHR manifestaron que aunque las recomendaciones no son vinculantes, sí existe una presión y control moral en cuanto a su implementación.

[166] En vista de esta situación, el Comité considera útil para Costa Rica analizar la conveniencia de dotar un rango superior a la DHR para que, entre otros aspectos, sus recomendaciones tengan mayor efecto e incidencia en la lucha contra la corrupción. El Comité formulará una recomendación tomando en consideración lo anterior. (Véase las recomendaciones 3.4.1 y 3.4.6 en el capítulo II de este informe).

[167] En segundo lugar, en cuanto a las dificultades para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, durante la visita *in situ*, los representantes de la DHR pusieron de presente que la institución carece de recursos financieros y humanos. En este sentido, explicaron que cuentan con muy pocos funcionarios para la cantidad de trabajo y denuncias que procesa la institución. El Comité formulará una recomendación tomando en cuenta esta situación. Véase la recomendación 3.4.2 en el capítulo II de este informe).

[168] En tercer lugar y como fue puesto de presente durante la visita *in situ*, como resultado de la falta de recursos descrita anteriormente, la DHR no cuenta con un programa integral de capacitación para sus funcionarios. El Comité considera que contar con un programa en este sentido es esencial para garantizar, entre otros aspectos, el desarrollo periódico y permanente de los funcionarios de la institución. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 3.4.3 en el capítulo II de este informe).

[169] En cuarto lugar, durante la visita *in situ* se reveló una falta de uniformidad en el contenido básico de los informes anuales remitidos a la Asamblea Legislativa en cumplimiento del artículo 15 de la LDHR. Por lo tanto, el contenido de esos informes depende de la decisión del Defensor o Defensora y varía de año en año. El Comité considera que contar con criterios uniformes en este sentido sería beneficio para el Estado analizado, porque facilitaría la medición de la efectividad del cumplimiento de los propósitos y responsabilidades por parte de la DHR. El Comité formulará una recomendación teniendo en cuenta estas consideraciones. (Véase la recomendación 3.4.4 en el capítulo II de este informe).

### 3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[170] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ*, se recabó información relativa a los resultados que ha obtenido la DHR en el cumplimiento de sus funciones, entre la que se destaca la siguiente:

[171] Primero, con respecto a las acciones relacionadas con la prevención de prácticas corruptas, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que hace varios años el DHR ha estado realizando una actividad en el marco del Día Internacional de Acceso a la Información, para “*hacer conciencia sobre el derecho de acceso a la información de carácter público...*”<sup>76</sup> Asimismo, junto con el PNUD, la DHR instauró el premio “Periodismo contra la Corrupción 2012”, el cual pretende, entre otros objetivos, concientizar sobre el efecto de la corrupción. Por último, la DHR también coordina una charla anual con la Comisión de Rescate de Valores, sobre temas relacionadas con la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

[172] Segundo, en cuanto a las funciones de la DHR relacionadas con la investigación y detección de actos de corrupción, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado indica que en cumplimiento de la obligación de denunciar ante el MP cualquier hecho que podría constituir delito contenido en el artículo 14 de la LDHR, en los últimos años, la DHR ha interpuesto cinco denuncias.

[173] En este sentido, durante la visita *in situ*, los representantes de la DHR explicaron que existe poca coordinación con el MP. Como resultado, explicaron que se han enviado muy pocos casos a esa entidad y hay una falta de resultados sobre la materia. El Comité formulará una recomendación tomando en consideración este punto. (Véase la recomendación 3.4.5 en el capítulo II de este informe).

[174] Sumado a lo anterior, el Comité denota una ausencia de resultados que indiquen el nivel de cumplimiento o implementación por parte de las instituciones del Estado de las recomendaciones emitidas por la DHR. El Comité considera que contar con tales cifras podría ayudar en la determinación de la efectividad de las recomendaciones emitidas por la DHR. (Véase la recomendación 3.4.6 en el capítulo II de este informe).

### 3.4. Conclusiones y recomendaciones

[175] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la DHR en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[176] Costa Rica ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la DHR, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II de este informe.**

[177] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 3.4.1. Considerar la posibilidad de analizar la conveniencia de dotar de un rango superior a la DHR. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).

---

76. *Ibidem*, p. 44.

- 3.4.2. Dotar a la DHR con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, particularmente las relacionadas con la prevención, detección e investigación de actos de corrupción, dentro de los recursos disponibles. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.3. Establecer un programa de capacitación integral para los funcionarios de la DHR que, entre otros aspectos, aseguren su desarrollo periódico y permanente; y que la DHR cuente con los recursos necesarios para este fin. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.4. Establecer criterios y parámetros uniformes para el contenido básico de los informes anuales remitidos por la DHR a la Asamblea Legislativa en cumplimiento del artículo 15 de la LDHR. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.5. Aumentar la coordinación con el MP, a fin de asegurar que la DHR cumpla con su obligación de informar a éste sobre los hechos de que tenga conocimiento respecto de la comisión de un delito y del seguimiento de la resolución de esos casos. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.6. Mantener resultados que indiquen el nivel de cumplimiento e implementación de las recomendaciones emitidas por la DHR por parte de las instituciones públicas para que, entre otros aspectos, ayuden en la determinación de la efectividad de las recomendaciones emitidas por la DHR. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).

#### **4. MINISTERIO PÚBLICO (MP)**

##### **4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[178] El MP cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[179] Con respecto a su estructura, de acuerdo al artículo 1º de la Ley No. 7442, Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), el MP es un órgano del Poder Judicial y ejerce sus funciones en el ámbito de la justicia penal. El artículo 3º de esta Ley dispone que el MP goza de “...*completa independencia funcional en el ejercicio de facultades y atribuciones legales y reglamentarias y, en consecuencia, no podrá ser impelido ni coartado por ninguna otra autoridad, con excepción de los Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia.*” Asimismo, el artículo 7º establece que el MP tendrá la competencia de actuar en todo el país.

[180] En cuanto a sus objetivos y funciones, el artículo 3º de la LOMP establece que el MP tiene la función de requerir la aplicación de la ley ante los tribunales penales, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública.

[181] Asimismo, el MP cuenta con una unidad especializada, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), creada por Circular Administrativa No. 03-PPP del MP. Corresponde a la FAPTA conocer de los delitos de corrupción más graves que involucran funcionarios públicos y/o particulares, así como de las causas donde figure como imputado un funcionario judicial. En lo particular, el punto 7.7 de este circular dota de las siguientes funciones a la FAPTA: prevenir la corrupción en los funcionarios del MP y auxiliares de la persecución penal

(punto 7.7, inciso a); investigar y llevar a juicio las causas penales de delitos de corrupción donde figure como imputado un funcionario del MP o cualquier otro auxiliar de la persecución penal, oficiales del Organismo de Investigación Judicial, jueces o juezas de la República y demás funcionarios públicos (punto 7.7, inciso b); inculcar en el personal del MP los valores institucionales (punto 7.7, inciso c); aplicar de manera eficiente justa y objetiva el sistema de consecuencias previstas para los funcionarios del MP (punto 7.7, inciso g); establecer las políticas de transparencia activa y pasiva (punto 7.7, inciso h); establecer las políticas de probidad en el MP (punto 7.7, inciso i); establecer pautas para el ingreso del nuevo personal a la institución de manera que se garantice la probidad y transparencia de los futuros funcionarios y funcionarias (punto 7.7, inciso j); y propiciar la participación ciudadana en la denuncia de los actos ilícitos cometidos por funcionarios del MP y sus auxiliares (punto 7.7, inciso l).

[182] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado expresa que el MP no tiene excepciones en cuanto al ámbito de sus funciones y que puede ejercer la acción penal en contra de cualquier funcionario público o particular, por delitos contrarios a los deberes de la función pública. Sin embargo, en la misma respuesta se explica que *“en el caso de los miembros de los Supremos Poderes y de los funcionarios respecto de quienes la Constitución Política exige que la Asamblea Legislativa autorice su juzgamiento para que puedan ser sometidos a proceso penal, debe seguir el procedimiento especial establecido en el Título V “Procedimiento para Juzgar a los Miembros de los Supremos Poderes, del Código Procesal Penal, Ley N° 7594.”*<sup>77</sup>

[183] La máxima autoridad del MP es el Fiscal General de la República, quien, de acuerdo con el artículo 23 de la LOMP será nombrado por mayoría absoluta de la totalidad de integrantes de la Corte Plena por un periodo de cuatro años y podrá ser reelegido por periodos iguales. Este mismo artículo dispone que para ser nombrado, el Fiscal General debe reunir los mismos requisitos que se exigen para ser magistrado.

[184] Con respecto a la responsabilidad del Fiscal General, el artículo 24 de la LOMP establece que para la aplicación de sanciones en contra del Fiscal General, se seguirá el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pero que la revocatoria del nombramiento del mismo requiere el voto de dos tercios del total de miembros de la Corte Plena.

[185] El artículo 27 de la LOMP dispone que el Fiscal General nombrará a los fiscales adjuntos, fiscales y fiscales auxiliares, y establece que para ingresar al MP se procurará cumplir con el programa de ingreso que reglamentará la Corte, a propuesta del Fiscal General y de la Escuela Judicial. En tal sentido, el MP cuenta con un programa de ingreso, incluyendo un Reglamento de Ingreso al MP, el cual establece requisitos mínimos para los cargos de fiscales y fiscales auxiliares. En cuanto a los funcionarios auxiliares del MP, el artículo 2° de este Reglamento dispone que éstos se regirán por lo dispuesto en la LOPJ y en el Estatuto de Servicio Judicial. Por su parte, el artículo 39 de la LOMP dispone que la Unidad de Capacitación y Supervisión del MP organizará, entre otros, los programas de selección e ingreso del personal del MP, en coordinación con la Escuela Judicial y el Departamento de Personal.

[186] Asimismo, el artículo 44 de la Ley No. 5155, Estatuto de Servicio Judicial, establece que los funcionarios del MP *“...gozarán del derecho de estabilidad, cuando ingresen debidamente al servicio judicial y cuando no se trate de funcionarios de período fijo; y sólo podrán ser removidos por reducción forzosa de servicios o cuando haya mérito para ordenar su traslado o permuta a otro*

---

77. *Ibidem*, p. 13, *supra* nota 4.

*puesto de la misma o inferior clase, o de su separación para el mejor servicio público, o cuando incurran en causal de despido, de acuerdo con el presente Estatuto, sus reglamentos, la Ley Orgánica del Poder Judicial o el Código de Trabajo.”*

[187] Con respecto a la responsabilidad de los funcionarios del MP, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que están sujetos al mismo régimen general de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y de responsabilidad que los demás funcionarios públicos costarricenses y, en particular, al régimen disciplinario establecido en la LOPJ.<sup>78</sup>

[188] En cuanto a los recursos humanos de la FAPTA, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que la entidad cuenta con “*un Fiscal Adjunto, tres grupos de fiscales que se encuentran organizados en dos grupos con tres fiscales auxiliares bajo el mando de un Fiscal Coordinador, además de otro grupo con dos fiscales auxiliares y un fiscal coordinador; existe por el otro lado, un fiscal auxiliar encargado de analizar las quejas presentadas contra fiscales y personal auxiliar; y se cuenta con personal administrativo de apoyo: un coordinador Judicial, auxiliares judiciales, personal de limpieza, así como la asistencia de técnicos jurídicos.*”<sup>79</sup> Con respecto al personal de la FAPTA, durante la visita *in situ*, los representantes de la entidad relataron que no cuentan con los 20 fiscales, que el Poder Ejecutivo otorgó al Ministerio Público en el año 2005 para el abordaje de los delitos de corrupción, porque algunas de las plazas fueron utilizadas por el Fiscal General anterior para reforzar otras áreas del MP, quedando la FAPTA con sólo 15 de los 20 fiscales.

[189] Con respecto a la manera en que se adoptan las decisiones en el MP, durante la visita *in situ*, los representantes del MP explicaron que cada fiscal tiene bajo su responsabilidad la tramitación de los asuntos que se le asignen. No obstante, la toma de decisiones debe respetar el orden jerárquico institucional, requiriéndose el visto bueno del Fiscal Adjunto o Fiscal General para la enmienda jerárquica, prevista en el artículo 18 de la LOMP.

[190] En cuanto a recursos de revisión en contra de las decisiones adoptadas por el MP, el artículo 71 del Código Procesal Penal, confiere a las víctimas el derecho de apelar una decisión de desestimación o sobreseimiento. Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes del MP explicaron que también existe la figura de disconformidad, a través de la cual, un juez puede oponerse a una desestimación o sobreseimiento y devolver el caso al fiscal para la toma de pasos adicionales. El fiscal puede mantener o cambiar su posición, pero si la mantiene, el juez puede decidir someter el asunto al superior jerárquico para su opinión.

[191] En cuanto a los documentos y manuales que describen las funciones de su personal, el MP cuenta con el Manual Descriptivo de Clases por Puestos Vigentes del Poder Judicial, el cual contiene información sobre cada clase de puesto del MP. Además, para la FAPTA en particular, los circulares emitidas por el Fiscal General describen las funciones de su personal.

[192] Con respecto a la capacitación impartida por el MP, el artículo 39 de la LOMP dispone que la Unidad de Capacitación y Supervisión del MP organizará, entre otros, el programa de capacitación del personal del MP. En tal sentido, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que “*dicha unidad diseña un programa anual para todo el personal, que se imparte presencial y en línea; asimismo, capacita en temas solicitados, específicamente, por las fiscalías especializadas, según su diagnóstico de necesidades. Algunos de los cursos recibidos por la FAPTA son: Impugnación de*

---

78. *Ibidem*, p. 21.

79. *Ibidem*.

*sentencias, Oralidad, Técnicas de Detección e investigación de la Corrupción Pública, Interpretación de estados financieros.*”<sup>80</sup>

[193] El MP cuenta con procedimientos documentados para el desarrollo de sus tareas, a través de las circulares e instructivos emitidos por la Fiscalía General; y la FAPTA a través de sus directrices administrativas y disposiciones. En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que las Circulares No. 10-2003, No. 19-2004 y No. 03-PPP-2010, emitidas por el Fiscal General, describen los procedimientos para el desarrollo de las tareas de la FAPTA.<sup>81</sup> Asimismo, con relación a la FAPTA, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que *“en la parte operativa del Área de Anticorrupción, se introdujo como método de trabajo, el análisis caso por caso, con el apoyo de medios tecnológicos en donde los Fiscales realizan una presentación de las investigaciones más importantes y, a partir de ahí, se trazan líneas de investigación en función de las hipótesis delictivas que se conjeturen. Esta práctica se realiza cada cuatro meses, previo al envío de un informe (plantilla) al Fiscal Adjunto y Coordinador (a), con los casos.”*<sup>82</sup>

[194] En relación con la implementación de sistemas o tecnologías modernas, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que *“en relación con la implementación de sistemas o tecnologías modernas, el MP se encuentra en la etapa inicial de un proyecto denominado “Fiscalía electrónica”, el cual tiene como objetivos: la implantación de un nuevo modelo de gestión para el trámite de las investigaciones penales y la articulación de la Fiscalía dentro del modelo electrónico de justicia penal instaurado en el II Circuito Judicial de San José. En enero del presente año, inició un plan piloto en una de las fiscalías que conforma la organización que se estaría desarrollando durante varios meses del presente año. Se proyecta completar la implementación en el resto de las unidades, para el año 2013.”*<sup>83</sup>

[195] Para suministrar información a los ciudadanos acerca de los objetivos y funciones del MP, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que esto se realiza de las siguientes tres maneras: 1) a través del portal en Internet del MP, que contiene información de dónde y cómo denunciar; información sobre delitos en Costa Rica; las circulares y directrices emitidas por la Fiscalía General; convocatorias para concursos de contratación de personal, las memorias anuales; 2) a través de sus oficinas donde se pueden presentar directamente las denuncias; y 3) a través de la Oficina de Prensa, encargada de difundir información institucional de interés público hacia los medios de comunicación colectiva.<sup>84</sup>

[196] En cuanto a controles internos, el MP está sujeto a las disposiciones de la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno y a las disposiciones contenidas en el Manual de Normas General de Control Interno de la CGR y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que en cumplimiento del artículo 39 de la LOMP, la Unidad de Capacitación y Supervisión del MP es responsable de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 8292 y el Manual antes referido, y también *“fiscalizar el acatamiento de las directrices emitidas por la Fiscalía, y supervisar el buen desempeño de las labores del personal...”*<sup>85</sup> En tal sentido, en la respuesta se informa que en 2010, esta unidad elabora un guía de supervisión para la constatación del giro de las actividades de las unidades fiscales. Asimismo, en la

---

80. *Ibidem*, p. 24.

81. *Ibidem*, p. 28.

82. *Ibidem*.

83. *Ibidem*.

84. *Ibidem*, p. 31.

85. *Ibidem*, p. 33.



respuesta se informa también que “*mediante Comunicado N° 01-2011, se remite a todos los fiscales de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y el personal de apoyo, un documento con indicadores para alcanzar los objetivos de control interno de la Unidad, el cual se puede observar en la página web del MP.*”<sup>86</sup>

[197] Con respecto a los mecanismos para atender a reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño de su personal, el MP cuenta con una Unidad de Inspección Fiscal, adscrita a la Fiscalía General, con el objetivo esencial de buscar la verdad real en cada caso investigado, y emitir un fallo correctivo o sancionatorio, dependiendo de la falta denunciada, y además, con la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, que tiene oficinas en cada circuito judicial del país. Adicionalmente, la FAPTA cuenta con una unidad de quejas, que canaliza las quejas referidas a sus causas penales.<sup>87</sup>

[198] Para garantizar los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que “*el MP presenta, anualmente, un anteproyecto de presupuesto para análisis de la Comisión de Presupuesto del Poder Judicial, que garantiza los recursos necesarios para un eficiente servicio.*”<sup>88</sup>

[199] En cuanto a los mecanismos de coordinación con otros órganos del Estado y para obtener el apoyo de la ciudadanía para el cumplimiento de sus funciones, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado menciona la creación de una alianza estratégica entre el MP, la PGR, la CGR y el Instituto Costarricense sobre Drogas, para establecer una coordinación interinstitucional de asistencia y cooperación para enfrentar la corrupción.<sup>89</sup> En este contexto, las anteriores cuatro instituciones firmaron una carta de intención en junio de 2010, y en 2012, se creó la Comisión Interinstitucional, conformada por un representante de cada una de estas instituciones. Asimismo, en la respuesta también se menciona que el MP ha coordinado con el Juzgado Penal de Segundo Circuito Judicial en el área de la Jurisdicción Penal de Hacienda para lograr el acceso por parte de los fiscales al escritorio virtual del Poder Judicial.

[200] Adicionalmente, las Reglas para la aplicación de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública (Circular No. 36-3003 de la CSJ), establecen el proceso mediante el cual una vez evaluada una denuncia de corrupción, el caso se traslada a la FAPTA que asumirá el control de la causa (artículos 2 a 6 de las Reglas).

[201] En relación con los mecanismos de rendición de cuentas respecto del MP, la LOMP, en su artículo 25, inciso i), requiere la presentación a la Corte Plena de una memoria anual sobre el trabajo realizado, incluyendo las políticas de persecución penal e instrucciones generales establecidas, la previsión de recursos, las propuestas jurídicas y cualquier otro tema que el Fiscal General estime conveniente. Estas memorias anuales están publicadas en el portal en Internet del MP, disponible en <http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/transparencia/Index%20memorias.html>. Asimismo, este portal también contiene una sección de transparencia y probidad que contiene información sobre la ejecución presupuestaria, la estructura del MP, la distribución de equipo tecnológico, indicadores para alcanzar los objetivos de control interno y resultados de la evaluación del Plan estratégico 2007-2011, entre otros.

---

86. *Ibidem*.

87. Ver: [http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/inspeccion\\_fiscal.html](http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/inspeccion_fiscal.html)

88. Ver la respuesta de Costa Rica al cuestionario, p. 34, *supra* nota 4.

89. *Ibidem*.

#### 4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[202] El MP cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 4.1 de este Informe. Sin embargo, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[203] Primero, en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas, el Comité observa que al igual que la PEP como dependencia de la PGR, la FAPTA, como una de las fiscalías especializadas del MP, no cuenta con su propia memoria anual. Por lo tanto, gran parte de la rendición de cuentas de la FAPTA se hace a través de un apartado en la Memoria Anual del MP. Sin embargo, revisando la Memoria Anual del MP correspondiente a 2011, el Comité observa que aunque la FAPTA tenía en ese momento un año en funciones, los resultados sobre la misma ocupan menos de una página de más de cien del informe. Además, ese documento contiene muy poca información útil sobre los resultados del cumplimiento de las funciones de la FAPTA. El Comité formulará una recomendación sobre el particular. (Véase la recomendación 4.4.1 en el capítulo II de este informe).

[204] Segundo, en cuanto a la manera de suministrar información a los ciudadanos, dar a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientar sobre cómo realizar gestiones ante la misma, el Comité observa que la FAPTA no cuenta con su propio portal en Internet y que hay poca información sobre la entidad en la página en Internet del MP. En este contexto, en el documento de la asociación “Costa Rica Íntegra” remitido por el Programa “Estado de la Nación” se indica que *“gran parte de las respuestas para este cuestionario fueron recopiladas de un oficio especial...que preparó la FAPTA a solicitud de las investigadoras, debido a que la información no se encontraba con ese nivel de detalle en las memorias ni en la página web.”*<sup>90</sup> En este sentido, cabe señalar que en noviembre de 2012, el portal en Internet del MP quedó en el lugar 102 de los 133 sitios en Internet evaluados por la *INCAE Business School*, en su informe “Evaluación de la Calidad de la Prestación de Servicios Públicos por Medios Digitales en Costa Rica”.<sup>91</sup> El Comité, tomando en cuenta la importancia del portal en Internet para los fines aludidos anteriormente, formulará una recomendación. (Véase la recomendación 4.4.2 en el capítulo II de este informe).

[205] Tercero, durante las reuniones con la FAPTA realizadas en el marco de la visita *in situ*, los representantes de esta institución informaron que existe una insuficiencia de recursos humanos para el adecuado cumplimiento de las responsabilidades asignadas a la misma. En este sentido, explicaron que en el año 2005, el Presidente de la República otorgó 20 plazas de fiscal al Ministerio Público para el abordaje de los delitos de corrupción, pero algunas de ellas fueron utilizadas por el Fiscal General anterior para reforzar otras áreas del MP, quedando la FAPTA con sólo 15 de los 20 fiscales programados, o sea el 75% de los fiscales previstos originalmente. El Comité formulará una recomendación tomando en cuenta esta situación. (Véase la recomendación 4.4.3 en el capítulo II de este informe).

[206] Cuarto y relacionado con lo anterior, los fiscales de la FAPTA explicaron en el marco de la visita *in situ* que debido a la falta de recursos humanos, tienen que priorizar los casos que van a ser atendidos por la FAPTA y dejar que las fiscalías provinciales o distritales tramiten el resto de los casos. En este sentido, notaron que lo anterior destaca la importancia de contar con un fiscal

---

90. Ver documento de la asociación “Costa Rica Íntegra” remitido por el Programa “Estado de la Nación”, p. 33, *supra nota* 21.

91. Este documento está disponible en: <http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/premios/InformeWeb2012.pdf>

anticorrupción en cada provincia. El Comité formulará una recomendación al respecto. (Véase la recomendación 4.4.4 en el capítulo II de este informe).

[207] Quinto, durante la visita *in situ* también se manifestó que los únicos investigadores con los que cuenta la FAPTA se encuentran en la Unidad de Fraudes del O.I.J. Asimismo, que los tiempos de respuesta de estos investigadores se retardan porque no están dedicados exclusivamente a la investigación de delitos de corrupción, tienen cargas laborales adicionales correspondientes a la investigación de otros delitos. Además, se comenta que hace falta contar con una unidad compuesta de investigadores capacitados específicamente en el área de anticorrupción. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 4.4.5 en el capítulo II de este informe).

[208] Sexto, durante las reuniones con el MP en el marco de la visita *in situ*, varios fiscales de la FAPTA explicaron que aunque los fiscales reciben capacitación específica sobre los delitos en contra de los deberes de la función pública, esto no sucede con respecto a los jueces designados para conocer los casos de esta clase. Por lo tanto, los fiscales explicaron que la capacitación para los jueces en este campo podría fortalecer los esfuerzos destinados a sancionar los actos de corrupción. El Comité formulará una recomendación tomando en consideración esta situación. (Véase la recomendación 5.4.2 en el capítulo II de este informe).

#### **4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

[209] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ*, se recabó información relativa a los resultados que ha obtenido el MP en el cumplimiento de sus funciones, entre la que se destaca la siguiente:

[210] Con respecto a la función de investigación y detección de los actos de corrupción, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado incluye un cuadro sobre la tramitación de los delitos en contra de la función pública entre 2007 y 2011, el cual toma en cuenta los casos tramitados hasta 2010 por la antigua Fiscalía de los Delitos Económicos, (entidad que antes de 2011 era la encargada de tramitar los delitos en contra de la función pública), más los casos tramitados por la FAPTA en 2011. Este cuadro muestra el siguiente número de casos entrados por año: 2007 – 105; 2008 – 201; 2009 – 129; 2010 – 163; y 2011 – 460. Asimismo, en la respuesta se incluye una serie de cuadros que muestran el número de casos en circulación (entrados y salidos) en la FAPTA durante 2011, el número de casos en circulación (entrados y salidos) en la FAPTA en virtud de la creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda entre 2007 y 2011, y los casos en los casos tramitados por la FAPTA ante la Jurisdicción Penal de Hacienda en el mismo periodo.

[211] En relación con las anteriores cifras, el Comité observa un incremento considerable en el número de casos entrados a partir de la puesta en marcha de la FAPTA en 2011, lo cual indica que la entidad está sirviendo para uno de sus fines esperados. Asimismo, el Comité observa lo expresado por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario, en el sentido de que se están tramitando más casos ante la FAPTA y la misma está resolviendo una mayor cantidad de casos.

[212] Sin embargo, durante la visita *in situ*, algunos representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia informaron que una queja frecuente del público tiene que ver con la larga duración de los procesos de corrupción. En este sentido, en el documento de la asociación “Costa Rica Íntegra” remitido por el Programa “Estado de la Nación” se señala “...la tardanza en la resolución de los casos de corrupción, sobretudo los de alto perfil público, muchos de estos juicios han sobrepasado los 10 años de duración sin una sentencia definitiva” y con relación al mismo

expresa que “*Este retardo de la justicia contribuye a aumentar la sensación de impunidad del ciudadano en estos casos.*”<sup>92</sup> Sobre el particular, el Comité denota la ausencia de información estadística sobre la duración promedio de los casos tramitados ante la Jurisdicción Penal de Hacienda por el MP, lo cual podría ayudar en una determinación de los pasos necesarios para lograr una mayor eficiencia en los procesos. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 4.4.6. en el capítulo II de este informe).

[213] Durante la visita *in situ*, los representantes de la FAPTA presentaron una gráfica que muestra lo siguiente con respecto a las causas investigadas y tramitadas por la FAPTA en 2011: total de causas – 178; desestimadas – 48; acumuladas – 18; remisión a otra autoridad – 89; incompetencia – 9; sobreseimientos – 8; acusación – 4; y criterios de oportunidad – 2.

[214] Asimismo, se presentó otra gráfica que muestra los siguientes datos relativo a las causas recibidas por todas las fiscalías territoriales en el país, para ser tramitadas por la FAPTA: total de causas – 1295; desestimadas – 632; acumuladas – 3; remisión a otra autoridad – 231; incompetencia – 0; sobreseimientos – 302; acusación – 125; y criterios de oportunidad – 0.

[215] Con respecto a las cifras que se desprenden de los anteriores párrafos, el Comité observa que la FAPTA, como la entidad del MP encargada de la persecución de los delitos en contra de la función pública, está sirviendo de manera adecuada para centralizar y canalizar las denuncias por delitos en contra de la función pública. Las cifras también indican que hay una cierta coordinación entre la FAPTA y las fiscalías territoriales.

[216] Sin embargo, con respecto a los casos recibidos por la FAPTA de las fiscalías territoriales en 2011, el Comité observa que una cantidad significativa de los mismos, 632 casos (49%), fueron desestimadas, mientras que 302 (23%) resultaron en sobreseimientos. Preocupa al Comité que casi el 75% de los casos recibidos de las fiscalías territoriales en 2011 fueron desestimadas o resultaron en sobreseimientos, mientras que sólo el 10% de los mismos resultaron en acusaciones formales presentadas ante el Poder Judicial.

[217] Con relación a los criterios aplicados por el MP para la tramitación de casos, durante la visita *in situ*, los representantes de la FAPTA explicaron que si los hechos denunciados indican la comisión de un delito, el caso es investigado y sometido a juicio. En este sentido, resulta extraño que la mayoría de los casos provenientes de las fiscalías territoriales, las cuales supuestamente ya han sido evaluadas por parte de esas fiscalías en cumplimiento de las Reglas practicadas para la aplicación de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública, resulten en desestimaciones.

[218] El Comité considera que podría beneficiar al Estado analizado la realización de un estudio para determinar las razones por el bajo número de casos enviados a la FAPTA por las fiscalías territoriales que resultan en la instauración de una acusación formal ante el Poder Judicial y formulará la recomendación pertinente. (Véase la recomendación 4.4.7 en el capítulo II de este informe).

[219] Asimismo, el Comité no cuenta con información sobre del seguimiento realizado con respecto a los 320 casos<sup>93</sup> remitidos a otra autoridad. Con respecto a este punto, en el documento de la asociación “Costa Rica Íntegra” remitido por el Programa “Estado de la Nación” se señala que “las

---

92. Ver documento de la asociación “Costa Rica Íntegra” remitido por el Programa “Estado de la Nación”, p. 27, *supra nota* 21.

93. Sumando los 89 casos investigados por la FAPTA y remitidas a otra institución, mas los 231 casos enviados a la FAPTA pos las fiscalías territoriales y luego remitidas a otra institución por la FAPTA.

*desestimaciones y traslados de casos son indicadores crecientes y preocupantes, pues aumentan la posibilidad de que las denuncias no terminen en juicios. Cuando esto sucede, no se informa adecuadamente del destino de la mayoría de casos que no van a los tribunales y ello alimenta el sentimiento de impunidad en la ciudadanía. Cuando esto sucede, no se informa adecuadamente del destino de la mayoría de casos que no van a los tribunales y ello alimenta el sentimiento de impunidad en la ciudadanía.”<sup>94</sup>* El Comité formulará una recomendación en vista de la ausencia de resultados en este campo. (Véase la recomendación 4.4.8 en el capítulo II de este informe).

[220] El Comité también denota una ausencia de resultados sobre el cumplimiento de las funciones de la FAPTA con respecto a sus funciones atinentes a la investigación de casos de corrupción donde el imputado es un funcionario del propio MP o del Poder Judicial y formulará una recomendación al respecto. (Véase la recomendación 4.4.9 en el capítulo II de este informe).

[221] Por último, dado que el Comité observa que no existen estadísticas sobre el número de casos que resultaron en la no imputación de responsabilidad o en absolución, como resultado de prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, formulará una recomendación. (Véase la recomendación 4.4.10 en el capítulo II de este informe).

#### **4.4. Conclusiones y recomendaciones**

[222] Con base en el análisis integral realizado con respecto al MP en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[223] Costa Rica ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al MP, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del capítulo II de este informe.**

[224] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 4.4.1. Establecer criterios y parámetros uniformes para el contenido de las Memorias Anuales del MP, y procurar incluir información relevante sobre el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la FAPTA, y en particular, las atinentes a la detección e investigación de actos de corrupción (Véase sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.2. Fortalecer el portal en Internet del MP, con la inclusión de información relevante sobre la FAPTA, con el fin de que esta herramienta tecnológica sirva como un mecanismo útil para el suministro de información a los ciudadanos sobre los objetivos y funciones de la FAPTA, dé a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de esas funciones, y oriente a los ciudadanos sobre cómo realizar gestiones ante la misma. (Véase sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.3. Dotar a la FAPTA con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles. (Véase sección 4.2. del capítulo II de este informe).

---

94. Ver documento de la asociación “Costa Rica Íntegra” remitido por el Programa “Estado de la Nación”, p. 49, *supra nota* 21.

- 4.4.4. Considerar la posibilidad de asignar a un fiscal anticorrupción de la FAPTA en cada provincia del Estado. (Véase sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.5. Considerar la posibilidad de crear una unidad compuesta de investigadores especializados en materia de anticorrupción, dentro del OIJ. (Véase sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.6. Mantener información estadística sobre la duración promedia de los casos de corrupción tramitados por la FAPTA, incluyendo información con respecto a las etapas de investigación y juicio para ayudar en la determinación de los pasos necesarios para lograr una mayor eficiencia en la tramitación de causas. (Véase sección 4.3. del capítulo II de este informe).
- 4.4.7. Realizar un estudio para determinar las razones por el bajo número de casos enviados a la FAPTA por las fiscalías territoriales que resultan en la instauración de una acusación formal ante el Poder Judicial. (Véase sección 4.3. del capítulo II de este informe).
- 4.4.8. Realizar un mayor seguimiento con respecto a las causas remitidas por la FAPTA a otra autoridad para procesamiento y mantener resultados sobre la forma en que concluyen las mismas. (Véase sección 4.3. del capítulo II de este informe).
- 4.4.9. Mantener información estadística sobre el cumplimiento de las funciones de la FAPTA con respecto a sus funciones atinentes a la investigación de casos de corrupción donde el imputado es un funcionario del propio MP o del Poder Judicial, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas. (Véase sección 4.3. del capítulo II de este informe).
- 4.4.10. Mantener información estadística sobre los resultados de las actividades de investigación y detección de actos de corrupción, de tal manera que se pueda contar con información sobre el número de casos en cada uno de los últimos cinco años que se encontraban listos para su decisión; y el número de casos que resultaron en la no imputación de responsabilidad o en absolución, como resultado de prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas. (Véase sección 4.3 del capítulo II de este informe).

## **5. JURISDICCIÓN PENAL DE HACIENDA Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

### **5.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[225] La Jurisdicción Penal de Hacienda cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[226] El artículo 1º de la Ley No. 8275, Ley de Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública, dispone que el principal objetivo de esta entidad es conocer y resolver, definitivamente, sobre los delitos contra los deberes de la función pública y los delitos tributarios, así como las contenidas en la Ley General de Aduanas y la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

[227] El artículo 2º de la Ley antes referida dispone que el conocimiento de los hechos ilícitos referidos en esta Ley corresponderá a los tribunales de justicia, por medio del Juzgado y Tribunal Penales de Hacienda y de la Función Pública. El artículo 2º también prevé que si los asuntos por conocer por los tribunales creados en esta Ley no resultan suficientes para justificar la existencia del tribunal especializado, la Corte podrá fijarles otra competencia material por ejercer, en el ámbito del circuito en que se encuentra ubicado.

[228] Por lo tanto, la Circular No. 36-2003 de la CSJ en su artículo 1º, dispone que *“corresponderá al Juzgado Penal y al Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José asumir por recargo el conocimiento de los asuntos a que se refiere la Ley de Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, conforme a un rol entre los jueces que integran esos despachos, de acuerdo a sus respectivas competencias. En consecuencia ese Juzgado por recargo atenderá las causas nuevas de esa Jurisdicción. La etapa preparatoria la atenderá un juez, y la etapa intermedia deberá ser conocida por otro juez distinto del que atendió la etapa preparatoria. La etapa de juicio será conocida por el Tribunal Penal de ese Circuito, por recargo.”*

[229] Con respecto a la autonomía de la Jurisdicción Penal de Hacienda para el cumplimiento de sus funciones, el artículo 2º de la LOPJ, establece que *“el Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución Política y la ley. Las resoluciones que dicte, en los asuntos de su competencia, no le imponen más responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos.”* Además de lo anterior, el artículo 5º del Código Procesal Penal, establece, en la parte pertinente, que en su función de juzgar, los jueces son independientes de todos los miembros de los poderes del Estado. El artículo 5º también expresa que *“por ningún motivo, los otros órganos del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de las causas, ni la reapertura de las terminadas por decisión firme; tampoco podrán interferir en el desarrollo del procedimiento. Deberán cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por los jueces, conforme a lo resuelto.”*

[230] Con respecto al ejercicio de funciones en concurrencia, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que dado su objetivo y autonomía, éstas no existen con respecto al Poder Judicial. Asimismo, el Estado analizado explica en su respuesta que no hay excepciones en el ámbito de funciones del Poder Judicial. En esta conexión, el artículo 3º de la Ley No. 8275, dispone en su parte pertinente que los despachos de la Jurisdicción Penal de Hacienda que se establezcan tendrán competencia en todo el territorio nacional y como asiento el circuito judicial que designe la CSJ.

[231] Con respecto a la adopción de decisiones en la Jurisdicción Penal de Hacienda en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que *“el proceso para encauzan los casos que corresponden a la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública esta comprendido en el Código Procesal Penal –Ley N° 7594-. Este proceso se caracteriza como un sistema acusatorio, compuesto por tres etapas (preparatoria, intermedia y juicio oral y público), con la posibilidad de interponer recursos contra la sentencia que dicte el Tribunal Penal...”*<sup>95</sup>

[232] En cuanto a los recursos de revisión que corresponden contra las decisiones adoptadas, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que *“contra la determinación dictada por el Tribunal de Juicio cabe el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Apelación de Sentencia...y el Recurso de Casación ante la Sala Tercera de la CSJ...”*<sup>96</sup> Asimismo, los artículos 320 y 340 del

---

95. Ver respuesta de Costa Rica al cuestionario con relación al Poder Judicial, p. 3, disponible en [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_cri\\_juris.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_cri_juris.pdf)

96. *Ibidem*, p. 4.

Código Procesal Penal posibilitan la presentación de un recurso de apelación por parte del MP o la víctima frente a un dictamen de sobreseimiento.

[233] Con respecto a la máxima autoridad de la Jurisdicción Penal de Hacienda, el artículo 156 constitucional establece que la CSJ es el tribunal superior del Poder Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados del ramo judicial. El artículo 157 constitucional dispone que la CSJ estará compuesta por los magistrados necesarios para el buen servicio. En este sentido, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que la CSJ está conformada por 22 magistrados, distribuidos en tres Salas de Casación: Primera, Segunda y Tercera, y la Sala Constitucional, integradas por cinco magistrados, con excepción de la última que es con siete magistrados.<sup>97</sup>

[234] Con respecto a la elección de magistrados, el artículo 158 constitucional establece que se elegirán por periodos de ocho años y por los votos de dos tercios de la Asamblea Legislativa. Asimismo, el artículo 159 constitucional contiene los requisitos para ser magistrado.

[235] En cuanto a la remoción o disciplina de magistrados, el artículo 165 constitucional dispone que *“no podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación a causa, o por los otros motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la CSJ, en votación secreta no menor de los dos tercios del total de sus miembros.”* Asimismo, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado expresa que *“si esa misma cantidad de Magistrados consideran que lo procedente es la revocatoria de nombramiento, la Corte lo comunicará así a la Asamblea Legislativa para que resuelva lo que corresponda. Las correcciones de advertencia y amonestación se adoptarán por mayoría simple del total de los Magistrados. Para sustanciar las diligencias seguidas contra un Magistrado, la Corte designará a uno de sus miembros como órgano instructor.”*<sup>98</sup>

[236] Respecto de la manera de determinar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Jurisdicción Penal de Hacienda, el artículo 3° de la Ley No. 7333 dispone que la CSJ establecerá el número de jueces tramitadores y decisores, así como de los otros servidores judiciales que deben tener los tribunales de cualquier categoría y materia; para ello, tomará en consideración las necesidades propias del despacho, en aras de la mejor realización del servicio público de la justicia. En este sentido, en la respuesta al cuestionario aclara que *“esta designación del personal se realiza en atención a la información que le rinde el Consejo Superior del Poder Judicial en su informe anual, donde se detalla –además del funcionamiento de los tribunales de la República y demás órganos, departamentos y oficinas del Poder Judicial- las necesidades que existan en materia de personal, de instalaciones y recursos, para el desempeño debido y correcto de la función judicial.”*<sup>99</sup>

[237] La selección de los funcionarios del Poder Judicial, incluidos los de la Jurisdicción Penal de Hacienda, se rige por lo dispuesto en la Ley No. 5155, Estatuto de Servicio Judicial. El artículo 66 de este Estatuto establece el sistema de carrera judicial, el cual tiene como finalidad, *“...regular, por medio de concurso de antecedentes y de oposición, el ingreso, los traslados y los ascensos de los funcionarios que administren justicia, con excepción de los Magistrados, desde los cargos de menor rango hasta los de más alta jerarquía dentro del Poder Judicial.”* Por su parte, el artículo 18 del Estatuto contiene los requisitos para ingresar al servicio judicial.

---

97. *Ibidem*, p. 5.

98. *Ibidem*, p. 6.

99. *Ibidem*.



[238] Con referencia a la responsabilidad de los funcionarios del Poder Judicial, en la respuesta al cuestionario explica que los mismos están sujetos al régimen general de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y de responsabilidad al igual que los demás servidores del Estado costarricense así como, al régimen especial, regulado, principalmente, en la LOPJ.<sup>100</sup>

[239] El Poder Judicial cuenta con un Manual Descriptivo de Clases por Puestos, el cual especifica las funciones de los servidores de la Jurisdicción Penal de Hacienda, incluyendo su naturaleza, tareas típicas, y responsabilidades, entre otros aspectos.

[240] En cuanto a la capacitación periódica de los funcionarios del Poder Judicial, la Ley No. 6593 dispone que le corresponde a la Escuela Judicial, sin perjuicio de los otros mecanismos de capacitación que pueda establecer la Corte. La Ley N° 8275, en su artículo 4, efectúa un encargo específico a la Escuela Judicial de capacitar en forma permanente a los funcionarios de la Jurisdicción Penal de Hacienda, en la materia de su competencia. Sobre la capacitación específica impartida, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que *“actualmente, la Escuela Judicial ofrece un Programa de Especialización para jueces y juezas que incluye un programa de Nivelación General Básica y un Programa de Especialización Penal. Además, se esta incursionando en el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (en adelante FIAJ), que se dirige a todas aquellas personas, profesionales en el campo del Derecho, que aspiran cumplir la función jurisdiccional, dotándola de recursos que le permitan una mejor actuación y proyección de su quehacer.”*<sup>101</sup> Asimismo, la página en Internet del Poder Judicial incluye un centro de capacitación virtual para la capacitación en línea de los funcionarios del Poder Judicial.

[241] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente la existencia de los siguientes procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas del Poder Judicial: la Ley No. 7594, Código Procesal Penal, el cual, en su segunda parte, delimita los diversos procesos que comprenden la vía penal, alude a las instancias que la componen y los encargados de realizarlos; la Ley No. 8275, que regula el elemento subjetivo, procedimental y normativo de la Jurisdicción Penal de Hacienda; y el artículo IX del Circular No. 36-2003 de la Corte Plena del Poder Judicial, las Reglas practicadas para la aplicación de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública.

[242] En cuanto a acciones de fortalecimiento institucional, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que la CSJ ha implementado en el Juzgado y el Tribunal Penales encargados de la Jurisdicción Penal de Hacienda, el Proyecto de Oralidad y Moderna Gestión, la cual gestiona el estudio, análisis, rediseño e implementación de nuevas formas de trabajo ajustadas a las características y necesidades de cada despacho, teniendo como norte las políticas institucionales de acceso a la justicia, oralidad y cero papel.

[243] Con respecto a la implementación de sistemas o tecnologías modernas, durante la visita *in situ*, se tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones del Juzgado Penal Digital, el cual, entre otros aspectos, pretende disminuir los tiempos de resolución de casos y la mejora en la percepción y atención de los usuarios.

[244] Para suministrar información a los ciudadanos acerca de los objetivos y funciones de la Jurisdicción Penal de Hacienda, los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y de cómo realizar gestiones ante la misma, en la respuesta al cuestionario explica que esto

---

100. *Ibidem*, p. 8.

101 *Ibidem*, p. 9.

se realiza de las siguientes tres maneras: 1) por medio de la Contraloría de Servicios, que informa y orienta a los usuarios sobre la organización, funcionamiento y servicios que brinda el Poder Judicial; (2) a través del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, encargado de difundir información institucional de interés público hacia los medios de comunicación; y 3) a través de sus oficinas, donde el agraviado puede conocer del estado de su proceso y conversar con el juez encargado de tramitar la gestión.<sup>102</sup>

[245] Con relación a los mecanismos de control interno, los entes del Poder Judicial, incluyendo la Jurisdicción Penal de Hacienda, se encuentran sujetos a la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno. Por lo tanto, el Consejo Superior del Poder Judicial cuenta con una Unidad de Control Interno, la cual *“...es la instancia encargada de verificar el cumplimiento de la Ley N° 8292 dentro de la organización, así como del “Manual de Normas General de Control Interno de la CGR y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización”, asimismo, le corresponde implementar los Planes Operativos, Procesos de Autoevaluación y el Sistema de Valoración de Riesgos (SERVI- PJ). Esta unidad cuenta con competencia en todo el territorio nacional.”*<sup>103</sup>

[246] En cuanto a la atención a reclamos y atención a denuncias o quejas relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos, el Poder Judicial cuenta, en primer lugar, con la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, un órgano adscrito al Consejo Superior del Poder Judicial, *“...encargado de que el usuario reciba la mejor atención en cada una de las diligencias que realice en cualquier dependencia del Poder Judicial incluyendo, claro esta, la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública.”*<sup>104</sup>

[247] Adicionalmente, el Poder Judicial cuenta con el Tribunal de Inspección Judicial, el cual, de conformidad con el artículo 184 de la Ley No. 7333, *“...ejerce control regular y constante sobre todos los servidores del Poder Judicial...y...vigila el buen cumplimiento de los deberes; tramita las quejas que se presenten contra esos servidores; instruye las informaciones al tener conocimiento de alguna irregularidad y resuelve lo que proceda respecto del régimen disciplinario, sin perjuicio de las atribuciones que tengan en la materia otros órganos y funcionarios del Poder Judicial.*

[248] Por su parte, el artículo 183 de la Ley. No. 7333 establece que las faltas atribuibles a los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial o del Tribunal de Inspección Judicial serán conocidas por la Corte Plena.

[249] Respecto de la manera de garantizar los recursos presupuestales, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado explica que *“el Poder Judicial provee las necesidades materiales de los Despachos Judiciales encargados de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública. En particular, el Administrador General del Segundo Circuito Judicial de San José –donde se encuentran ubicados el Juzgado Penal y el Tribunal Penal de Hacienda Pública- formula el anteproyecto del presupuesto, mismo que es conocido y aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial –Artículo 81 inciso 17) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 7333-. La aprobación final del proyecto de Presupuesto del Poder Judicial, corresponde a la CSJ. Conviene anotar que la información presupuestaria puede ser verificada por la ciudadanía en el link previsto por el Departamento de Planificación del Poder Judicial.”*<sup>105</sup>

---

102. *Ibidem*, p. 11.

103. *Ibidem*, p. 12.

104. *Ibidem*.

105 *Ibidem*, p. 13.

[250] Con respecto a los mecanismos de coordinación con otros órganos de control, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que existe una coordinación entre el MP y el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial.<sup>106</sup> En virtud de esta coordinación, todos los fiscales tienen acceso al escritorio virtual, en donde pueden consultar la base de datos de la Corte. Asimismo, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa del mecanismo de coordinación establecida en la Circular No. 36-2003 de la CSJ, que establece que *“el Fiscal del lugar recibirá la denuncia y practicará la investigación preparatoria cuando corresponda. Utilizando los medios de comunicación disponibles en el lugar, solicitará al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, la autorización para realizar cualquier acto que requiera la aprobación de juez (como por ejemplo la imposición, o modificación de medidas cautelares, solicitudes de anticipos de prueba, allanamientos, decomisos, etc.). Si así procediera, el Juez Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, se pronunciara sobre la solicitud y cuando corresponda podrá comisionar la realización del acto a la autoridad judicial del lugar del hecho, cuando deba practicarse alguna diligencia en ese sitio.”*<sup>107</sup>

[251] En cuanto a la rendición de cuentas, el artículo 80 de la Ley No. 7333 establece que el Consejo Superior del Poder Judicial le rendirá un informe anual a la CSJ, sobre su funcionamiento y el de los tribunales de la República y demás órganos, departamentos y oficinas del Poder Judicial. Con respecto al contenido del informe, el mismo artículo prevé que *“...incluirá las necesidades que, a su juicio, existan en materia de personal, de instalaciones y recursos, para el desempeño debido y correcto de la función judicial. Antes de elaborarlo, pedirá a los tribunales, los juzgados y los demás órganos, oficinas y departamentos, un informe anual sobre la labor realizada y las necesidades concretas.”*

[252] Asimismo, el artículo 180 de la anterior normativa establece que cada tribunal remitirá al Consejo, en la primera quincena del mes de enero de cada año, un informe del trabajo realizado durante el año anterior; mientras que el artículo 179 requiere que la presentación por parte los jefes de despacho al Consejo Superior, cada tres meses, información sobre los asuntos ingresados, pendientes, resueltos, con indicación de las sentencias definitivas o interlocutorias dictadas, la justificación por atrasos, o otros datos de interés. En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que la anterior información es procesada por el Departamento de Planificación del Poder Judicial y publicada electrónicamente en la página en Internet de ese Departamento, disponible en <http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/>

## **5.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[253] El Poder Judicial y la Jurisdicción Penal de Hacienda cuentan con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 5.1 de este informe. Sin embargo, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[254] Primero, en las reuniones sostenidas con representantes de organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y representantes académicos, en el marco de la visita *in situ*, se indicó que los ciudadanos ven la mora judicial como un problema grave en Costa Rica. En el mismo sentido, el Presidente de la Sala Tercera opinó, durante las reuniones sostenidas con el Poder Judicial, que la crítica más frecuente con respecto a la entidad, desde el punto de vista de la sociedad, es la mora judicial.

---

<sup>106</sup> *Ibidem*.

<sup>107</sup> *Ibidem*.

[255] El Comité observa con relación a lo anterior, que los representantes del Poder Judicial no pudieron decir si contar con un tribunal o juzgado especializado de la forma autorizada por la Ley de Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda podría ayudar a remediar el problema de la mora judicial. Tampoco se sabía si existían suficientes delitos en la materia para justificar la creación de un juzgado o tribunal especializado. En la opinión del Presidente de la Sala Tercera, parte del problema también resulta de la concertación de todos los delitos de corrupción y la función pública en San José. El Comité considera útil que el Estado analizado evalúe si la cantidad de casos relacionados a los delitos objeto de la Ley de Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda amerita la creación de cortes especializadas de la forma contemplada por ley y formulará una recomendación al respecto. (Véase la recomendación 5.4.1 en el capítulo II de este informe).

[256] Segundo, durante la visita *in situ*, los representantes de FAPTA expresaron la necesidad de contar con capacitación adicional y especializada a los jueces del Poder Judicial con respecto a los delitos relacionados con la función pública. Se agregó, por parte de los representantes del MP, que la falta de conocimiento especializado por parte de muchos jueces estaba resultando en retrasos en los procesos judiciales. En un sentido similar, en la respuesta al cuestionario también se pone de presente que el personal de la Jurisdicción Penal de Hacienda se beneficiaría de una mayor capacitación en cuanto a esta categoría de delitos. Una jueza manifestó no haber recibido capacitación al respecto durante sus ocho años de servicio. El Comité formulará una recomendación tomando en cuenta esta necesidad y los problemas aludidos en el párrafo anterior. (Véase la recomendación 5.4.2 en el capítulo II de este informe).

[257] Tercero, y relacionado con lo anterior, en la respuesta al cuestionario y también durante las reuniones sostenidas con la PEP en el marco de la visita *in situ*, los representantes de esa institución explicaron que también hace falta una estrategia para informar a los jueces sobre el fundamento jurídico y los objetivos de la figura del daño social. El Comité formulará una recomendación en este sentido. (Véase la recomendación 5.4.3 en el capítulo II de este informe).

[258] Cuarto, en la visita *in situ*, los representantes de la Jurisdicción Penal de Hacienda manifestaron la necesidad de contar con recursos financieros adicionales. Expresaron que en este sentido han informado al jerarca del Poder Judicial sobre los problemas relacionados con la carga de trabajo y la falta de recursos. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 5.4.4 en el capítulo II de este informe).

[259] Quinto, se puso de presente durante la visita *in situ* que algunos de los jueces no tienen acceso al escritorio virtual en algunas Salas de Juicio, lo cual facilitaría el cumplimiento de sus funciones. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 5.4.5 en el capítulo II de este informe).

### **5.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

[260] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ*, se recabó información relativa a los resultados que ha obtenido la Jurisdicción Penal de Hacienda en el cumplimiento de sus funciones, entre la que se destaca la siguiente:

[261] En cuanto a las funciones de la Jurisdicción Penal de Hacienda relacionadas con la sanción de los actos de corrupción que generan responsabilidad penal, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado incluye el siguiente cuadro, con respecto al cual, el Estado analizado explica que “...permite divisar el volumen de trabajo por año del Tribunal Penal, además el porcentaje de casos

*fallados con sentencia en relación con el número total de casos terminados, que para el año 2007 es de 68.07%; en el año 2008 es de 69.81%, en el 2009 es de 64.73%, en el 2010 es de 72.50% y en el 2011 es de 70.89%....Así, el porcentaje de casos fallados con sentencia por delitos contra los deberes de la función pública por el Tribunal Penal en atención a la totalidad de casos fallados con sentencia por dicho Tribunal es de 27.71% para el año 2007, 20.54% para el año 2008, 29.53% para el 2009, 24.46% para el 2010 y 29.69% para el 2011.*<sup>108</sup>

### MOVIMIENTO OCURRIDO EN LOS TRIBUNALES PENALES 2007 - 2011

Año	Circulante al 1 de enero de cada año	Casos entrados	Casos reentrados	Casos terminados	Fallados con sentencia	Fallados con sentencia en delitos contra los deberes en la función Pública
2007	804	532	97	758	516	143
2008	682	447	71	530	370	76
2009	673	589	100	570	369	109
2010	799	527	68	451	327	80
2011	943	624	142	646	458	136

[262] El Comité observa que del cuadro anterior se puede desprender que en el periodo 2007 a 2011, la mayoría (aproximadamente el 70%) de los casos terminados fueron fallados con sentencia.

[263] Asimismo, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado también presentó un cuadro mostrando el número de sentencias dictadas la Jurisdicción Penal de Hacienda, sea imputación de responsabilidad o absolutoria, y el tipo de delito correspondiente a esas sentencias, entre 2007 a 2011.<sup>109</sup>

[264] Con respeto a ese cuadro, el Estado analizado expresa que “*dentro de las resoluciones en que se dictó una absolutoria, se incluyen los casos relativos a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad, así como los procesos en que el hecho denunciado no se realizó, no fue cometido por el imputado, no esté adecuado a una figura penal, no exista una certeza en que el imputado cometió el delito o bien, medie una causa de justificación o inculpabilidad. Por lo anterior, no contamos con información estadística suficiente que nos permita aseverar cuántas de estas resoluciones absolutorias son producto de la prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad y cuántas se atribuyen a otro motivo.*”<sup>110</sup> En vista de la ausencia de información sobre el número de casos que resultaron en la no imputación de responsabilidad o en absolución, como resultado de prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, el Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 5.4.6 en el capítulo II de este informe).

[265] En el mismo sentido, el Comité observa que la información presentada no permite determinar el número de casos en cada uno de los últimos cinco años que se encontraban listos para su decisión.

108. *Ibidem*, p. 16.

109. *Ibidem*, p. 17.

110. *Ibidem*.

El Comité formulará la recomendación pertinente. (Véase la recomendación 5.4.6 en el capítulo II de este informe).

[266] Por último y con respecto a la mora judicial aludida en la sección 5.2 anterior, el Comité denota la ausencia de información estadística sobre la duración promedio de los casos de corrupción resueltas por la Jurisdicción Penal de Hacienda, lo cual podría ayudar en una determinación de los pasos necesarios para lograr una mayor eficiencia en los procesos tramitados y formulará la recomendación pertinente. (Véase la recomendación 5.4.7 en el capítulo II de este informe).

#### **5.4. Conclusiones y recomendaciones**

[267] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Jurisdicción Penal de Hacienda en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[268] Costa Rica ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Jurisdicción Penal de Hacienda, como un órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 5 del capítulo II de este informe.**

[269] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 5.4.1. Realizar un estudio para determinar si existe mora judicial injustificada en el juzgamiento de los delitos de corrupción, y de haberla, que se estudien sus causas y se tomen las medidas necesarias para remediarla. (Véase sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.2. Establecer un programa de capacitación permanente sobre los delitos de corrupción para los jueces encargados del juzgamiento de estos delitos. (Véase sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.3. Establecer mecanismos para concientizar a los jueces encargados del juzgamiento de los delitos de corrupción, sobre el fundamento jurídico, los objetivos que persigue, e incrementar el conocimiento sobre la dimensión del daño social que provocan los actos de corrupción y la necesidad de establecer su debida reparación. (Véase sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.4. Dotar a la Jurisdicción Penal de Hacienda con los recursos financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles. (Véase sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.5. Otorgar a todos los jueces encargados del juzgamiento de los delitos de corrupción, acceso al escritorio virtual en las Salas de Juicio, para facilitar y mejorar el cumplimiento de sus funciones. (Véase sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.6. Mantener información estadística referida a las actividades de sanción de actos de corrupción, de tal manera que se pueda contar con información sobre el número de casos en cada uno de los últimos cinco años que se encontraban listos para su decisión; y el número de casos que resultaron en la no imputación de responsabilidad o en absolución, como resultado de prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los

términos establecidos, orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas. (Véase sección 5.3. del capítulo II de este informe).

- 5.4.7. Mantener información sobre la duración promedio de los casos de corrupción resueltas por los jueces encargados del juzgamiento de los delitos de corrupción, para ayudar en la determinación de los pasos necesarios para lograr una mayor eficiencia en la tramitación de causas. (Véase sección 5.3. del capítulo II de este informe).

### III: BUENAS PRÁCTICAS

[270] De conformidad con lo previsto en el apartado V de la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda* y en la *Estructura* adoptada por el Comité para los informes de dicha Ronda, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por el Estado analizado, las cuales ha deseado compartir con los demás países integrantes del MESICIC, por considerar que pueden ser de beneficio para los mismos:

#### - En relación con la PEP:

[271] “La recuperación del daño social en delitos de corrupción”: Consta de reclamos civiles presentados a iniciativa de la PEP, para obtener el resarcimiento por el daño social provocado por la comisión de actos de corrupción. Estos procesos, entre otros aspectos, son tendientes a “...concientizar a la colectividad sobre la afectación social que provoca la corrupción en el sistema, en aspectos tales como: la pérdida de credibilidad y respeto en las instituciones, el debilitamiento del sistema democrático, el deterioro en el nivel de bienestar de la población, la afectación de la economía nacional, el subdesarrollo que genera...”<sup>111</sup> En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa también que estos procesos han permitido la recuperación de una suma equivalente al US \$15,741,461.59.

[272] Por último, el Estado analizado puso de conocimiento los desafíos existentes con respecto al desarrollo de esta buena práctica consistente en la necesidad de “...fortalecer el mecanismo de delimitación del daño social, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, de tal forma que permita, mediante un fórmula generalizable, la estimación correspondiente en cada caso concreto; asimismo, puede beneficiarse con el diseño de una estrategia que informe a los operadores de justicia y la sociedad civil en general, sobre su fundamento jurídico, los objetivos que persigue, y principalmente, hacer conciencia sobre la dimensión del daño social que provocan los actos de corrupción, y la necesidad de establecer su debida reparación.”<sup>112</sup> (Véase las recomendaciones 1.4.5 y 5.4.4 en el capítulo II de este informe).

#### - En relación con la CGR:

[273] El programa de capacitación denominado “Programa de Nuevas Auditorías”: Un programa ejecutada por las distintas unidades de la CGR de inducción para los funcionarios de elección popular, incluyendo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los jerarcas de ministerios e instituciones descentralizadas, los diputados, regidores, alcaldes, vicealcaldes, intendentes y viceintendentes municipales, la alta dirección de la administración activa, asesores legislativos y

---

111. Ver respuesta de Costa Rica al cuestionario, p. 39, *supra* nota 4.

112. *Ibidem*, p. 63.

asesores de jerarcas de ministerios e instituciones descentralizadas. El programa trata temas tales como, prohibiciones, obligaciones y responsabilidades, el control interno y la auditoría interna, la contratación administrativa, y el tratamiento de denuncias. Además, suministra material impreso, como guía de consulta, sobre las principales responsabilidades y prohibiciones del ejercicio de cargos públicos. El programa es ejecutado por las distintas unidades de trabajo de la CGR, de manera presencial y virtual, al iniciar el nuevo período de gobierno.

**- En relación con la Jurisdicción Penal de Hacienda:**

[274] El “Proyecto de Oralidad y Moderna Gestión de Despachos Judiciales en el Juzgado Penal y el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José”: Lanzado en febrero de 2008, el proyecto consiste en la implementación de nuevas formas de trabajo consistente en un sistema oral con respecto a las audiencias, la desmaterialización del expediente físico mediante la adecuación e implementación de herramientas informáticas, organización del trabajo y roles de las personas, nuevos procesos de gestión del trámite para lograr la mejora continua. Entre los objetivos del proyecto se encuentran los de “...*facilitar y coadyuvar en la articulación de la oralidad utilizando la audiencia como protagonista, disminución de los tiempos de resolución de los casos y la mejora en la percepción y atención de las personas usuarias...*”<sup>113</sup>

**IV. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS<sup>114</sup>**

[275] El Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos nuevos dados por Costa Rica en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por el Comité para su implementación en el informe de la Primera Ronda, sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas<sup>115</sup>, y procederá, según corresponda, a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional por el Estado analizado, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su reformulación, de acuerdo con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.

[276] El Comité también tomará nota en este apartado del informe de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado, y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

---

113. Ver respuesta al cuestionario de Costa Rica con relación al Poder Judicial, p. 3, *supra* nota 94.

114. El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se encuentra incluido en el Anexo I de este informe

115. Disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/cri.htm>



## **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

### **1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

#### Recomendación 1.1:

*Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.*

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Fortalecer el régimen de acceso e ingreso al servicio de la administración pública y el régimen de incompatibilidades e inhabilidades vigente tomando en cuenta, de acuerdo con los alcances que determine la ley y en relación con los cargos que ésta determine, los siguientes aspectos:*

- i. Complementar las normas de ingreso a la función pública fortaleciendo los mecanismos preventivos que faciliten la detección de posibles conflictos de intereses que puedan impedir dicho ingreso, incluyendo los altos cargos públicos.*
- ii. Desarrollar otros mecanismos que identifiquen o detecten causas supervenientes que pudieran ocurrir en el transcurso del ejercicio de la función pública y que pudieran dar lugar a un conflicto de interés.*
- iii. Considerar la posibilidad de impulsar e implementar las medidas que considere apropiadas para establecer y poner en operación sistemas y mecanismos de carácter preventivo que detecten los conflictos de intereses en la función pública. Considerando, entre otras alternativas, la viabilidad y conveniencia de crear instrumentos tales como las declaraciones o registros de intereses o actividades para ciertos cargos públicos- ya sea como parte del régimen de declaraciones patrimoniales de ingresos, activos y pasivos o independientemente de ésta-, sus respectivas actualizaciones periódicas, y la creación y mantenimiento de bases de datos que faciliten a los órganos competentes la realización de búsquedas y consultas.*

[277] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>116</sup> el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[278] – La emisión por la CGR de las Normas de Control Interno para el Sector Público, “...que establecen una estrategia de implementación para formalizar los compromisos, las políticas para el tratamiento de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas y manejo de conflictos de interés. La CGR tiene programado implementar un proyecto para detectar hechos que podrían configurar causales de responsabilidad (incompatibilidades y prohibiciones en materia de compras públicas).”

---

116. Ver sección sobre seguimiento en la respuesta de Costa Rica al cuestionario, p. 3, disponible en [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_cri\\_resp\\_avances.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_cri_resp_avances.pdf)

[279] – El Plan Operativo Institucional 2012 de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), el cual contempla, entre otras, las siguientes acciones a ser concluidas en diciembre de 2012: la elaboración de un sistema o guía para la detección de los conflictos de intereses; la realización de estudio sobre incompatibilidades en el ejercicio de la docencia y de un modelo de directriz para prevenir incompatibilidades en el ejercicio de la docencia

[280] – La presentación a la Asamblea Legislativa, por parte de la PEP, la CGR, el MP y el Instituto Costarricense sobre Drogas, de un proyecto de reforma parcial a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el cual incluye, entre otras disposiciones, las de fortalecer el régimen de incompatibilidades y inhabilidades.

[281] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la anterior medida b) de la recomendación de la sección 1.2 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, considerando que muchos de las acciones reportadas por el Estado analizado tendientes al fortalecimiento del régimen de conflictos de intereses, todavía están pendientes de implementación. Esta medida se reenumerará como la medida a).

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Mantener debidamente actualizado, ampliar y perfeccionar el registro de personas inhabilitadas en la función pública del Régimen del Servicio Civil, con el fin de que pueda constituir -si aún no lo es- un instrumento efectivo para prevenir y detectar nombramientos en la función pública que puedan ser contrarios a las disposiciones vigentes sobre prohibiciones e inhabilidades del servidor público. Considerar la posibilidad de que la consulta a dicho registro, en forma previa a cualesquier nombramiento de servidores públicos de cierto nivel y categoría sea obligatoria.*

[282] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>117</sup> el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[283] – Las medidas tomadas por la DGSC “...para mejorar el registro de inhabilitados, asegurar la actualización de la información contenida en él, y facilitar su utilización como mecanismo efectivo de prevención y detección de nombramientos contrarios a la regulación sobre prohibiciones e inhabilidades...”, incluyendo un sistema automatizado, que “...permite un 100% de verificación del Registro de inhabilitados, para cada uno de los nombramientos efectuados.”

[284] – La inclusión del registro de inhabilitados en el diseño del denominado SAGETH (Sistema Automatizado de Gestión del Empleo y del Talento Humano), desarrollado por la DGSC y en etapa de ejecución.

[285] – La emisión en diciembre de 2011 del Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria en Hacienda Pública de la CGR, el cual incorpora el Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública (SIRSA). El artículo 60 del Reglamento requiere el registro de sanciones disciplinarias, sanciones por responsabilidad patrimonial o por daños, y la prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública dictada por la CGR. Asimismo, el artículo 61 establece que cualquier ciudadano podrá consultar al SIRSA. Por último, el artículo 72

---

117. *Ibidem*, pp. 4 y 5.

requiere la consulta al Registro de Sanciones por parte de los sujetos pasivos de fiscalización de la CGR, antes de la realización de nombramientos para ejercer cargos de la Hacienda Pública.

[286] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida d) antes transcrita, teniendo en cuenta, entre otros desarrollos, que ya se requiere la inclusión de las sanciones emitidas por la CGR en el registro aludido, y que se ha logrado la consulta al registro con respecto al 100% de los nombramientos efectuados.

[287] Asimismo, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa de la necesidad de fortalecer el marco regulatorio en materia de conflictos de intereses de carácter público, que permita incrementar el efecto preventivo en la materia. En vista de esta situación, el Comité considera apropiado recomendar la siguiente medida b):

[288] b) Implementar las disposiciones que se estimen apropiados para fortalecer el marco regulatorio en materia de conflictos de intereses, para lograr una mayor desarrollo de las actividades relacionadas a la prevención de los actos de corrupción realizadas por los órganos de control en general, y por la PEP en particular.

## **1.2. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

## **1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

### Recomendación 1.3:

*Fortalecer los mecanismos con los que cuenta el Estado analizado para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.*

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Evaluar la pertinencia de asegurar mayores protecciones al funcionario que denuncie actos ilícitos, especialmente a quienes denuncien actos de corrupción en los que podrían estar involucrados sus superiores jerárquicos.*

[289] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>118</sup> el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[290] – La creación en el MP de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, con la función principal de dar atención y asistencia a todas las víctimas de delitos y administrar el programa de protección de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal. Las medidas de

---

118. *Ibidem*, pp. 6 a 8.

protección pueden ser procesales o extraprocesales, e incluyen la reserva de identidad, el uso de medios tecnológicos como la videoconferencia, y protección de la integridad física, entre otros.

[291] – La emisión del Reglamento para la Administración del Fondo Especial para la Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el Proceso Penal.

[292] – La publicación de la Ley No. 8630, que reforma parcialmente la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito para ampliar los mecanismos de protección a nivel administrativo.

[293] – El acuerdo de la DHR No. 733-DH del 2009, que crea la Dirección de Asuntos Laborales, para tramitar las denuncias laborales, y “...*al cual puede acudir el funcionario público, que está siendo objeto de amenazas o represalias en el plano laboral como consecuencia de la interposición de una denuncia por actos de corrupción, para obtener consejo en su defensa y un acompañamiento que asegure el cumplimiento del debido proceso en el procedimiento administrativo respectivo.*”

[294] – El Proyecto de Ley de reforma parcial a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que “...*pretende adicionar un artículo 4 bis a la Ley N° 8422, con el fin de incluir medidas de protección administrativa para el funcionario público, denunciante, testigo o que aporte elementos de prueba relevantes en las investigaciones preliminares o procedimientos seguidos por presuntos actos de corrupción, faltas al deber de probidad, conflicto de intereses o cualquier otra situación irregular que incida sobre la Hacienda Pública, tendientes a impedir que sufra perjuicio personal alguno en su empleo.*” El Proyecto, entre otras, le faculta a cada institución ordenar medidas de protección, de oficio o a solicitud del interesado.

[295] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 1.3 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que todavía sigue pendiente la reforma a la Ley No. 8422 contemplada, y la cual establecería medidas de proyección adicionales a los funcionarios públicos.

## **2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)**

### Recomendación 2:

*Mejorar los sistemas de control y evaluación del contenido de las declaraciones patrimoniales, ingresos, activos y pasivos y regular su publicidad.*

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico*

[296] En su respuesta al cuestionario para la Cuarta Ronda<sup>119</sup>, el Estado analizado informa lo siguiente con respecto a la anterior medida:

---

119. *Ibidem*, p. 8

[297] *“De conformidad con el artículo 24 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública –Ley N° 8422- y su Reglamento –Decreto Ejecutivo N° 32333-, el contenido de las declaraciones juradas es confidencial, por lo tanto no es susceptible de publicidad.”*

[298] En este sentido, el Comité observa que el artículo 24 de la Ley No. 8422 prevé que el contenido de las declaraciones juradas es confidencial *“sin perjuicio del acceso a ellas que requieran las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o los tribunales de la República, para investigar y determinar la comisión de posibles infracciones y delitos previstos en la Ley.”*

[299] Con respecto a lo anterior, durante la realización de la visita *in situ*, los representantes de la CGR explicaron que por mucho tiempo ha existido un debate en Costa Rica sobre si las declaraciones juradas deberían ser públicas y si esa publicidad vulneraría el derecho de intimidad de los funcionarios públicos obligados a declarar. En particular, relataron que la Sala Constitucional a dicho que la publicación de cierta información de un declarante violaría ese derecho. El Área de Denuncias e Investigaciones de la CGR, tiene previsto dentro de su Plan anual, el desarrollo de un proyecto que pretende la realización de un estudio jurídico que determine la viabilidad de la publicación total o parcial de las declaraciones.

[300] También durante la visita *in situ*, los representantes de organizaciones de la sociedad civil y académicos destacaron la utilidad que podría resultar de la publicación de las declaraciones juradas, o por lo menos de la información más relevante contenida en las mismas. En este contexto, denotaron que muchos de los casos de corrupción de alto perfil en el país han emanado de denuncias presentadas por la sociedad civil y los medios, y que se está ahora reclamando acceso a las declaraciones para que sirvan como un componente adicional de monitoreo social.

[301] El Comité considera que la publicidad de las declaraciones se vuelve todavía más importante considerando que la CGR no realiza ninguna verificación con respecto a la gran mayoría de las declaraciones juradas y que por lo tanto, son de muy poca utilidad para varios de sus fines esperados, tales como la detección de conflictos de intereses y actos de corrupción.

[302] Con respecto a los dictámenes de la Sala Constitucional, el Comité considera que el Estado analizado podría considerar la publicación de las declaraciones, sin la inclusión de la información que la Sala Constitucional ha determinado es confidencial

[303] Por lo tanto, el Comité considera del caso reformular la medida d) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera:

[304] a) Considerar la derogación de los impedimentos normativos que al momento prohíben la publicación de las declaraciones juradas de bienes.

[305] b) Considerar, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, la posibilidad de publicar las declaraciones sin incluir la información que la Corte Constitucional ha definido que violaría el derecho a la intimidad.

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer sistemas para hacer efectiva y eficiente la verificación del contenido de la declaración jurada de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, fijando plazos y ocasiones para ello;*

*fortaleciendo la facultad que tiene la CGR de programar fiscalizaciones, asegurando que esa fiscalización se aplique a un número representativo de declaraciones; y estableciendo acciones que permitan superar obstáculos para acceder a las fuentes de información que se requieran; y adoptarlas decisiones que sean necesarias a fin de que exista una colaboración entre la Contraloría General de la República y otros sectores tales como el financiero y tributario que facilite el intercambio de información dirigido a verificar el contenido de estas Declaraciones.*

[306] En su respuesta al cuestionario para la Cuarta Ronda<sup>120</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[307] – El Sistema de Declaración Jurada de Bienes (SDJB) de la CGR, el cual sirve “...*para la recepción de declaraciones en medio digital, que se constituye en una base de datos automatizada que le posibilita un ejercicio mas eficiente...tanto para verificar la calidad de la información declarada como para analizar las inconsistencias en las declaraciones y realizar verificaciones automáticas confrontando diferentes bases de datos relacionadas (internas y externas).*”

[308] Asimismo, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informa que “*para efectos de esa labor de verificación, se implementó una herramienta informática que permite relacionar la información de las declaraciones con bases de datos de otros sistemas disponibles en el órgano contralor, principalmente, de instituciones como el Registro Nacional...el Instituto Nacional de Seguros...del Consejo de Seguridad Vial...del Tribunal Supremo de Elecciones...del Instituto Costarricense de Electricidad...del Ministerio de Salud...y de la Caja Costarricense de Seguro Social...para lo cual se han firmado convenios con algunas de esas instituciones.*”

[309] Con relación a lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por Costa Rica para proceder a la implementación de los aspectos de la anterior medida que trata la colaboración entre la CGR y otros sectores. Sin embargo, no consta al Comité la colaboración con sectores importantes para la verificación de las declaraciones juradas, tales como los sectores financieros y tributarios.

[310] Asimismo, como se detalló en la sección 2 del capítulo II del presente informe, con ocasión de la visita *in situ*, los representantes de la CGR explicaron que debido a limitaciones en términos de recursos humanos, la CGR verifica solamente una muestra (poco mas de 100) de las aproximadamente 15,000 declaraciones juradas recibidas anualmente.

[311] En vista de las anteriores consideraciones, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la implementación de la anterior medida e) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe, la cual se renumerará como medida c).

[312] Por otro lado, durante la realización de la visita *in situ*, fue puesto de presente que los procuradores de la PEP, los jueces del Poder Judicial y los fiscales del MP no están comprendidos en el régimen de declaraciones juradas, y por lo tanto, no están obligados a presentar tales declaraciones. Con posterioridad a la fecha de la visite in-situ, el país analizado informó que la Ley N° 9093 del 19 de octubre de 2012, establece la obligación de los jueces y los fiscales del Ministerio Público de presentar declaraciones juradas.

---

120. *Ibidem*, pp. 9 y 10.

[313] En este sentido similar, el Comité considera, en virtud del rol importante que juega la PEP en la lucha contra la corrupción, junto con el alto perfil de muchos de los casos de corrupción que investiga y tramita la misma, que sería útil para el Estado analizado considerar la vinculación al sistema de declaración jurada de bienes, a los procuradores de ética y a los demás funcionarios de la PEP que se estimen apropiados. Por lo tanto, el Comité estima del caso formular la siguiente recomendación:

[314] d) Considerar la implementación de las disposiciones o medidas necesarias para vincular a los Procuradores de la Ética Pública y a los demás funcionarios de la PEP que se estimen apropiados, al sistema de declaraciones juradas.

### **3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)**

Recomendación 3.1. que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Fortalecer la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética Pública, la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio Público como órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control; dotándolos de los recursos necesarios para el cabal desempeño de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo; y estableciendo mecanismos que permitan la efectiva coordinación institucional de sus acciones, cuando corresponda, y una continua evaluación y seguimiento de las mismas.*

[315] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>121</sup> el Estado analizado informa lo siguiente con respecto a la anterior medida:

[316] – “Los órganos de control superior de la República de Costa Rica –CGR, PEP, MP, DHR-, han sido fortalecido en los últimos años, mediante acciones concretas, que han sido comentadas en la primera sección del presente informe, por lo que para efectos del análisis de cumplimiento de la presente recomendación, nos remitimos a lo indicado en dicho apartado.”

[317] El Comité considera del caso eliminar la recomendación 3.1 antes transcrita, teniendo en cuenta que los cuatro órganos objeto de la misma (CGR, PEP, MP y DHR) han sido analizados en las secciones 1, 2, 3 y 4, respectivamente, del capítulo II del presente informe. Por lo tanto, las recomendaciones pertinentes para el fortalecimiento de estos órganos se pueden encontrar en las secciones citadas.

Recomendación 3.2. que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Reunir información relacionada con las funciones que desempeñan los órganos de control superior tendientes a establecer mecanismos de evaluación en este tema.*

[318] En su respuesta al cuestionario para la Cuarta Ronda<sup>122</sup>, el Estado analizado informa lo siguiente con respecto a la anterior recomendación:

---

121. *Ibidem*, pp. 11-12.

[319] *“La Procuraduría de la Ética Pública ha desarrollado un sistema que registra la información relativa al trámite de las denuncias administrativas y los procesos penales por delitos contra los deberes de la función pública en los que tiene participación la Unidad. Este sistema de información permite efectuar evaluaciones sobre distintos aspectos relacionados con el fenómeno de la corrupción, derivar conclusiones, y tomar decisiones basadas en esos datos.”*

[320] *“Por su parte, la Contraloría General de la República cuenta con sistemas de información desarrollados a lo interno de la institución, que registran información relacionada con sus funciones de control. Cuenta con el sistema de declaraciones juradas, el sistema de denuncias, el sistema de fiscalización posterior, el registro de sancionados, entre otros.”*

[321] El Comité considera del caso eliminar la recomendación 3.2 antes transcrita, teniendo en cuenta que todos los órganos de control evaluados en la Primera Ronda de análisis han sido analizadas en las secciones 1, 2, 3 y 4, respectivamente, del capítulo II del presente informe, donde se han efectuado las recomendaciones pertinentes para la evaluación del cumplimiento de las funciones de las mismas.

#### **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)**

##### **4.1. Mecanismos de participación en general**

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.

##### **4.2. Mecanismos para el acceso a la información**

###### Recomendación 4.2.

*Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública.*

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Contemplar la conveniencia de integrar y sistematizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones que garanticen el acceso a la información pública.*

[322] En su respuesta al cuestionario<sup>123</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[323] – Los dos proyectos de ley para reformar a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública: el primero se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa y define los principales aspectos del derecho al acceso a la información; mientras el segundo es una iniciativa del Vicepresidente de la República, “...a partir de la cual se ha conformado un grupo de trabajo con representantes de la sociedad civil: Grupo Costa Rica Íntegra, y de órganos estatales: Tribunal

---

122. *Ibidem*, pp. 11-12.

123. *Ibidem*, p. 13.



*Supremo de Elecciones, Presidencia de la República, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Procuraduría de la Ética Pública, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República y Secretaría de la CSJ, el cual pretende elaborar un proyecto de ley consensuado, que desarrolle el derecho constitucional de acceso a la información pública.”*

[324] Con relación al acceso a la información en el Estado analizado, durante la visita *in situ*, se tuvo la oportunidad de consultar a varios sectores de la ciudadanía costarricense, incluyendo, además de representantes de los órganos del Estado, a representantes de la academia, la sociedad civil y el sector privado.

[325] En este sentido, cabe señalar en primer lugar, que aunque la mayoría de los consultados opinaron que hace mucha falta contar con una ley integral en la materia, algunos también expresaron la preocupación de que una ley podría llegar a limitar la información que podría ser accedida, a través del establecimiento de excepciones en la misma sobre que información es pública, o de requisitos burocráticos, los cuales podrían llegar a afectar negativamente el ejercicio de este derecho o erosionar la cultura de proveer información que al momento existe. A manera de ejemplo, algunos manifestaron que en algunas instituciones no existen impedimentos al acceso a la información, y que un ciudadano puede solicitar información directamente en persona, la cual es entregada inmediatamente.

[326] Sin embargo, durante la visita *in situ*, también se observaron las siguientes dificultades resultantes de la ausencia de disposiciones específicas en la materia: 1) como no hay requisitos mínimos que regulen qué información mantener, la información mantenida por las instituciones y por ende, disponible al público, es a veces muy limitada. En este sentido, en el documento de la asociación “Costa Rica Íntegra” remitido por el Programa “Estado de la Nación”, se critica la calidad de la información disponible en los informes anuales publicadas por los órganos de control y en los portales en Internet de las mismas;<sup>124</sup> 2) la dispersión normativa hace más difícil a los ciudadanos conocer que información tienen el derecho a acceder y dónde y cómo solicitarla; y 3) frente a la denegatoria de una institución de entregar información, un ciudadano tiene que recurrir a la Sala Constitucional, la cual en la mayoría de los casos, resuelve a favor de la entrega de información. En este sentido, se explicó que la Sala Constitucional, a través de sus dictámenes, ha ido definiendo el ámbito y alcance del derecho al acceso a la información.

[327] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la anterior medida b) de la recomendación de la sección 4.2 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, considerando que todavía no se cuenta con una ley integral sobre el derecho de acceso a la información. Esta medida se reenumerará como la medida a).

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Continuar fortaleciendo, tanto la creación como la labor, de las Contralorías de Servicios, dotándolas de recursos humanos, técnicos y financieros y divulgando el sistema y los servicios que ofrecen, según lo sugiere un estudio, que al efecto realizó el Estado analizado.*

---

124. Con respecto al mantenimiento de resultados que indican el cumplimiento de los objetivos y funciones de los órganos de control, tal como estándares mínimos para la información que deberían contener los mecanismos de rendición de cuentas y para el suministro de información al público, el Comité ha formulado recomendaciones en el capítulo II del presente informe.

[328] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>125</sup> el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[329] – El Decreto Ejecutivo No. 34587 de 2008, que regula la Secretaría Técnica dentro del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios como un órgano técnico dentro del Ministerio Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), encargado de dar apoyo a las contralorías, con la competencia para definirles lineamientos y directrices de mejoramiento del servicio, dar seguimiento a su labor, desarrollar acciones de capacitación, entre otras.

[330] – Las actividades realizadas por la Secretaría Técnica durante 2009 y 2010, incluyendo: 1) la permanente actualización del Registro Oficial de Contralorías de Servicios; 2) la inducción y capacitación a nuevos contralores de servicios; 3) la asesoría a los contralores de servicios en temas específicos; 4) el apoyo a diferentes actividades programadas por los contralores de servicios; 5) la participación de la Secretaría en el Comité Nacional de Políticas del Consumidor; 6) las gestiones realizadas para el nombramiento de recurso humano profesional en la Secretaría; y 7) la recepción y revisión de los Reglamentos, Manuales de Procedimientos y Planes de Trabajo de las diferentes contralorías de servicios.

[331] – La coordinación entre la Secretaría Técnica y la DHR “...para lograr apoyo en materia de contralorías de servicios, además, apoya el Proyecto Espacios de Participación Ciudadana EPC-ICE, y coordina con el Proyecto el Estado de la Nación para el Capítulo de Fortalecimiento de la Democracia desde las Contralorías de Servicios.”

[332] – Las actividades realizadas por la Secretaría Técnica en 2011, incluyendo: 1) los dos talleres realizados por la Secretaría Técnica en 2011 para el personal de las contralorías de servicio, sobre el uso de Excel para la elaboración de los informes de labores y sobre la participación ciudadana en la gestión pública, respectivamente; 2) la participación en la Feria del Día Mundial del Consumidor; 3) las sesiones de trabajo realizadas con contralorías de servicios de las municipalidades; 4) la sistematización de un taller de retroalimentación y la preparación del Plan de Trabajo 2011; 5) la revisión de los planes anuales de trabajo de las contralorías de servicios 2011; 6) la actualización de la guía metodológica para la elaboración del Informe Anual de Labores 2011; 7) las sesiones de trabajo realizadas con diferentes contralorías de servicios, para la elaboración de los Informes de Labores; 8) la elaboración del Diagnóstico del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios 2010 “Una visión actual de las Contralorías de Servicios”; 9) la realización del taller anual de evaluación y retroalimentación del funcionamiento de las contralorías de servicios y la Secretaría Técnica; 9) la provisión de asistencia técnica y evacuación permanente de consultas a las contralorías de servicios institucionales, en temas relacionados con su gestión.

[333] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida c) antes transcrita, teniendo en cuenta las actividades realizadas para fortalecer a las contralorías de servicio, incluyendo entre otros: la emisión del Decreto Ejecutivo No. 34587 y la asesoría y apoyo provisto por la Secretaría Técnica del MIDEPLAN a las contralorías de servicio.

---

125. *Ibidem*, pp. 13 a 17.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Fortalecer los mecanismos que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de manera tal que el mismo no pueda ser negado por causales diferentes a las que determine la ley o con base en criterios diferentes a los que en ella se establezcan. Previendo con ese fin, entre otros aspectos los siguientes: i) procedimientos para la recepción de solicitudes y para responder a éstas oportunamente; ii) requisitos de admisibilidad y la consecuencia si no se cumple con ellos; iii) razones por las cuales puede rechazarse una solicitud; iv) forma de comunicación al administrado; v) recursos expeditos y especializados que posibiliten, en vía administrativa recurrir la decisión del servidor público que indebidamente niegue el acceso a la información que se le solicita; y vi) aumento en el número de las sanciones existentes, a fin de cubrir un espectro más amplio de supuestos que podrían entorpecer, retardar o imposibilitar el ejercicio de este derecho y que envuelvan la conducta del servidor público.*

[334] En su respuesta al cuestionario<sup>126</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[335] – Los dos proyectos de ley para reformar a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública: el primero se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa y define los principales aspectos del derecho al acceso a la información; mientras el segundo es una iniciativa del Vicepresidente de la República, “...a partir de la cual se ha conformado un grupo de trabajo con representantes de la sociedad civil: Grupo Costa Rica Íntegra, y de órganos estatales: Tribunal Supremo de Elecciones, Presidencia de la República, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Procuraduría de la Ética Pública, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República y Secretaría de la CSJ, el cual pretende elaborar un proyecto de ley consensuado, que desarrolle el derecho constitucional de acceso a la información pública.”

[336] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la anterior medida d) de la recomendación de la sección 4.2 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, considerando que todavía no se cuenta con una ley integral que detalla los procedimientos para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Esta medida se renumerará como la medida b).

#### **4.3. Mecanismos de consulta**

##### Recomendación 4.3.

*Complementar los mecanismos de consulta vigentes, estableciendo, cuando corresponda, procedimientos que otorguen mayores oportunidades de realizar consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales.*

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*En el marco constitucional y legal vigente, considerar la posibilidad de formular normativa específica que promueva la creación y reconocimiento de instancias representativas de*

---

126. *Ibidem*, p. 18.

*organizaciones e instituciones de la sociedad civil a nivel municipal, con facultades para conocer y proponer determinadas políticas públicas, estableciendo igualmente el derecho a conocer y acceder a la información que corresponda.*

[337] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>127</sup> el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[338] – La Ley No. 3859,<sup>128</sup> sobre Desarrollo de la Comunidad, de abril de 1967, que crea la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad como órgano del Poder Ejecutivo adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, y como instrumento básico de desarrollo, encargada de fomentar, orientar, coordinar y evaluar la organización de las comunidades del país, para lograr su participación activa y consciente en la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

[339] – El artículo 15 de la Ley No. 3859, la cual prevé que las comunidades del país que deseen organizarse para realizar actividades de desarrollo integral o específico en su propio beneficio y en beneficio del país, pueden hacerlo en forma de asociaciones distritales, cantonales, regionales, provinciales o nacionales, las cuales se registrarán por las disposiciones de la presente ley.

[340] – El artículo 30 de la Ley No. 3859, que reconoce el derecho de cada localidad de inscribir una asociación integral, una o varias asociaciones para el desarrollo de actividades específicas.

[341] – La inscripción de 2526 asociaciones de desarrollo de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley No. 3859.

[342] – El Decreto Ejecutivo No. 36004, Reglamento a la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo, de mayo de 2010, cuyo artículo 8° establece que “*corresponderá a cada ente local reglamentar la participación de los vecinos en el proceso de transferencias y en el ejercicio de las competencias transferidas.*”. Sobre el particular, la respuesta explica que “*Se faculta a las autoridades municipales e intendencias, la posibilidad de incorporar a representantes de la sociedad civil, organizaciones de desarrollo, organismos no gubernamentales, entre otras, a participar en instancias tales como los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (en adelante CCCI), encargados de elaborar planes que coordinen las acciones realizadas por las instituciones públicas en un determinado territorio, identificando y promoviendo así, acciones mediante políticas públicas para atender el interés público local.*”

[343] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida d) antes transcrita, teniendo en cuenta, entre otros: la existencia de la Ley No. 3859; la creación de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad; la inscripción de miles de asociaciones de desarrollo de conformidad con la Ley No. 3859; y el Decreto Ejecutivo No. 36004, que, fomenta la participación ciudadana.

---

127. *Ibidem*, pp. 19 y 20.

128. Esta Ley fue puesta en conocimiento del Comité por primera vez en la respuesta del Estado analizado para la Cuarta Ronda, y por lo tanto no fue tomada en consideración al momento de formular la recomendación, ni en las ocasiones anteriores de seguimiento (Segunda y Tercera Ronda).

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*En el marco del ordenamiento jurídico vigente, considerar la posibilidad de formular una normativa específica que incorpore, articule y reconozca a comunidades civiles urbanas (juntas o comités vecinales) con las atribuciones y derechos de presentar iniciativas y demandas de obras y servicios de obras municipales de impacto vecinal.*

[344] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>129</sup> el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[345] – La Ley No. 3859 y su Reglamento, que le otorgan las facultades necesarias a las asociaciones de desarrollo integral para presentar iniciativas y demandas de obras y servicios municipales de impacto vecinal.

[346] – El artículo 19 de la Ley No. 3859, que requiere la creación de un fondo equivalente al 2% del estimado del impuesto sobre la renta de ese período, para financiar o facilitar el financiamiento de proyectos que le presenten las mismas asociaciones, de acuerdo con la respectiva reglamentación. El Estado analizado informa que “...el 50% de dicho fondo, se distribuye de forma automática entre las organizaciones debidamente inscritas de cada período, y el restante 50 %, constituye un fondo especial que se gira en proyectos empresariales, de infraestructura, capacitación, adquisición de bienes inmuebles y compra de maquinaria y equipo, dando prioridad a los que sean más acordes con las políticas de desarrollo del país, de conformidad con los lineamientos o directrices emanadas de las autoridades correspondientes.”

[347] – El Decreto Ejecutivo No. 34624, Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, el artículo 8° del cual reserva un espacio al representante de las asociaciones de desarrollo integral del cantón, dentro de la integración de la junta vial cantonal (un órgano público, nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, ante quien responde por su gestión, según lo establece el artículo 5°, inciso b) de la Ley No. 8114).

[348] – La Ley No. 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, que en su artículo 5° “...encarga a las juntas viales cantonales de proponer a los Concejos Municipales el destino que debe dar a los recursos girado por el Estado a las municipalidades para conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal; esta última se entenderá como los caminos vecinales, los no clasificados y las calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).”

[349] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida e) antes transcrita, teniendo en cuenta que existe una normativa bastante desarrollada que regula las atribuciones y derechos de las asociaciones de desarrollo en el sentido de la medida.

---

129. *Ibidem*, pp. 20-21.

#### **4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**

##### Recomendación 4.4:

*Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer mecanismos, adicionales a los ya vigentes, que fortalezcan la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión pública y especialmente en los esfuerzos para prevenir la corrupción, y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su utilización.*

[350] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>130</sup> el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[351] – La Ley No. 3859 y el fondo establecido en cumplimiento del mismo, para proveer apoyo a las asociaciones de desarrollo.

[352] – La estrategia de participación ciudadana de la CGR bajo desarrollo, para “...*fortalecer y/o generar acciones sistemáticas e integrales orientadas al fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía, como medio para contribuir con el control ciudadano, potenciando para ello la plataforma informática de que dispone la CGR, así como otros medios de difusión y comunicación que requieren explorarse, a fin de ofrecer un abanico de alternativas para promover la participación ciudadana activa...*”

[353] – La propuesta de participación ciudadana implementada por la DHR en coordinación con el gobierno local de la provincia de Tarrazú y la sociedad civil, para desarrollar un proyecto de transparencia que instaure una cultura de rendición de cuentas, acceso a la información y participación ciudadana, para lograr la transparencia en la gestión pública en el cantón de Tarrazú.

[354] – Las acciones desarrolladas por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), para impulsar y fortalecer la participación ciudadana en los cantones del país., incluyendo, la coordinación con las municipalidades de la inclusión de mecanismos de promoción de una cultura de participación ciudadana, en el módulo de organización y funcionamiento de los Concejos de Distrito, como parte del IX Programa Nacional de Capacitación para las Autoridades Municipales 2010-2016; programa, que se diseña y ejecuta por parte del IFAM, cada cuatro años. En este sentido, durante el transcurso de la visita *in situ*, se tuvo la oportunidad de reunirse con un representante del IFAM, para escuchar sobre este Programa Nacional.

[355] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida a) antes transcrita, teniendo en cuenta que se han y se siguen desarrollando e implementando acciones y mecanismos tendientes a promover la participación de la sociedad civil en la gestión pública y en los esfuerzos para prevenir la corrupción.

---

130. *Ibidem*, pp. 22 y 23.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Determinar que el resultado que se derive del ejercicio de esos mecanismos, pueda ser considerado necesariamente como insumo vital en el proceso de toma de decisiones*

[356] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>131</sup> el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[357] – La consulta realizada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en el 2011, “...visitando: 19 cantones, mercados, universidades, parques, estaciones de bus, en el marco del “Proyecto Costa Rica: Visión a Largo Plazo”, con el objetivo de conocer las oportunidades, fortalezas y amenazas que enfrenta el país en el campo económico, social, ambiental y de gobernabilidad. Dicha consulta sirvió de base, para la definición de los temas de largo plazo que están siendo discutidos por diversos actores de la sociedad (públicos, privados, académicos y actores sociales), que le van a permitir al MIDEPLAN definir objetivos de largo plazo y metas a efectos de garantizar el compromiso de los diversos actores sociales para su ejecución. Además, en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora” se visitaron cinco regiones del país, Región Chorotega, Región Atlántica, Pacífico Central, Huetar Norte y Brunca, con el objetivo de incorporar programas y proyectos en el Plan Nacional, con la participación de actores de cada una de esas regiones.”

[358] – El Proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralización FOMUDE, desarrollado por el IFAM, la cual, a través de una alianza con el PNUD, “...promovió la participación de más de 800 personas que, de manera voluntaria, dieron vida a los Equipos de Gestión Local, quienes, a su vez, guiaron y convocaron a más de 20.000 participantes para ponerse de acuerdo sobre un conjunto de aspiraciones y propuestas que dan contenido a 43 Planes de Desarrollo Humano Local, 186 agendas distritales y 43 Planes de Acción de dichos planes. De esta forma, la mitad del país cuenta con una potente herramienta de desarrollo local, la cual ha sido desarrollada en el marco de un proceso participativo y comprensivo; b) Con base en la Planificación del Desarrollo Local desarrollada, 41 Gobiernos Locales, con participación de 271 de sus funcionarias y funcionarios, asumieron la oportunidad de formular sus Planes Estratégicos Municipales, con un horizonte de cinco años, incluyendo un ejercicio de presupuestación ad hoc. En el marco de este proceso, se generaron también 24 Planes de Mejora para la gestión municipal.”

[359] – La elaboración por parte del IFAM del Reglamento de Planificación territorial con participación ciudadana.

[360] – La Ley No. 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la cual, en su artículo 57, establece la obligación de promover la participación en la toma de decisiones y la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios regulados.

[361] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida b) antes transcrita, teniendo en cuenta que el Estado analizado a citado ejemplos de instancias en los cuales los insumos de la sociedad civil se han considerado como insumo en la toma de decisiones.

---

131. *Ibidem*, pp. 24 y 25.

#### 4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

##### Recomendación 4.5:

*Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.*

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Considerar la implementación de programas, adicionales a los ya existentes, de difusión y capacitación dirigidos a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales sobre los aspectos tratados en las secciones 4.1 a 4.5 de este informe.*

[362] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>132</sup> el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[363] – Las actividades de capacitación realizadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), sobre el acceso a la información y los derechos de los usuarios.

[364] – El Plan Estratégico de la ARASEP 2012-2016, la cual tiene, entre sus objetivos, “...a) Formular el Plan General de Participación Ciudadana para el año 2013, que sea una guía de trabajo y que sienta las bases para una efectiva promoción de la participación ciudadana; b) Establecer convenios y acuerdos de colaboración mutua con entidades que faciliten espacios de participación ciudadana; c) Investigar e identificar la población meta para lograr una amplia participación en la promoción y fortalecimiento de organizaciones de usuarios; d) Motivar a la población en general para que conozca la ARESEP, sus funciones, objetivos y las formas de participación ciudadana para un ejercicio pleno de sus derechos como usuarios de servicios públicos; e) Incentivar a la población en general para que se organice en grupos de usuarios, con el fin de promover mecanismos para una defensa efectiva de sus derechos como usuarios de los servicios públicos; f) Orientar y promover acciones educativas con organizaciones comunales y de usuarios sobre los derechos de los usuarios, para así lograr un empoderamiento; g) Proponer un canal de comunicación alternativo e innovador mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan el acercamiento de la Autoridad Reguladora a la población en general; h) Elaborar un reglamento o resolución con los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos, que sirva como referencia para procesos de participación ciudadana e; i) Evaluar la percepción de los usuarios acerca de la gestión institucional y la calidad de los servicios públicos, con el fin de utilizarla.”

[365] – El módulo realizado por la IFAM sobre la organización y funcionamiento de los concejos de distrito para establecer un diálogo entre las municipalidades y las comunidades, con el objetivo de promover una cultura de participación ciudadana en la gestión municipal mediante el adecuado funcionamiento de los Concejos de Distrito, que permita la transparencia y rendición de cuentas, así como ejercer el control ciudadano en la gestión de los gobiernos locales.

---

132. *Ibidem*, pp. 26-29.



[366] – Las campañas de difusión promovidas por el IFAM como parte del proyecto FOMUDE, para sensibilizar a la población sobre el rol de los gobiernos locales y la importancia de la participación ciudadana.

[367] – El diseño por el IFAM, junto con la CGR, la DHR, y otras entidades del Estado, de charlas dirigidas a la ciudadanía, sobre planificación local, la participación ciudadana y los mecanismos para la misma y la gestión municipal.

[368] – Los sistemas informativos mantenidas por la CGR que sirven como un mecanismo de control para la ciudadanía, incluyendo el Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP), el Sistema de Información sobre la Actividad Contractual (SIAC) y el Sistema de Denuncia Electrónica (SIDE), Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública (SIRSA), entre otros.

[369] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida b) antes transcrita, teniendo en cuenta, entre otras, las campañas y actividades de capacitación y sensibilización hacia la ciudadanía realizadas por el IFAM, la ARESEP, y por los órganos de control.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Considerar, en el marco del ordenamiento jurídico vigente, la conveniencia de establecer mecanismos que posibiliten a las comunidades civiles y urbanas que se creen y articulen, atribuciones y facultades de control social de las obras y servicios de municipales de impacto vecinal y del uso de los recursos presupuestados y destinados a estos efectos.*

[370] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>133</sup> el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[371] – Los esfuerzos de las contralorías de servicios para complementar y reforzar mecanismos existentes de control social, por parte de las comunidades civiles y urbanas.

[372] – La iniciativa de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, para el desarrollo de un proyecto para la implementación del Programa Cartas de Compromisos con la Ciudadanía, una herramienta innovadora que pretende abrir nuevos espacios de participación ciudadana en los procesos de formulación, ejecución, gestión y evaluación de los servicios brindados por la Administración Pública.

[373] – La implementación de ocho equipos de auditoría ciudadana como parte del proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralización (FOMUDE) del IFAM, como un instrumento que permite a la ciudadanía evaluar y hacer propuestas a procesos institucionales que contribuyan a hacer más eficiente y transparente la gestión municipal.

[374] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida d) antes transcrita, teniendo en cuenta, entre otras, la existencia de mecanismos que facultan el ejercicio de vigilancia y control por parte de la sociedad civil.

---

133. *Ibidem*, pp. 30-31.

## **5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)**

Las recomendaciones formuladas en relación con esta sección fueron consideradas satisfactoriamente y por lo tanto no requieren atención adicional.

## **6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)**

Las recomendaciones formuladas en relación con esta sección fueron consideradas satisfactoriamente y por lo tanto no requieren atención adicional.

## **7. RECOMENDACIONES GENERALES**

Recomendación 7.1. que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.*

[375] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>134</sup> el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[376] – Los programas de capacitación realizados por la CGR durante 2010 y 2011 para los puestos de elección popular y los puestos designados por la Presidencia de la República, los asesores legislativos, jerarcas de la Administración Activa y legisladores. Estos programas trataron las prohibiciones de los jerarcas y sus obligaciones y responsabilidades respecto al tema de control interno y auditoría interna, la contratación administrativa y el tratamiento de denuncias, entre otros temas.

[377] – Las ocho actividades de capacitación en el ámbito municipal realizadas por la CGR en 2011, sobre las formas de acceso y oportunidades de uso de los productos y servicios de la fiscalización integral y los sistemas de información de la CGR como apoyo a la gestión municipal.

[378] – La capacitación ofrecida por la CGR en 2011, sobre la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos, el sistema específico de valoración del riesgo institucional, el control interno y auditorías internas, normas de contabilidad, contratación administrativa y el sistema de declaración jurada de bienes, entre otros.

[379] – El programa de capacitación de la PEP para concientizar a las Administraciones Públicas sobre el ejercicio ético de la función pública, incluyendo, “ética y probidad en el ejercicio de la función pública”, “responsabilidad penal y la Ley No. 8422”, “la denuncia de actos de corrupción”, “delitos por los que la PEP puede denunciar y acusar a los funcionarios”, “compromisos de Costa Rica producto de la suscripción a los convenios internacionales en materia de corrupción”, “fortalecimiento de valores personales y sociales relacionados con la ética pública”, “prohibiciones para ejercer profesiones liberales e incompatibles”, “daño social”, entre otros.

---

<sup>134</sup> *Ibidem*, p. 78.

[380] – Los eventos anuales realizados por la DHR en coordinación con la Comisión Nacional de Rescate de Valores, para enfocar la transparencia y la lucha contra la corrupción como factor de desarrollo social y económico.

[381] – Las actividades de capacitación desarrolladas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para brindar las herramientas necesarias a los responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos institucionales.

[382] – La capacitación provista por la ARASEP a sus funcionarios sobre los conflictos de intereses y el uso adecuado de los recursos públicos.

[383] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la recomendación 7.1 antes transcrita, teniendo en cuenta: 1) que el país ha venido desarrollando una serie de actividades de capacitación sobre una gran variedad de temas relacionadas a la lucha contra la corrupción en el sentido de la recomendación; y 2) que el Comité ha formulado recomendaciones específicas a los órganos de control analizado en el capítulo II del presente informe.

Recomendación 7.2 que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.*

[384] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>135</sup> el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[385] – El Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones del MESICIC en Costa Rica aprobada en 2010.

[386] – La Ley No. 8292, Ley General de Control Interno, que requiere que toda entidad u órgano sujeto a ley cuente con un sistema de control interno, con el propósito de proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, así como exigir la confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. En la respuesta también se informa que “lo anterior, permite a los jerarcas y niveles medios de dirección mantener un eficiente control sobre las diversas operaciones que realiza las instituciones y garantizar un efectivo apoyo a la toma de decisiones...”

[387] – El Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SERVI), que sirve para identificar los riesgos y adoptar las medidas para ubicarlos a nivel de riesgo aceptable, o en caso contrario, establecer mecanismos para minimizar el riesgo.

---

135. *Ibidem*, p. 78.

[388] – Otros indicadores con los que cuenta el Estado analizado, tales como el Plan Nacional de Desarrollo (PND); el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDES); seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); y elaboración del Informe de Evaluación de las Metas Nacionales del PND.

[389] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la recomendación 7.2 antes transcrita, teniendo en cuenta que el país ya cuenta con procedimientos e indicadores que permitan la verificación el seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Primera Ronda de Análisis.

Recomendación 7.3. que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.*

[390] En su respuesta al cuestionario<sup>136</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[391] – El Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones del MESICIC en Costa Rica aprobada en 2010.

[392] – La realización del V Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, en donde la CGR incorporó información relacionada con la labor conjunta de trabajo llevada a cabo entre esta institución y los auditores internos del sector público. En la respuesta al cuestionario además se informa que “*la iniciativa busca desarrollar instrumentos que permitan evaluar y fortalecer la ética institucional y las medidas para prevenir la corrupción. El proyecto incluyó un análisis del referente ético nacional e internacional, la realización de un Diagnóstico sobre la percepción de la ética en la gestión pública, así como una evaluación de los programas éticos institucionales por medio de las auditorías internas, aspectos a los cuáles se dará seguimiento y continuidad, como parte del programa de capacitación externa de la CGR.*”

[393] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la anterior recomendación 7.3 de la sección 7 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, considerando que la información suministrada indica que se van a desarrollar instrumentos de evaluación y fortalecimiento, pero que los mismos todavía no existen.

---

136. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4.

## **ANEXO 1**

### **RECOMENDACIONES VIGENTES Y REFORMULADAS SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA**

#### **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

##### **1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

###### Recomendación:

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.

###### Medidas sugeridas:

- a) Fortalecer el régimen de acceso e ingreso al servicio de la administración pública y el régimen de incompatibilidades e inhabilidades vigente tomando en cuenta, de acuerdo con los alcances que determine la ley y en relación con los cargos que ésta determine, los siguientes aspectos:
  - i. Complementar las normas de ingreso a la función pública fortaleciendo los mecanismos preventivos que faciliten la detección de posibles conflictos de intereses que puedan impedir dicho ingreso, incluyendo los altos cargos públicos.
  - ii. Desarrollar otros mecanismos que identifiquen o detecten causas supervenientes que pudieran ocurrir en el transcurso del ejercicio de la función pública y que pudieran dar lugar a un conflicto de interés.
  - iii. Considerar la posibilidad de impulsar e implementar las medidas que considere apropiadas para establecer y poner en operación sistemas y mecanismos de carácter preventivo que detecten los conflictos de intereses en la función pública. Considerando, entre otras alternativas, la viabilidad y conveniencia de crear instrumentos tales como las declaraciones o registros de intereses o actividades para ciertos cargos públicos- ya sea como parte del régimen de declaraciones patrimoniales de ingresos, activos y pasivos o independientemente de ésta-, sus respectivas actualizaciones periódicas, y la creación y mantenimiento de bases de datos que faciliten a los órganos competentes la realización de búsquedas y consultas.
- b) Implementar las disposiciones que se estimen apropiados para fortalecer el marco regulatorio en materia de conflictos de intereses, para lograr una mayor desarrollo de las actividades relacionadas a la prevención de los actos de corrupción realizadas por los órganos de control en general, y por la PEP en particular.

**1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos**

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

**1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

Recomendación:

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta el Estado analizado para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medida sugerida:

- Evaluar la pertinencia de asegurar mayores protecciones al funcionario que denuncie actos ilícitos, especialmente a quienes denuncien actos de corrupción en los que podrían estar involucrados sus superiores jerárquicos.

**2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)**

Recomendación:

Mejorar los sistemas de control y evaluación del contenido de las declaraciones patrimoniales, ingresos, activos y pasivos y regular su publicidad.

Medidas sugeridas:

- a) Considerar la derogación de los impedimentos normativos que al momento prohíben la publicación de las declaraciones juradas de bienes.
- b) Considerar, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, la posibilidad de publicar las declaraciones sin incluir la información que la Corte Constitucional ha definido que violaría el derecho a la intimidad.
- c) Establecer sistemas para hacer efectiva y eficiente la verificación del contenido de la declaración jurada de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, fijando plazos y ocasiones para ello; fortaleciendo la facultad que tiene la CGR de programar fiscalizaciones, asegurando que esa fiscalización se aplique a un número representativo de declaraciones; y estableciendo acciones que permitan superar obstáculos para acceder a las fuentes de información que se requieran; y adoptar las decisiones que sean necesarias a fin de que exista una colaboración entre la Contraloría General de la República y otros sectores tales como el financiero y tributario que facilite el intercambio de información dirigido a verificar el contenido de estas Declaraciones.

- d) Considerar la implementación de las disposiciones o medidas necesarias para vincular a los Procuradores de la Ética Pública y a los demás funcionarios de la PEP que se estimen apropiados, al sistema de declaraciones juradas.

### **3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)**

La recomendación formulada en relación con esta sección fue eliminada considerando que los órganos de control han sido específicamente analizados y se les han formulado recomendaciones específicas en el capítulo II del presente informe.

### **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)**

#### **4.1. Mecanismos de participación en general**

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.

#### **4.2. Mecanismos para el acceso a la información**

##### Recomendación:

Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública.

##### Medidas sugeridas:

- a) Contemplar la conveniencia de integrar y sistematizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones que garantizan el acceso a la información pública.
- b) Fortalecer los mecanismos que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de manera tal que el mismo no pueda ser negado por causales diferentes a las que determine la ley o con base en criterios diferentes a los que en ella se establezcan. Previendo con ese fin, entre otros aspectos los siguientes: i) procedimientos para la recepción de solicitudes y para responder a éstas oportunamente; ii) requisitos de admisibilidad y la consecuencia si no se cumple con ellos; iii) razones por las cuales puede rechazarse una solicitud; iv) forma de comunicación al administrado; v) recursos expeditos y especializados que posibiliten, en vía administrativa recurrir la decisión del servidor público que indebidamente niegue el acceso a la información que se le solicita; y vi) aumento en el número de las sanciones existentes, a fin de cubrir un espectro más amplio de supuestos que podrían entorpecer, retardar o imposibilitar el ejercicio de este derecho y que envuelvan la conducta del servidor público.

#### **4.3. Mecanismos de consulta**

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requieren atención adicional.

#### **4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

#### **4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública**

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

### **5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCION)**

Las recomendaciones formuladas en relación con esta sección fueron consideradas satisfactoriamente y por lo tanto no requieren atención adicional.

### **6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCION)**

Las recomendaciones formuladas en relación con esta sección fueron consideradas satisfactoriamente y por lo tanto no requieren atención adicional.

### **7. RECOMENDACIÓN GENERAL**

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.



**ANEXO II**  
**AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* EN**  
**COSTA RICA**

<b><u>Martes, 2 de octubre de 2012</u></b>	
8:00 hrs. – 8:30 hrs. <i>Hotel San José Palacio</i>	<b>Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</b>
8:30 hrs. – 9:00 hrs. <i>Hotel San José Palacio</i>	<b>Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica (y la Oficina o representación de la Secretaría General).</b>
9:15 hrs. – 10:30 hrs. <i>Hotel San José Palacio</i>	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.<sup>137</sup></b>
	<b>Temas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cooperación entre la sociedad civil y los órganos de control en los esfuerzos destinados a prevenir y combatir la corrupción.</b></li><li>• <b>Necesidades de mejoras para combatir la corrupción en Costa Rica.</b></li><li>• <b>Acceso a la información.</b></li></ul>
	<b><u>Participantes:</u></b>  <b><i>Programa Estado de la Nación</i></b> <i>Nombre y cargo: Jorge Vargas Cullell, Director</i>  <b><i>Costa Rica Integra contacto nacional de Transparencia Internacional</i></b> <i>Nombre y cargo: Eduardo Núñez, Presidente</i>  <b><i>Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social Costa Rica</i></b> <i>Nombre y cargo: Guido Alberto Monge Fernández, Vicepresidente Ejecutivo</i>
10:40 hrs. – 12:00 hrs. <i>Hotel San José Palacio</i>	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (Continuación).</b>
	<b>Temas:</b>

137. Se invitaron a participar a estas organizaciones y personas en virtud de lo previsto en la disposición 27 de dicha Metodología, que permite invitar a participar en estas reuniones a organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores”.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cooperación entre el sector privado y los órganos de control en los esfuerzos destinados a prevenir y combatir la corrupción.</b></li> <li>• <b>Acceso a la información.</b></li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p> <p><b><i>Cámara de Comercio de Costa Rica</i></b>  <i>Nombre y cargo: Luis Carlos Piedra, Economista</i></p> <p><b><i>Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica</i></b>  <i>Nombre y cargo: Dennia Fernández, Asistente de Presidencia</i></p> <p><b><i>Académico/ Investigador</i></b>  <i>Jorge Córdoba Ortega, Académico</i></p>
12:00 hrs. – 13:15 hrs.	<b>Almuerzo</b>
13:15 hrs. – 14:15 hrs. <i>Hotel San José Palacio</i>	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (Continuación)</b>
	<p><b>Tema:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cooperación entre el sector privado y los órganos de control en los esfuerzos destinados a prevenir y combatir la corrupción.</b></li> <li>• <b>Acceso a la información.</b></li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p> <p><b><i>Instituto de la Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX)</i></b>  <i>Nombre y cargo: Alejandro Delgado Fait, Presidente</i></p> <p><b><i>Académico/ Investigador</i></b>  <i>Pablo Barahona Krüger, autor del libro “Corrupción e Impunidad: correlaciones e implicaciones”</i></p>
14:45 hrs. – 17:45 hrs. <i>Sede de la PEP</i>	<b>Procuraduría de la Ética Pública (PEP)</b>
14:45 hrs. – 16:30 hrs.	<p><b>Panel 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introducción institucional – Propósito, funciones y estructura (10 minutos).</b></li> <li>• <b>Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional.</b></li> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas.</b></li> <li>• <b>Resultados en relación al cumplimiento de sus funciones.</b></li> </ul>

	<p><u>Participantes:</u> Nombre y cargo: <i>Gilbert Calderón Alvarado, Procurador Director</i> <i>Tatiana Gutiérrez Delgado, Procuradora</i> <i>Ricardo Jiménez Bonilla, Abogado de Procuraduría</i></p>
16:30 hrs. – 17:45 hrs.	<p><b>Panel 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dificultades</b></li> <li>• <b>Buenas Practicas (El Daño Social).</b></li> <li>• <b>Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Iniciativa sobre el acceso a la información</b></li> <li>○ <b>Mecanismos de participación</b></li> </ul> </li> </ul> <p><u>Participantes:</u> Nombre y cargo: <i>Gilbert Calderón Alvarado, Procurador Director</i> <i>Tatiana Gutiérrez Delgado, Procuradora</i> <i>Ricardo Jiménez Bonilla, Abogado de Procuraduría</i></p>
18:15 hrs. <i>Hotel San José Palacio</i>	<b>Reunión informal</b> entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<b><u>Miércoles, 3 de octubre de 2012</u></b>	
08:00 hrs. – 12:00 hrs. <i>Sede de la CGR</i>	<b>Contraloría General de la República (CGR)</b>
8:00 hrs. – 10:00 hrs.	<p><b>Panel 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introducción institucional – Propósito, funciones y estructura (10 minutos).</b></li> <li>• <b>Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional.</b></li> <li>• <b>Adopción de decisiones.</b></li> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas.</b></li> <li>• <b>Auditorías internas en la CGR.</b></li> <li>• <b>Tecnología</b></li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u> Nombres y cargos:</p> <p><i>Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de la República.</i></p> <p><i>Navil Campos Paniagua, Gerente del Área de Denuncias e Investigaciones.</i></p> <p><i>Rosa Fallas Ibañez, Gerente Asociada de la División Jurídica.</i></p> <p><i>Maritza Sanabria, Jefe de la Unidad de Gobierno Corporativo.</i></p> <p><i>Soledad Jiménez Cascante, Jefe de la Unidad de Servicios de Información.</i></p> <p><i>Manuel Martínez Sequeira, Gerente de la División de Gestión de Apoyo.</i></p>
10:15 hrs. – 12:00 hrs.	<p><b>Panel 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Declaración jurada de bienes patrimoniales, ingresos,</b></li> </ul> </li> </ul>

	<p><b>activos y pasivos – publicación e intercambio información.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Sistema de Declaración Jurada de Bienes (SDJB)</b></li> <li>○ <b>Utilización del Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública (SIRSA).</b></li> <li>○ <b>Estrategia de participación ciudadana.</b></li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u> Nombres y cargos: <i>Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de la República.</i></p> <p><i>Navil Campos Paniagua, Gerente del Área de Denuncias e Investigaciones.</i></p> <p><i>Rosa Fallas Ibañez, Gerente Asociada de la División Jurídica.</i></p> <p><i>Maritza Sanabria, Jefe de la Unidad de Gobierno Corporativo.</i></p> <p><i>Soledad Jiménez Cascante, Jefe de la Unidad de Servicios de Información.</i></p> <p><i>Manuel Martínez Sequeira, Gerente de la División de Gestión de Apoyo.</i></p>
12:00 hrs. – 13:15 hrs.	<b>Almuerzo</b>
13:15 hrs. – 14:30 hrs.	<p><b>Panel 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Iniciativa sobre el acceso a la información.</b></li> <li>○ <b>Proyecto de ley de reforma a La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.</b></li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u> Nombres y cargos: <i>Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de la República.</i></p> <p><i>Navil Campos Paniagua, Gerente del Área de Denuncias e Investigaciones.</i></p> <p><i>Rosa Fallas Ibañez, Gerente Asociada de la División Jurídica.</i></p> <p><i>Maritza Sanabria, Jefe de la Unidad de Gobierno Corporativo.</i></p> <p><i>Soledad Jiménez Cascante, Jefe de la Unidad de Servicios de Información.</i></p> <p><i>Manuel Martínez Sequeira, Gerente de la División de Gestión de Apoyo.</i></p>
15:15 hrs. – 17:45 hrs. <i>Sede del Ministerio Público</i>	<b>Ministerio Público</b>
15:15 hrs. – 17:45 hrs.	<p><b>Panel 6:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Introducción institucional – Propósito, funciones y estructura (10 minutos).</b></li> <li>● <b>Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).</b></li> <li>● <b>Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional.</b></li> <li>● <b>Adopción de decisiones.</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas.</b></li> <li>• <b>Resultados en relación al cumplimiento de sus funciones.</b></li> </ul>
	<p><b><u>Participantes:</u></b>  <b>Nombre y cargo:</b>  <i>Msc. Juan Carlos Cubillo, Fiscal Adjunto Probidad Transparencia y Anticorrupción</i>  <i>Licda. Criss Gonzáles Ugalde,</i>  <i>Licda. Claudia Villafuerte Orellana,</i>  <i>Licda. Milena Brenes Brenes,</i>  <i>Licda. Andrea Rodríguez Sandí,</i>  <i>Licda. Eida Solís Loria,</i>  <i>Licda. Patricia Badilla Abarca,</i>  <i>Lic. Jeffrey Gonzaga Flory,</i>  <i>Lic. Maurice Ghesquiere Briceño,</i>  <i>Lic. Fabian Serrano Soto,</i>  <i>Lic. Freddy Calderón Chávez.</i></p>
18:15 hrs. <i>Hotel San José Palacio</i>	<b>Reunión informal</b> entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<b><u>Jueves, 4 de octubre de 2012</u></b>	
08:30 hrs. – 11:30 hrs. <i>Sede de la DHR</i>	<b>Defensoría de los Habitantes de la República (DHR)</b>
	<p><b>Panel 7:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introducción institucional – Propósito, funciones y estructura (10 minutos).</b></li> <li>• <b>Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional.</b></li> <li>• <b>Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos.</b></li> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas.</b></li> <li>• <b>Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Propuesta de participación ciudadana.</b></li> <li>○ <b>Acceso a la información.</b></li> </ul> </li> </ul>
	<p><b><u>Participantes:</u></b>  <b>Nombres y cargos:</b>  <i>Guillermo Bonilla Alcanza, Director de Control y Gestión Administrativa.</i>   <i>Luis Richmond Solís, funcionario destacado en la Dirección de Control y Gestión Administrativa.</i>   <i>Ricardo Varela Quirós, asesor externo de la DHR.</i></p>
11:30 hrs. – 13:00 hrs.	<b>Almuerzo</b>
13:00 hrs. – 17:30 hrs.	<b>Jurisdiccional Penal de Hacienda y de la Función Pública</b>
13:00 hrs. – 15:00 hrs.	<p><b>Paneles 8:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introducción institucional – Propósito, funciones y estructura (10 minutos)</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional</b></li> <li>• <b>Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos</b></li> <li>• <b>Adopción de decisiones</b></li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p> <p><i>Licda. Marjorie Valenciano Arias</i> <i>Coordinadora Juzgado Penal, Segundo Circuito Judicial</i></p> <p><i>Licda. Rocío Pérez Montenegro</i> <i>Coordinadora de Tribunal Penal Segundo Circuito Judicial</i></p> <p><i>Licda. Yogeberth Mejías, Jueza Tramitadora</i></p> <p><i>Sr. Ernesto Bustos, Coordinador Judicial</i></p> <p><i>Dra. Jenny Quirós, Gerente Proyecto Mejora Gestión de Despachos</i></p>
15:15 hrs. – 17:30 hrs.	<p><b>Paneles 9:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas</b></li> <li>• <b>Resultados en relación al cumplimiento de sus funciones</b></li> <li>• <b>Acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad implementadas, sistemas o tecnologías modernas aplicados para el desarrollo de las labores</b></li> <li>• <b>Buenas prácticas (Juzgado Penal Digital)</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u></p> <p><i>Licda. Marjorie Valenciano Arias, Coordinadora Juzgado Penal, Segundo Circuito Judicial</i></p> <p><i>Licda. Rocío Pérez Montenegro, Coordinadora de Tribunal Penal Segundo Circuito Judicial</i></p> <p><i>Licda. Yogeberth Mejías, Jueza Tramitadora</i></p> <p><i>Sr. Ernesto Bustos, Coordinador Judicial</i></p> <p><i>Dra. Jenny Quirós, Gerente Proyecto Mejora Gestión de Despachos</i></p>
17:45 hrs. – 18:15 hrs. <i>Hotel San José</i> <i>Palacio</i>	<b>Reunión informal</b> entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
18:15 hrs. – 19:00 hrs. <i>Hotel San José</i> <i>Palacio</i>	<b>Reunión final</b> <sup>138/</sup> entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

138. El tercer párrafo de la disposición 20 de la Metodología para la realización de las Visitas In Situ señala: “...Al final de la visita in situ se realizará una reunión en que participarán los Expertos del Subgrupo, la Secretaría Técnica y el Experto Titular del Estado analizado y/o el funcionario que éste haya designado para apoyarlo de acuerdo con lo previsto en la disposición 10, segundo párrafo, de la presente Metodología. En dicha reunión se precisará, si fuere el caso, la información que excepcionalmente quede aún pendiente de suministrar el Estado analizado por conducto de la Secretaría Técnica y el término en que lo hará y se coordinará cualquier otro tema pendiente que resulte de la visita in situ.”

**AUTORIDADES DE CONTACTO DEL ESTADO ANALIZADO PARA LA  
COORDINACIÓN DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS  
MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA  
TÉCNICA DEL MESICIC**

**ESTADO ANALIZADO:**

**COSTA RICA**

Tatiana Gutiérrez Delgado

Experta Titular de Costa Rica en el Comité de Expertos del MESICIC  
Procuradora de la Ética Pública  
Procuraduría General de la República

**ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:**

**GRENADA**

Darshan Ramdhani

Fiscal General

**REPÚBLICA DOMINICANA**

Julio Simón Castaños

Encargado División Jurídica  
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)  
Ministerio de la Presidencia

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC**

Michael G. Thomas

Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica  
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA